

PERIODICO OFICIAL



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

Las Leyes, Decretos y demás disposiciones, son obligatorias por el solo hecho de publicarse en este periódico.

Para todo lo relativo a esta publicación, dirijase la correspondencia al DIRECTOR.

CALLE "FELIPE CARRILLO PUERTO" NUM. 5.—GUANAJUATO.

Registrado como artículo de 2ª clase, con fecha 1º de marzo de 1924

Año XX.—Tomo XXXVII

Guanajuato. Jueves 8 de Marzo de 1934

Número 19

SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO.

Decreto No. 341 de la XXXIV Legislatura Constitucional del Estado, relativo al nuevo CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO.—(Anexo).

SECCION AGRARIA.

Solicitudes de ejidos y Resoluciones de Expedientes 161

SECCION JUDICIAL

Edictos y Avisos..... 163

SECCION AGRARIA

Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo del Estado. Comisión Local Agraria. Guanajuato. Exp. 330.

Estudiados el dictamen aprobado por la Comisión Local Agraria y el expediente número 330, sobre dotación de ejidos promovido por los vecinos del poblado denominado «EL TERECZAN», del Municipio de Jerécuaro, de esta Entidad Federativa; y, RESULTANDO: 1º Que está correcto y legal el análisis que la Comisión Local Agraria hizo del citado expediente, habiéndose llenado los requisitos que para su tramitación señalan los artículos de 60º al 70º inclusive, del Capítulo IX de la Ley Agraria en vigor. 2º Que se tomaron en consideración y se analizaron debidamente las objeciones presentadas por los interesados durante la tramitación del expediente y dentro de los plazos legales. 3º Que teniendo en cuenta el censo levantado por el C. Miguel Aguir, Procurador de Pueblos, con relación a la rectificación censal encomendada

Folios

al Ing. Roberto Belmonte, Tonógrafo Auxiliar de la Comisión Local Agraria, así como los contratos de trabajo, debidamente comprobados por la comisión que al efecto se nombró y, por último, los informes y demás documentos que forman parte del expediente respectivo, se llega a la conclusión legal de los individuos capacitados para recibir parcela ejidal, son los siguientes: (1) Felipe Jaramillo, (3) Antonio Jaramillo, (4) Eulogio Castro, (8) Alfonso Acosta, (20) Eligio Torres, (29) Joaquín Hernández, (34) Isidro Gamboa, (42) Macario Muñoz, (51) Cruz Medrano, (52) Reful Medrano, (53) Leonardo Medrano, (55) Daniel Medrano, (59) Rafael Medrano, (60) Teódulo Castro, (61) José Lugo, (62) Arnulfo Lugo y (63) Norberto Ramírez; el número (6) Agustín Medrano, que no figura en el censo inicial, pero que debe agregarse al tener en cuenta las diligencias de rectificación mencionadas y Rosalfo y Teódulo Avila y Francisco y Octaviano Pichardo que aun cuando no figuran en el censo, sí deben ser dotados, porque del propio informe del Ing. Belmonte se desprende que llenan los requisitos a que se contraen los artículos 15º y 16º de la Ley sobre Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas en vigor. El total, pues, de individuos con pleno derecho para ser dotados de tierras, es de 22, número que sirve de base al dictamen de la Comisión Local Agraria. 4º Que de los estudios técnicos, de los informes rentísticos y demás informes sociológicos y consideraciones legales que se acumularon en el curso de la tramitación, se desprende que las fincas afectables en el presente caso son: Hacienda de «La Barran-

Departamento del Semanario de la Supremacía y Compilación de leyes de la Nación. México. Corte de Justicia de la Nación. México. D. F. co,

SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO.

Decreto No. 341 de la XXXIV Legislatura Constitucional del Estado, relativo al nuevo CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO.—(Anexo).

SECCION AGRARIA

Peticiones de ejidos y Resoluciones de Expedientes 161

SECCION JUDICIAL

Misivas y Avisos. 163

SECCION AGRARIA

Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo del Estado. Comisión Local Agraria. Guanajuato. Exp. 330.

Estudiados el dictamen aprobado por la Comisión Local Agraria y el expediente número 330, sobre dotación de ejidos promovido por los vecinos del poblado denominado «EL TEPUZAN», del Municipio de Jerécuaro, de esta Entidad Federativa; y, RESULTANDO: 1º Que está irrecto y legal el análisis que la Comisión Local Agraria hizo del citado expediente, habiéndose llenado los requisitos para su tramitación señalan los artículos de 60º al 70º inclusive, del Capítulo IX de la Ley Agraria en vigor. 2º Que tomaron en consideración y se analizan debidamente las objeciones presentadas por los interesados durante la tramitación del expediente y dentro de los plazos legales. 3º Que teniendo en cuenta el censo levantado por el C. Miguel Guízar, Procurador de Pueblos, con relación a la rectificación censal encomendada

Folios

al Ing. Roberto Belmonte, Topógrafo Auxiliar de la Comisión Local Agraria, así como los contratos de trabajo, debidamente comprobados por la comisión que al efecto se nombró y, por último, los informes y demás documentos que forman parte del expediente respectivo, se llega a la conclusión legal de los individuos capacitados para recibir parcela ejidal, son los siguientes: (1) Felipe Jaramillo, (3) Antonio Jaramillo, (4) Eulogio Castro, (8) Alfonso Acosta, (20) Eligio Torres, (29) Joaquín Hernández, (34) Isidro Gamboa, (42) Macario Mafiz, (51) Cruz Medrano, (52) Rafael Medrano, (53) Leonardo Medrano, (55) Daniel Medrano, (59) Rafael Medrano, (60) Teódilo Castro, (61) José Lugo, (62) Arnulfo Lugo y (63) Norberto Ramírez; el número (6) Agustín Medrano, que no figura en el censo inicial, pero que debe agregarse al tener en cuenta las diligencias de rectificación mencionadas y Rosalfo y Teódilo Avila y Francisco y Octaviano Pichardo que aun cuando no figuran en el censo, sí deben ser dotados, porque del propio informe del Ing. Belmonte se desprende que llenan los requisitos a que se contraen los artículos 15º y 16º de la Ley sobre Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas en vigor. El total, pues, de individuos con pleno derecho para ser dotados de tierras, es de 22, número que sirve de base al dictamen de la Comisión Local Agraria. 4º Que de los estudios técnicos, de los informes estadísticos y demás informes sociológicos y consideraciones legales que se acumularon en el curso de la tramitación, se desprende que las fincas afectables en el presente caso son Hacienda de «La Barra

Ciudadanos Diputados de la
H. XXXIV Legislatura Constitucional del Estado.
Presentes.

El Ejecutivo de mi cargo, en uso de la facultad de iniciar leyes, que le concede la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política Local, viene a presentar a ustedes la iniciativa correspondiente a un Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad, del cual acompaño, con el presente, el respectivo proyecto, teniendo en consideración las razones siguientes:

Ante la honda transformación sufrida en la época contemporánea, en el mundo de los hechos, ante la innegable oposición, creciente de día en día, entre las necesidades de la vida y los conceptos que sobre la misma existen, se ha venido operando una firme y tenaz revisión en el mundo ideológico, para conformarlo con el de la realidad.

Ya se ha logrado mucho en esta labor; pero apenas en la corteza, y la tendencia es llegar a la médula, esto es: al descubrimiento de los principios básicos, en que descansa el ideal de vida de la humanidad que en suerte le tocó vivir en estos tiempos. En todas las naciones se trabaja, con desconocida pasión, para lograr la solución de este problema. Problema arduo, inmenso, que abarca todas las actividades humanas, así en el orden del conocer como en el del sentir.

En la esfera de la vida del derecho, no obstante la encarizada lucha que se ha venido librando, casi nada se ha logrado; permanecen informando la concepción jurídica de la actualidad los principios del derecho antiguo y medioeval, que se encuentran arraigados de manera tan honda, sobre todo y casi exclusivamente en los conocedores de esta materia, que ofrecen, aún hoy, después de haberse planteado con toda algidez y precisión el problema, una inercia tan formidable, que es preciso armarse de una fe muy profunda en las verdades de nuestra propia vida y de una constancia igualmente grande a fin de no abandonar la lucha.

Se ha llegado a la verdad, verdad contingente, sólo válida para el hombre de estos tiempos, de que no puede haber un derecho general apriorístico, independiente de los intereses político-económicos; que todo derecho, por el contrario, es un producto histórico que encierra todo el conjunto de las tendencias prácticas de un pueblo, en un momento de su vida, independiente de toda idea teórica apriorística, de valor general, y que, por ello, es preciso referir el pensamiento jurídico, no a una experiencia erudita y puramente conceptual, que necesariamente no puede tener más apoyo que en sí propia, sino a la fecunda realidad de las sólidas y definidas costumbres de la existencia social, de manera que el derecho sea una genuina representación de la existencia político-económica, obteniendo con esto un derecho que corresponda tan fielmente a la concepción jurídica del medio, que no haya necesidad de un previo y profundo conocimiento doctrinal para poder comprender la generalidad de las cuestiones jurídicas, de manera que cualquier sujeto, medianamente culto, pueda discernir sobre la mayoría de los problemas comunes y elementales del derecho.

El problema actual del derecho es, seguramente, el de abstraer, de la realidad vital, los principios jurídicos fundamentales, para desarrollarlos en leyes que

correspondan, sólo entonces, a las verdaderas necesidades de la colectividad, evitando así la pugna constante entre el derecho de los tribunales y el derecho de la masa, en transformación constante, el verdadero derecho, al que hay que buscar para llevarlo allí donde siempre ha debido estar.

Indiscutiblemente que toda ordenación legislativa, si bien debe fundamentalmente tener en consideración las experiencias prácticas del medio y las necesidades que en él ha de llenar, la ordenación de estos elementos y la resolución práctica de las cuestiones, debe hacerse siguiendo un método riguroso, consecuente con las nuevas ideologías que hay que realizar en el mundo de los hechos. Esta necesidad de ordenación de los materiales históricos, debe llenarse aprovechando, no sólo las adquisiciones doctrinales del medio para el que la ley se dicte, sino también las especulaciones prestigiosas expendidas en todos los pueblos de cultura igual o semejante, ya que es una verdad por todos reconocida que la ciencia no es patrimonio de un pueblo, sino que tiene validez general para todos los grupos humanos de la misma cultura, de tal manera que una misma construcción doctrinal, como elemento formal, puede servir perfectamente, y debe ser así, para diversos pueblos, con tal que los legisladores tengan en consideración las especiales condiciones del medio en que ha de regir la ley, lo que constituirá el contenido material de ésta.

El triunfo de la revolución mexicana, en el campo de la fuerza, en el campo político y en la conciencia de una mayoría ciudadana, sin su complemento con el triunfo definitivo en la esfera del derecho, no puede ser permanente ni producir todos sus beneficios.

El Gobierno de la revolución, animado de las nuevas ideas, no quiere que sólo tengan éstas validez puramente conceptual; por el contrario, quiere llevarlas a informar toda la estructura jurídica nacional, para evitar que continúe el pueblo mexicano viviendo en la contradicción de un conceptualismo revolucionario, con

todas las molestias e injusticias legales de la época anterior, derivadas de la anacrónica legislación vigente.

El problema fundamental de México es darse un estilo propio; esta es la suprema aspiración de la Patria, llena de anhelos que, es cierto, entrechocan; pero que cada día van coordinándose, perfilándose más y más hacia una clara definición del alma nacional. Es preciso, por todos los medios, estimular la formación de una recia alma mexicana que dé un carácter y una existencia inconfundibles a este pueblo, frente a los demás del globo.

Conociendo que no puede haber postulados generales de justicia, por ser el concepto de lo justo, como todo concepto abstracto, contingente y cambiante, como lo son los postulados filosófico-sociales que norman la conducta de un gobierno, no debe pretenderse hacer leyes de viabilidad eterna; debe intentarse sólo hacer leyes que correspondan al ideal de justicia que se ha forjado la revolución; pero, sobre todo, lo esencial es hacer leyes eficaces, que realicen los ideales flotantes de mejoramiento y superación, que angustiosamente bullen, aun cuando a veces se afirme lo contrario, en la gran masa de nuestro pueblo, y que no por no haberse concretado y sistematizado en un texto, dejan de ser menos reales.

Más que la bondad intrínseca de una ley, dentro de un aspecto puramente didáctico, lo que debe buscarse es hacer leyes eficaces, que contribuyan a formar una enérgica tradición nacional, que se fortifique y perfeccione día a día, y sólo así podrá llegar a constituirse una fuerte personalidad nacional.

Por esto, lo esencial es mirar de frente a los problemas y resolverlos con nuestros propios elementos, aprovechando sólo el método, la ordenación científica dada por la doctrina; pero teniendo siempre, como material único, los palpitantes problemas de nuestra propia vida, a los que habrá que encontrarse solución legal.

El problema analizado en los párrafos precedentes reviste caracteres de especial dificultad en el Estado de Guanajuato, porque, no obstante el triunfo de la revolución y el establecimiento de gobiernos derivados de ella; no obstante también el derrumbamiento de las escuelas que apoyaban la criteriología de los regímenes pasados, y no obstante también la completa elaboración filosófico-política, en que se apoya el nuevo gobierno, casi en su totalidad, han continuado rigiendo en el Estado las leyes establecidas por los regímenes pasados, que, si satisficieron o no las aspiraciones de aquella época, se encuentran en la actualidad desprovistas de toda fundamentación que justifique su vigencia en estos tiempos.

El Ejecutivo de mi cargo, compenetrado de la necesidad de llevar a la práctica los postulados de la Revolución, y convencido de la alteza de miras de esa H. Legislatura, integrada por hombres imbuídos y convencidos de las nuevas ideas, ha presentado ya diversas iniciativas de ley que han merecido la aprobación de ese H. Cuerpo; iniciativas que, ahora leyes, están informadas por los actuales postulados político-sociales del gobierno de México, con justificación plena dentro de las ideas expuestas y en condiciones de satisfacer las imperiosas necesidades del momento que vivimos.

Siguiendo esa línea de conducta, y teniendo en consideración que el Código de Procedimientos Civiles vigente adolece de los vicios generales indicados y, particularmente, de una falta de método absoluta que da lugar a que sólo puedan medio entenderlo los iniciados en la ciencia del derecho; abierto siempre a infinidad de chicanas que hacen que los juicios se eternicen y no se logre el postulado constitucional de que la justicia sea pronta y expedita, y a que el más hábil, el más falto de escrúpulos o el más adinerado, sea el que obtenga resolución favorable y no quien tenga la justicia de su parte, por ser un Código formalista en que el juez mantiene siempre una actitud

pasiva y está obligado a olvidar como tal lo que sabe como hombre, además de una multiplicidad engorrosa de juicios, sin justificación alguna, ya que las dificultades de los problemas jurídicos derivan de la naturaleza especial de cada punto controvertido, independientemente del nombre de la acción ejercitada, y de que comprende innumerables preceptos puramente didácticos, sin contenido procesal alguno, y abarca cuestiones que corresponden a la ley sustantiva y están ya resueltas por ella, he creído de todo punto indispensable que se formulara un proyecto de Código de Procedimientos Civiles en que desaparecerán esos vicios, aprovechando, para ello, los datos de la experiencia de los tribunales de esta Entidad, de manera fundamental; pero también aprovechando los estudios hechos en otras Entidades y cristalizados ya en leyes, así como los diversos proyectos elaborados en el Distrito Federal y los Códigos sobre la materia que ahí han regido y rigen en la actualidad, así como también el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con los mencionados elementos de legislación positiva, las experiencias de los Tribunales del Estado y la consideración de las necesidades imperiosas de la vida jurídica de esta Entidad, se ha elaborado el proyecto que presento ahora a la ilustrada consideración de esa H. Legislatura, en el cual se han pretendido solucionar los diversos problemas apuntados, siguiendo los criterios que a continuación se indican, como informadores de toda la obra.

Primero.—A efecto de lograr una mayor economía procesal, se ha establecido que todos los términos sean fatales, esto es, que, fenecidos, precluye una situación procesal y la parte pierde el derecho que pudo hacer valer en tiempo, sin necesidad del inútil cuanto engorroso sistema de acuses de rebeldía. Con el mismo fin se establece que la actividad procesal se desarrolle por una sola vez, en una o dos instancias, evitándose así la pérdida de tiempo para los particulares y para las autoridades, motivada por las inútiles re-

soluciones provisionales que dejaban la cuestión de fondo para un juicio posterior en el que se resolvía definitivamente.

Segundo.—Respetando el principio de brevedad en los juicios; pero manteniendo el criterio de que en ellos tengan las partes la oportunidad suficiente para poder aportar al juicio los elementos indispensables para producir una resolución justa, se ha establecido en el proyecto un tipo único de juicio, conforme al cual habrán de ventilarse todas las controversias que den lugar a la intervención de la autoridad judicial, con lo cual se logra, además de una mejor precisión en la técnica procesal, una mayor simplicidad en el Código, que redundará en una más fácil comprensión del mismo, tanto por las autoridades como por los litigantes y que, en definitiva, hace factible una mejor justicia.

Tercero.—Con el objeto de que no sea el más hábil, el más influyente o el más capacitado económicamente el que pueda determinar el resultado definitivo de un juicio, se ha establecido la posibilidad de que los tribunales puedan decretar de oficio la recepción de pruebas, siempre que éstas estén permitidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, procurando siempre la mayor equidad entre las partes, lo cual vendrá a significar, en la práctica, que no será la torpeza o la malicia de una de las partes la que venga a falsear los datos del problema que ha de resolver la autoridad judicial, siendo esto un nuevo elemento, una nueva causa que concurre para que se imparta una justicia mejor.

Cuarto.—Con objeto también de una rápida y eficaz administración de justicia, se han suprimido en el proyecto la mayor parte de los artículos de previo y especial pronunciamiento, que sólo son un engorro para la actuación de los tribunales y que en forma alguna pueden influir en la bondad de la resolución definitiva de cada cuestión. Con este mismo objeto se han establecido responsabilidades severas para las partes, las cuales serán responsables de los gastos

ocasionados por toda promoción o diligencia inútil o maliciosa que hicieren o provocaren.

Quinto.—Los formulismos de la actual legislación que hacen imposible que los menesterosos ocurran por por si mismos a los tribunales en demanda de justicia, porque no pueden pagar a quien les aconseje la forma de proceder ante ellos, han quedado resueltos en el proyecto con el establecimiento de un juicio de paz, que se seguirá ante los Jueces municipales y en el que el Juez resolverá con un criterio de buena fe y no legista, y en el que las partes pueden presentarse a promover en la forma en que su falta de conocimientos o incapacidad de aconsejarse, les permita hacerlo, estableciéndose, para mayor seguridad de justicia, que las resoluciones dictadas en estos juicios sean revisadas por los jueces de partido, cuando alguna de las partes no estuviese conforme.

Sexto.—Con el objeto de que no se acumulen los negocios en los tribunales, con mengua de la atención que los encargados de administrar justicia deben prestar a los negocios que para ellos representan un aspecto de actualidad; para evitar el que las cuestiones que han sido llevadas ante las autoridades judiciales, para su resolución, por los interesados, queden indefinidamente estancadas, sino que, por el contrario, quede definitivamente establecido y penetre así en la conciencia de los litigantes el que una vez solicitada la intervención del poder público, con objeto de resolver cuestiones privadas, esa intervención vaya hasta su fin, resolviendo las mencionadas cuestiones, y evitándose de esta manera el que los interesados sólo muevan o agiten sus negocios cuando así les convenga y los dejen paralizados para ganar u obtener, como sucede en muchas ocasiones, ventajas indebidas sobre sus contrarios, se ha establecido en el Proyecto de Código en cuestión, una forma de concluir los litigios, cuando el abandono de las partes interesadas en él los deje paralizados. Esto queda comprendido en el capítulo denominado “Caducidad”.

Séptimo.—A efecto de substraer a los necesitados de las imposiciones de los agiotistas y demás protegidos por la fortuna, a quienes ocurren los que están en necesidad de solicitar una prestación, se ha establecido en el proyecto que no sean renunciables las pruebas y los recursos, que son las dos armas con que de antemano siempre se ha visto que el prestamista pone al que a él ocurre en condiciones de no poder defenderse en un procedimiento judicial.

Octavo.—Como simplificación del Código para su mayor entendimiento, de manera que sea más accesible a las autoridades y al público en general, se han suprimido, en el proyecto, todos los artículos de contenido puramente didáctico, sin utilidad procesal alguna e igualmente todas las disposiciones que son una inútil repetición, por estar contenidas en otras leyes que, por su naturaleza, deben contenerlas; evitándose también hacer referencias a otras leyes en su articulado, con el objeto de dar oportunidad a que éstas puedan modificarse sin haber necesidad de modificar o alterar, a la vez, la nueva legislación, tanto en su esencia como en su forma, y, cuando por la naturaleza especialmente delicada de la cuestión hubiera sido necesario citar un artículo del Código Civil, se ha preferido desenvolver el concepto para precisar el caso de referencia, dejando a la legislación civil que resuelva la cuestión en la forma en que se estime más conveniente.

Noveno.—Respecto de sucesiones, con el objeto de obtener una rápida resolución de las mismas, para que no duren indefinidamente los bienes, como actualmente sucede, sin atribución especial de su propiedad a una persona, sino en poder del albacea, como representante del acervo hereditario, el que generalmente obtiene los beneficios de que deben disfrutar los herederos, con grave perjuicio para éstos y para la sociedad misma, supuesto que esos bienes no pueden entrar a la circulación pública mientras no se haya hecho la adjudicación de los mismos, se han

establecido, en el proyecto, disposiciones energicas para el manejo de los albaceas y para la brevedad en la terminacion de los respectivos juicios, y, ademas, para defensa de los intereses fiscales del Estado, se ha establecido un sistema de aseguramiento de todos los bienes del difunto tan pronto como se tenga noticia de su muerte, pudiendo decretar este aseguramiento todos los jueces en cuya jurisdiccion se encuentren bienes de la sucesion, y, ademas se ha determinado que en todos los juicios sucesorios haya un interventor del Fisco que cuide de los intereses de este, hasta obtener su pago o debido aseguramiento.

Décimo.—Otra innovacion de importancia, contenida en el proyecto, es la siguiente: se ha dado a la autoridad judicial, segun se deja dicho arriba, un carácter activo, opuesto al absolutamente pasivo que, por regla general, tiene el juez bajo el sistema procesal actual. Con este carácter se ha impuesto a los jueces la obligacion de examinar de oficio y calificar lo que sus auxiliares, ejecutores, notificadores, etc., hacen en cumplimiento de las providencias o determinaciones que aquellos dictan, como por ejemplo emplazamientos, embargos, ejecuciones provisionales sobre bienes, para el efecto de corregir desde luego los errores en que tales auxiliares pueden incurrir. Esta innovacion es muy importante, como se deja dicho, por que tiende a evitar males y consecuencias muy graves que pueden operarse ya sea dentro de la litis misma sometida a la decision de la autoridad judicial o fuera de ella, atacandose, en este caso, derechos de personas ajenas a la contienda, y que, por esa circunstancia, quedan colocadas en situacion de no poderse defender oportunamente. Como ejemplos, en ambos casos, pueden citarse los emplazamientos practicados defectuosamente, que originan que el juicio se siga en baldio, porque, a la postre, resulta que la persona a quien se pretendió emplazar se le condenó sin haber sido oida, y los embargos, en los que es muy común que, con el fin de fraudar, se designan por el

acreedor o el deudor bienes que no pertenecen a este último, sino a personas extrañas a las relaciones que existen entre estas personas, siendo la consecuencia de ello el que se sustraiga a una persona la posesión o la libre disposición de sus bienes, sin ser oída ni vencida, ni dársele oportunidad para serlo, lo que constituye una grave violación de garantías individuales.

Prolijo sería hacer una enumeración de todas y cada una de las innovaciones que el proyecto contiene; pero las expuestas son suficientes para justificar la presente iniciativa, señalándose, solo por vía de una mayor ilustración, entre las muchas ventajas no enunciadas, las siguientes: establecimiento de un sistema efectivo de garantías para que las partes respondan en forma cierta de su responsabilidad; una completa determinación de las formas de notificación, que asegure, hasta donde sea posible, la efectividad de éstas; un sistema de ejecución, rápido y eficaz, que evita que las partes se pongan en estado de insolvencia, sin que haya necesidad de término de prueba o alegatos en el juicio, a no ser que exista oposición, la cual se sustanciará, en su caso, con arreglo a las disposiciones del juicio único, etc.

Dentro de un aspecto puramente formal, puede afirmarse, sin vacilación, la superioridad técnica del proyecto, sobre el Código en vigor, pues aquel contiene una clasificación metódica de las materias, hecha a través de las observaciones de la más moderna doctrina procesal, tanto nacional como extranjera, y esta superioridad técnica es un factor de importancia determinante de una buena administración de justicia, porque da lugar a una más fácil comprensión de la ley y, consiguientemente, a una mejor aplicación de la misma.

Convencido de la cultura de vuestras señorías y de su reconocido afán de servir al pueblo que representan, espero que se dignarán conceder su merecida atención a esta iniciativa y darle su aprobación, convirtiendo el proyecto en ley.

Protesto a ustedes las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.

Sufragio efectivo. No reelección.

Guanajuato, Gto., a 30 de abril de 1933

El Gobernador Constitucional del Estado

MELCHOR ORTEGA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER EJECUTIVO

ESTADO DE GUANAJUATO

SECRETARIA GENERAL

SECCION SEGUNDA

JUSTICIA Y REGISTRO CIVIL.

EL CIUDADANO MELCHOR ORTEGA, Gober-
nador Constitucional del Estado Libre y Sobera-
no de Guanajuato, a los habitantes del mismo,
sabed:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido diri-
girme el siguiente Decreto:

'NUMERO 341.

La H. XXXIV Legislatura Constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta:

C O D I G O

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

LIBRO PRIMERO.

Disposiciones generales.

TITULO PRIMERO.

Partes.

CAPITULO I.

Personas que pueden intervenir en un
procedimiento judicial.

Art 1º—Solamente puede iniciarse la actividad ju-
dicial a instancia de parte legítima.

Art. 2º—Puede intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga interés directo o indirecto en el negocio que amerite la intervención de la autoridad judicial.

Art. 3º—Las personas de que habla el artículo anterior intervendrán por sí o por medio de las personas que las representen de acuerdo con la Ley Civil.

Art. 4º—Mientras una persona conserve las características señaladas por el artículo 2º. será parte en el negocio judicial.

Art. 5º—Cuando haya transmisión a un tercero del interés de que habla el artículo 2º, la parte que haya transmitido sus intereses perderá aquél carácter y lo adquirirá aquél a cuyo nombre se haya verificado la transmisión.

Art. 6º—Las substituciones personales de las partes en un procedimiento judicial no afectarán a éste, a menos que dichas substituciones impliquen variación en la relación substancial.

Art. 7º—Cuando la ley o el contrato que establezca la organización de un ente colectivo dispongan que el representante, para intervenir como actor o como demandado, necesita de la autorización de aquél, cuando éste sea el demandado y no otorgue, con la oportunidad debida, tal autorización, transcurridos los términos legales, se le considerará rebelde.

Art. 8º—El Ministerio Público tendrá, dentro del procedimiento judicial, la misma situación que otra parte cualquiera, salvo las disposiciones especiales de la ley; pero estará exento de prestar las garantías que este Código u otras leyes impongan a las partes.

Contra el Estado, los Municipios o cualquiera otra entidad de derecho público no podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Las resoluciones que impongan una obligación a dichas entidades serán cumplimentadas por la autoridad correspondiente, dentro de los límites de sus atribuciones.

Art .9º—Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, deberá tener una sola representación, para lo cual nombrarán los interesados un representante común.

Si se tratare de la actora, el nombramiento de representante será hecho en la demanda o en la primera promoción, sin lo cual no se le dará curso.

Si fuere la demandada, el nombramiento se hará, a más tardar, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término del último de los emplazados, para contestar la demanda. En cualquier otro caso, el nombramiento se hará, a más tardar, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término señalado por la ley para el ejercicio de un derecho.

Si el nombramiento no fuere hecho por los interesados, dentro del término correspondiente, lo hará de oficio el juez, de entre los interesados mismos.

El representante deberá hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a todos los interesados y las personales de cada uno de ellos.

Art. 10.—Los cambios de representante procesal de una parte no causan perjuicio alguno a la contraria, mientras no sean hechos saber judicialmente. Tampoco perjudicarán a una parte los cambios operados en la parte contraria, por relaciones de causante a causahabiente, mientras no se hagan conocer en igual forma.

Cuando se verifiquen estos cambios con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, la actividad procesal se desarrollará y producirá sus efectos con toda validez, como si no se hubiese operado el cambio, en tanto no se haga saber judicialmente.

CAPITULO II.

Obligaciones y responsabilidades de las partes.

Art. 11.—La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso.

Se considera que pierde una parte cuando el juez acoje, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria.

Si dos partes pierden recíprocamente, el juez puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas.

Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del juez y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos.

Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio.

Art. 12.—Cuando la parte que pierda no haya, con su actitud, provocado el juicio, y haya en éste procedido con ecuanimidad, sin alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados, puede el juez exonerarla, en todo o en parte, del pago de las costas. En caso contrario, además de los daños y perjuicios ocasionados por el litigio, puede el juez, al condenar en costas, agravar éstas hasta en un diez por ciento.

Art. 13.—Cuando haya fundado temor de que una parte no pueda responder, en su oportunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía, cuyo monto fijará el juez, o se le embargarán bienes suficientes si no la otorga, para garantizar, a juicio del tribunal, el pago de aquéllas, sujetándose a los procedimientos de las medidas precautorias.

Art. 14.—Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el juez distribuirá, entre ellas, proporcionalmente a sus respectivos intereses, la carga de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las partes o personas que hayan obtenido, proporcionalmente también a sus respectivos intereses.

Art. 15.—En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, el fiador deberá tener bienes bastantes dentro de la circunscripción territorial del tribunal ante el cual deba otorgarse, o poseer la parte bienes raíces dentro de la misma circunscripción, sobre los que se establezca hipoteca en primer lugar, o bien, podrá consistir la garantía en depósito en efectivo, por la cantidad que fije el tribunal, constituido en una Institución de Crédito, a disposición del propio tribunal.

TITULO SEGUNDO.

Autoridad judicial.

CAPITULO I.

Competencia.

Art. 16.—Los negocios civiles son decididos, en el Estado, por los Jueces Municipales, los Jueces de Partido o las Salas del Supremo Tribunal de Justicia.

Art. 17.—No influyen sobre la competencia del juez los cambios, en el estado de hecho, acaecidos después de verificado el emplazamiento.

Art. 18.—A falta del juez normalmente competente, conocerá del negocio el que lo substituya, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 19.—Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es apelable.

Art. 20.—Ningún juez puede sostener competencia con su tribunal de apelación, pero sí con otro juez o tribunal que, aun superior en grado, no ejerza sobre él jurisdicción.

Art. 21.—Las partes pueden desistir de una competencia antes o después de la remisión de los autos al superior, si se trata de competencia por territorio.

Art. 22.—Es nulo lo actuado por el tribunal que

00010

fuere declarado incompetente, salva disposición contraria de la ley y en los casos de incompetencia superveniente.

El tribunal que resuelva la incompetencia declarará de oficio la nulidad.

SECCION PRIMERA.

Competencia por materia.

Art. 23.—Los jueces Municipales son competentes para conocer exclusivamente de los negocios, valuables en dinero, cuya cuantía no exceda de \$ 500.00 quinientos pesos, hecha excepción de los casos que interesen al Estado o a una Entidad de Derecho Público.

Art. 24.—Los jueces de partido conocerán de todos los negocios no comprendidos en el artículo anterior y de los recursos contra las resoluciones de los jueces municipales.

Art. 25.—Las Salas del Supremo Tribunal conocerán de la segunda instancia en los negocios de la competencia de los jueces de partido.

Art. 26.—El valor del negocio se fijará por lo que reclame el actor. Los réditos, daños y perjuicios no se tomarán en consideración si se refieren a época posterior a la fecha de la demanda, aun cuando en ella se reclamen.

Cuando lo reclamado no tenga un valor fijado en la demanda, atentas las condiciones del negocio, deberá el juez ante quien se presente aquélla fijarlo discrecionalmente, oyendo, en caso necesario, un perito nombrado por él, para definir la competencia, siendo apelable esta resolución. La determinación del tribunal de alzada fijará definitivamente la competencia, de tal manera que el juez declarado competente lo será para resolver el negocio, aun cuando, con posterioridad, resulte, en el procedimiento, que la cuantía del negocio no queda comprendida dentro de su competencia.

Art. 27.—En el caso de reconvención es juez competente el que lo sea para conocer de la demanda original. En negocios de la competencia de los jueces municipales, si lo reconvenido excede de su competencia, será competente para conocer del negocio el juez de partido. El mismo precepto es aplicable al caso de tercerías.

Art. 28.—Para los actos preparatorios es competente el juez que lo sea para el negocio principal.

El mismo precepto es aplicable a las medidas precautorias. Si los autos estuvieren en segunda instancia, es juez competente el que conoció en primera. En casos de urgencia, puede dictar la providencia el juez de partido o municipal del lugar en que se hallen las personas o cosas que deban ser objeto de la providencia.

SECCION SEGUNDA.

Competencia territorial.

Art. 29.—La competencia territorial es prorrogable por mutuo consentimiento de las partes, expreso o tácito.

Hay prórroga tácita:

I.—De parte del actor, por el hecho de ocurrir al tribunal, entablando su demanda;

II.—De parte del demandado, por contestar la demanda y por reconvenir al actor, y

III.—De parte de cualquiera de los interesados, cuando desista de una competencia.

Art. 30.—Por razón de territorio es juez competente:

I.—El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre cumplimiento de su obligación;

II.—El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación;

III.—El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieren situadas o abarcaren dos o más circunscripciones territoriales, será competente el juez que prevenga en el conocimiento del negocio;

IV.—El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles, o de acciones personales o del estado civil;

V.—El juez de lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio será juez competente el de la ubicación de los bienes raíces, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces es juez competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia.

Es también competente el juez de que trata esta fracción, para conocer:

- a) De las acciones de petición de herencia;
- b) De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de los bienes, y
- c) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria, y

VI.—En los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición contraria de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo será el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III.

Art. 31.—En los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado.

Art. 32.—Para suplir el consentimiento del que ejerce la patria potestad y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes.

Art. 33.—Para suplir la licencia marital y para conocer de los juicios de nulidad del matrimonio, es juez competente el del domicilio conyugal.

El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio, y, tratándose de abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado.

SECCION TERCERA.

Substanciación de las competencias.

Art. 34.—Las contiendas de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al qué se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos.

La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento del negocio y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá y substanciará en forma incidental.

En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia.

Art. 35.—Si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere, con absoluta claridad, que el litigante que promueve una competencia se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se declarará de plano mal promovida la competencia y sin lugar a decidirla, continuando su curso el negocio.

Art. 36.—Cuando dos o más tribunales se nieguen a conocer de determinado asunto, la parte interesada ocurrirá al tribunal superior común, a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer, que le envíen los expedientes en que se contengan sus respectivas resoluciones.

Recibidos los autos por dicho tribunal, citará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de ale-

gatos, que se efectuará dentro del tercer día, y en la cual pronunciará su resolución.

Art. 37.—El juez ante quien se promueva la inhibitoria, mandará librar oficio requiriendo al juez que se estime incompetente para que se abstenga de conocer del negocio. El auto que niegue el requerimiento es apelable.

Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento, y dentro del tercer día, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, se remitirán los autos al requirente. En cualquier otro caso remitirá los autos al Tribunal Superior, comunicándolo al competidor para que haga igual cosa, y ambos emplazarán a las partes para ante el propio tribunal.

Recibidos los autos en el tribunal que deba decidir la competencia, se citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia de alegatos, que se verificará dentro de los tres días siguientes a la citación, y en ella se pronunciará la resolución. Resuelta la competencia, se enviarán los autos al juez declarando competente, con testimonio de la sentencia, de la cual se remitirá otro al juez contendiente.

Art. 38.—El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro. Tampoco podrá emplearlos sucesivamente; el que hubiere dado preferencia a uno de ellos deberá pasar por su resultado.

Art. 39.—Todo tribunal está obligado a suspender sus procedimientos luego que expida la inhibitoria o luego que, en su caso, la reciba. Igualmente suspenderá sus procedimientos luego que se promueva la declinatoria; sin perjuicio de que, en los casos urgentes, pueda el tribunal practicar todas las diligencias que sean necesarias.

Art. 40.—La infracción del artículo anterior pro-

ducirá la nulidad de lo actuado. En este caso, el juez será responsable de los daños y perjuicios que se originen a las partes.

CAPITULO II.

Impedimentos.

Art. 41.—Fijada la competencia de un juez, conforme a lo dispuesto por el capítulo precedente, conocerá del negocio en que se haya fijado si no se encuentra comprendido en los siguientes casos de impedimento:

I.—Tener interés directo o indirecto en el negocio;

II.—Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consaguíneos, en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo;

III.—Tener el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, relación de intimidad con alguno de los interesados, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre;

IV.—Ser pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II;

V.—Ser, él o alguno de sus hijos, heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes;

VI.—Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes;

VII.—Haber asistido a convites que diere o costear especialmente para él alguno de los litigantes, después de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él, en su compañía, en una misma casa;

VIII.—Admitir él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes, después de empezado el negocio;

IX.—Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que se trate;

X.—Haber, por cualquier motivo, externado, siendo funcionario judicial, su opinión, antes del fallo;

XI.—Haber conocido como juez, árbitro o asesor; resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión, en la misma instancia o en alguna otra;

XII.—Seguir él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna de las partes, un proceso civil, como actor o demandado, o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante;

XIII.—Haber sido alguna de las partes o sus abogados o patronos, denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II;

XIV.—Ser él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario de cualquiera de las partes, en negocio administrativo que afecte sus derechos;

XV.—Seguir él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, algún proceso civil o criminal en que sea Juez, Agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;

XVI.—Ser tutor o curador de alguno de los interesados, y

XVII.—Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.

Art. 42.—No se estimarán como externamiento de opinión las resoluciones dictadas para fijar el procedimiento o para resolver cuestiones incidentales o de cualquiera otra naturaleza que no entrañen conocimiento del fondo de la cuestión.

Art. 43.—Lo dispuesto en el artículo 41 es aplicable a los secretarios.

Art. 44.—No es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 en los siguientes casos:

I.—En las diligencias preparatorias del juicio o de la ejecución;

II.—En la cumplimentación de exhortos o despachos;

III.—En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales aquellas en las que el tribunal no tenga que resolver cuestión alguna de fondo;

IV.—En las diligencias precautorias, y

V.—En los demás casos que no radiquen jurisdicción ni impliquen conocimiento de causa.

SECCION PRIMERA.

Excusas.

Art. 45.—Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo 41, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.

Art. 46.—Si el impedimento está comprendido en cualquiera de las dieciséis primeras fracciones del artículo 41, la resolución en que el juez o magistrado se declare impedido será irrevocable, y pasará el negocio a quien corresponda conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En igual caso, si se tratare de impedimento del Secretario, propondrá su excusa al juez o magistrado, quien, en su resolución determinará quién deba substituir a aquél en el negocio. Entre tanto se resuelve la excusa, quedará en suspenso el procedimiento.

Art. 47.—Si el impedimento estuviere comprendido en la fracción XVII del artículo 41, sólo será irrevocable la resolución si se conformaren con ella las partes; en caso contrario, remitirá el funcionario excusado el expediente a quien deba conocer de la excusa, acompañando un informe sobre el particular.

Recibidos los autos en el tribunal que deba decidir la excusa, se tramitará ésta por el procedimiento incidental.

Resuelta la excusa se devolverán los autos al funcionario que deba seguir conociendo del negocio.

En este caso, si la excusa fuere del secretario, el magistrado o juez que conozca del negocio recabará informe de aquél, y la resolverá por el procedimiento incidental, indicando, en su resolución, quién deba substituirlo. En todo caso, la resolución que decida la excusa es irrevocable.

SECCION SEGUNDA.

Recusaciones.

Art. 48.—Las partes pueden recusar a los funcionarios de que trata este capítulo, cuando estén comprendidos en alguno de los casos de impedimento.

Toda parte legítima puede hacer uso de la recusación; en los casos en que deba haber representante común, sólo éste podrá hacer uso de ella. La recusación se interpondrá ante el tribunal que conozca del negocio.

Art. 49.—Puede interponerse la recusación en cualquier estado del juicio, hasta antes de empezar la audiencia final, a menos de que, después de iniciada, hubiere cambio de personal.

En los procedimientos de ejecución no se dará curso a ninguna recusación antes de practicar el aseguramiento o de hacer el embargo o desembargo, en su caso. Tampoco se dará curso a la recusación cuando se interponga en el momento de estarse practicando una diligencia, sino hasta que ésta termine.

Art. 50.—Interpuesta la recusación se suspende el procedimiento hasta que sea resuelta, para que se prosiga el negocio ante quien deba seguir conociendo de él.

Art. 51.—Interpuesta la recusación no podrá la

parte alzarla en ningún tiempo ni variar la causa, a menos de que sea superveniente.

Art. 52.—Los magistrados y jueces que conozcan de una recusación son irrecusables para este sólo efecto.

Art. 53.—Toda recusación interpuesta con violación de alguno de los preceptos anteriores se desechará de plano.

Art. 54.—Dada entrada a una recusación, si se tratare de un secretario la resolverá, previo informe del recusado, el magistrado o juez que conozca del negocio, por el procedimiento incidental. En la resolución se determinará quién debe seguir intervinendo.

Si el recusado fuere un magistrado o juez, enviará el asunto a quien deba conocer de la recusación, acompañado de un informe; la falta de éste establece la presunción de ser cierta la causa de la recusación.

Si la causa debiere constar auténticamente, no se admitirá si no se prueba en dicha forma.

Recibido el negocio en el tribunal que debe decidir la recusación, se resolverá por el procedimiento incidental.

En todo caso la resolución que decida una recusación es irrevocable.

CAPITULO III.

Facultades y Obligaciones de los Funcionarios Judiciales.

SECCION PRIMERA.

Juez.

Art. 55.—Los jueces y magistrados tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, tanto por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales, como por parte de los funcionarios y em-

pleados de éstos, y sancionarán inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para consignarse al Ministerio Público.

La imposición de la corrección disciplinaria, se decretará en cuaderno por separado.

Art. 56.—Son correcciones disciplinarias:

I.—Apercibimiento;

II.—Multa que no exceda de cincuenta pesos, y

III.—Suspensión de empleo hasta por quince días.

Art. 57.—Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se hubiere impuesto, podrá ésta pedir, ante el mismo tribunal, que la oiga en justicia. Recibida la petición, citará el tribunal, para dentro de los ocho días siguientes, a una audiencia al interesado, en la que, después de escuchar lo que expusiere en su descargo, resolverá en el mismo acto, sin ulterior recurso.

Art. 58.—Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.

Art. 59.—Los jueces y magistrados podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento.

Art. 60.—Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio:

I.—Multa hasta de cincuenta pesos, y

II.—El auxilio de la fuerza pública.

Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.

Art. 61.—Todo juez y magistrado, actuará con secretario o testigos de asistencia.

SECCION SEGUNDA.

Secretario.

Art. 62.—En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, intervendrá el secretario y lo autorizará con su firma; hecha excepción de los encomendados a otros funcionarios y de las audiencias de conciliación en los asuntos de divorcio, en las cuales intervendrá sólo en el momento de levantarse el acta respectiva, para asentar el resultado de aquélla.

Art. 63.—El secretario hará constar el día y la hora en que se presente un escrito, y dará cuenta con él dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin perjuicio de hacerlo desde luego, cuando se trata de un asunto urgente.

Art. 64.—Los secretarios cuidarán de que los expedientes sean exactamente foliados al agregarse cada una de las hojas; rubricarán o firmarán todas éstas en el centro del escrito, y pondrán el sello de la secretaría en el centro del cuaderno, de manera que abarque las dos caras.

Art. 65.—El secretario guardará, con la seguridad debida, bajo su responsabilidad, los documentos originales que presenten los interesados. Al expediente se agregarán copias cuidadosamente cotejadas y autorizadas por el mismo secretario, sin perjuicio de que, a petición verbal de cualesquiera de los interesados, se le muestren los originales.

Art. 66.—Los secretarios son responsables de los expedientes, libros y documentos que existan en el juzgado y archivo correspondiente. Cuando, por disposición de la ley o del juez, deba entregar alguno de los mencionados objetos a otro funcionario o empleado, recabará recibo para su resguardo. En este caso, la responsabilidad pasará a la persona que lo reciba.

Art. 67.—Nunca, ni por orden judicial, entregará el secretario los expedientes a las partes, para llevarlos fuera del tribunal.

La frase “dar vista” o “correr traslado” sólo significa que los autos quedan en la secretaría para que se impongan de ellos los interesados, o que se entreguen las copias.

SECCION TERCERA.

Ministro Ejecutor.

Art. 68.—La cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba tener lugar fuera del local del juzgado, cuando no esté encomendada especialmente a otro funcionario, estará a cargo de un ministro ejecutor, que lo será el secretario o empleado del tribunal que el juez designe.

En el desempeño de su cometido, observará las disposiciones legales aplicables, absteniéndose de resolver toda cuestión de fondo, pero debiendo, sin embargo, hacer constar las oposiciones y promociones de los interesados, relativas a la diligencia.

Art. 69.—La cumplimentación de que trata el artículo anterior, será revisada, de oficio, por el juez. La revisión tendrá por objeto ordenar que se subsanen los errores cometidos en la cumplimentación. La resolución que pronuncie será apelable.

Art. 70.—Si hubiere oposición de parte de tercero contra la cumplimentación, se substanciará y resolverá aquélla por el procedimiento incidental.

TITULO TERCERO.

CAPITULO UNICO.

Litigio.

Art. 71.—Dos partes se encuentran en litigio cuando una pretende que el Derecho apoya en su favor un interés en conflicto con el interés de la otra y ésta se opone a la pretensión, o, aun no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama.

Art. 72.—Cuando las partes están de acuerdo respecto a la producción de un efecto jurídico; pero la ley no consiente que el efecto se produzca sin resolución de la autoridad judicial, necesitan ocurrir a ésta para que el efecto se produzca.

Art. 73.—Puede ser propuesta al juez una demanda tanto para la resolución de todas como para la resolución de algunas de las cuestiones que puedan surgir para la decisión de una controversia.

Art. 74.—Después de que se haya admitido por un juez demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo juez ni ante un juez diverso, salvo lo dispuesto por el artículo 73, cuando se presente nueva demanda sobre cuestiones no comprendidas en la primera. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación.

Art. 75.—Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas que derivan, en todo o en parte, del mismo hecho, de manera que éste tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden, en todo o en parte, al mismo efecto, o cuando en dos o más juicios deba resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.

En los juicios universales la acumulación procederá en la forma que en ellos se establezca.

Art. 76.—Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental.

Art. 77.—Cuando los juicios se encuentren en di-

ferentes tribunales, la acumulación se substanciará por el procedimiento señalado para la inhibitoria. El tribunal que decida la acumulación enviará los autos al que deba conocer de los juicios acumulados, cuando aquella proceda, o devolverá a cada tribunal los que haya enviado, en caso contrario.

La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable.

Art. 78.—El efecto de la acumulación es el de que los asuntos acumulados se resuelvan en una sola sentencia, para lo cual se suspenderá la tramitación de una cuestión cuando esté para verificarse en ella la audiencia final del juicio.

Art. 79.—Es válido lo practicado por los tribunales competentes antes de promoverse la acumulación. Lo que practicaren después será nulo, salvo lo dispuesto sobre providencias precautorias o disposición contraria de la ley.

Art. 80.—Cuando un juez estime que no puede resolver una controversia, sino conjuntamente con otras cuestiones que no han sido sometidas a su resolución, lo hará así saber a las partes para que amplíen el litigio a las cuestiones no propuestas, siguiendo las reglas ordinarias de la demanda, contestación y demás trámites del juicio, y, entre tanto no lo hagan, no estará obligado el tribunal a resolver. La resolución que ordene la ampliación es apelable en ambos efectos.

Art. 81.—Hecha excepción del caso del artículo 70 y de disposición contraria de la ley, cuando un tercero tenga una controversia con una o varias de las partes en juicio, y la sentencia que en éste haya de pronunciarse, deba influir en dicha controversia, si en el juicio aun no se celebra la audiencia final, pueden las partes interesadas hacer venir al tercero, formulando su demanda dentro del mismo proceso, sujetándose a las reglas ordinarias, o puede el tercero hacerlo de por sí, formulando su demanda en los mismos términos, para el efecto, en ambos casos, de que se resuelva la ter-

cería conjuntamente con la primitiva reclamación, para lo cual se suspenderá el procedimiento en el juicio inicial hasta que la tercería se encuentre en el mismo estado.

Si el tercerista coadyuva con una de las partes deben ambos litigar unidos y nombrar un representante común.

TITULO CUARTO.

Prueba.

CAPITULO I.

Reglas Generales.

Art. 82.—Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Art. 83.—Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad.

Art. 84.—El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

Art. 85.—El que niega sólo está obligado a probar:

I.—Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

II.—Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y

III.—Cuando se desconozca la capacidad.

Art. 86.—El que funda su derecho en un estado de libertad no necesita probar éste. El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alegue que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.

Art. 87.—El que afirma que otro contrajo una liga jurídica sólo debe probar el hecho o acto que la originó y no que la obligación subsiste.

Art. 88.—Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables.

Art. 89.—Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras o en usos, costumbres o jurisprudencia.

Art. 90.—El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén permitidas por la ley. Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles; los que la desechen son apelables en ambos efectos. Cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral, las diligencias respectivas serán reservadas.

Art. 91.—Los hechos notorios pueden ser invocados por el juez, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

Art. 92.—Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el juez, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las preguntas que el juez le dirija, éste debe tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de las partes no exhibe a la inspección del juez la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer.

Art. 93.—Los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad; en consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos. Los jueces tienen la facultad y el deber de compeler a los terceros, por los medios de apremio más eficaces, para que cumplan con esta obligación; pero, en caso de oposición, oirán las razones en que la funden, y resolverán sin ulterior recurso.

De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendientes, cónyuge y personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados.

Art. 94.—Los daños y perjuicios que se ocasionen a tercero, por comparecer o exhibir cosas o documentos, serán indemnizados por la parte que ofreció la prueba, o por ambas, si el juez procedió de oficio; sin perjuicio de lo que se resuelva sobre condenación en costas, en su oportunidad. La indemnización, en casos de reclamación, se determinará por el procedimiento incidental.

Art. 95.—En cualquier momento del juicio o antes de iniciarse éste, cuando se demuestre que haya peligro de que una persona desaparezca o se ausente del lugar del juicio o que una cosa desaparezca o se altere, y la declaración de la primera o la inspección de la segunda sea indispensable para la resolución de la cuestión controvertida, podrá el juez ordenar la recepción de la prueba correspondiente.

Art. 96.—La ley reconoce como medios de prueba:

- I.—La confesión;
- II.—Los documentos públicos;
- III.—Los documentos privados;
- IV.—Los dictámenes periciales;
- V.—El reconocimiento o inspección judicial;

VI.—Los testigos;

VII.—Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

VIII.—Las presunciones.

Art. 97.—Salva disposición contraria de la ley, lo dispuesto en este Título es aplicable a toda clase de negocios.

CAPITULO II.

Confesión.

Art. 98.—La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley.

Art. 99.—La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace.

Art. 100.—Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que tenga poder bastante para absolverlas o se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato.

Art. 101.—En el caso de cesión, se considera al cesionario como apoderado del cedente, para absolver posiciones sobre hechos de éste; pero, si los ignora, pueden articularse las posiciones al cedente.

Art. 102.—Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; no han de ser insidiosas; deben ser afirmativas, procurándose que cada una no contenga más de un hecho, y éste ha de ser propio del que declara.

Art. 103.—Cuando la pregunta contenga dos o más hechos, el tribunal la examinará prudentemente, determinando si debe resolverse en dos o más preguntas, o si, por la íntima relación que exista entre

los hechos que contiene, de manera que no pueda afirmarse o negarse uno, sin afirmar o negar el otro u otros, y teniendo en cuenta lo ya declarado por el absolvente al contestar las anteriores del interrogatorio, debe prevalecer como ha sido formulada.

Art. 104.—Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.

Art. 105.—Desde que se abra el juicio a prueba, hasta antes de la audiencia final, todo litigante está obligado a absolver posiciones personalmente, cuando así lo exija el que las articule.

Art. 106.—No se procederá a citar, para absolver posiciones, sino después de haber sido presentado el pliego que las contenga. Si éste se presentare cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la cubierta, que firmará el secretario.

Art. 107.—El que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más tardar, el día anterior al señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso.

Art. 108.—Si el citado a absolver posiciones comparece, el tribunal abrirá el pliego, e impuesto de ellas, las calificará, y aprobará sólo las que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 102.

Art. 109.—Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han de absolver después.

Art. 110.—En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni

otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero si el absolvente fuere extranjero, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará.

Art. 111.—Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad, el tribunal procederá al interrogatorio.

Art. 112.—Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo; pero el que las dé podrá agregar las explicaciones que considere necesarias, y, en todo caso, dará las que el tribunal le pida.

Si la parte estimare ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal, a fin de que vuelva a calificarla. Si se declara procedente, se repetirá a aquella para que la conteste, apercibida de tenerla por confesa, si no lo hace.

Art. 113.—Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular oral y directamente, en el mismo acto y previo permiso del tribunal, nuevas posiciones al absolvente. En este caso, cuando, al acabar de hacerse una pregunta, advierta el tribunal que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 102, la reprobará y declarará que no tiene el absolvente obligación de contestarla.

Art. 114.—Si la parte absolvente se niega a contestar, o contestare con evasivas, o dijere ignorar los hechos propios, el tribunal la apercibirá de tenerla por confesa, si insiste en su actitud.

Art. 115.—Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho, a su vez, de formular en el acto al articulante, si hubiere asistido, las preguntas que desee, en la forma que se dispone en el artículo 113.

Art. 116.—El tribunal puede libremente, en el acto de la diligencia, interrogar a las partes sobre todos los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

Art. 117.—Las declaraciones serán asentadas li-

teralmente, a medida que se vayan produciendo, y serán firmadas al pié de la última hoja y al margen de las demás en que se contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por la secretaría, en caso contrario.

Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer lo uno ni lo otro, firmará sólo el tribunal y hará constar esta circunstancia.

Art. 118.—Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no estar conforme con los términos en que se hayan asentado sus respuestas, el tribunal decidirá en el acto lo que proceda, determinando si debe hacerse alguna rectificación en el acta. Contra esta decisión no habrá recurso alguno.

Art. 119.—Firmadas las declaraciones por los que las hubieren producido, o, en su defecto, sólo por el tribunal, no podrán variarse ni en la sustancia, ni en la redacción.

Art. 120.—En caso de enfermedad debidamente comprobada del que deba declarar, el tribunal se trasladará al domicilio de aquél, donde se efectuará la diligencia, a presencia de la otra parte, si asistiere.

Art. 121.—Cuando el juicio se siga en rebeldía, la citación para absolver posiciones se hará publicando la determinación, por tres veces consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, a no ser que el emplazamiento se haya entendido personalmente con el demandado, su representante o apoderado, pues en tal caso, la citación se hará por rotulón.

Art. 122.—Si el que debe absolver las posiciones estuviere ausente, aun cuando tenga casa señalada para recibir notificaciones, se librará el correspondiente exhorto o despacho, acompañando, en sobre cerrado y sellado, el pliego en que consten las preguntas. En este caso, se abrirá el pliego, y, calificadas las preguntas, se sacará copia de las que fueren aprobadas, la cual se guardará en el secreto del tribunal,

debidamente autorizada, remitiéndose el original con el exhorto o despacho, para que se haga el examen al tenor de las posiciones que hubiere aprobado el tribunal del juicio. Si el interesado ignorare el lugar en que se encuentre el absolvente, la citación se hará por edictos, y, además, en el domicilio señalado.

Art. 123.—Para los efectos del artículo anterior, el que promueva la prueba de confesión deberá hacer su petición y presentar el pliego que contenga las posiciones, con la anticipación debida, a efecto de que el exhorto o despacho pueda estar diligenciado en poder del tribunal antes de la audiencia final del juicio.

Art. 124.—El tribunal que fuere requerido para la práctica de una diligencia de confesión, se limitará a diligenciar el exhorto o despacho con arreglo a la ley, y devolverlo al tribunal de su origen; pero no podrá declarar confeso a quien deba absolver las posiciones.

Art. 125.—Cuando la diligencia de confesión fuere practicada por un tribunal requerido por el del juicio, si, después de contestado el interrogatorio, formulare, en el mismo acto, nuevas posiciones el articulante o quien sus derechos represente, obrará el tribunal de la diligencia como se dispone en el artículo 113.

Art. 126.—Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase, a menos de que se trate de hechos ignorados por ella al producir la confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores, acreditados en igual forma.

Art. 127.—La parte legalmente citada a absolver posiciones, será tenida por confesa en las preguntas sobre hechos propios que se le formulen.

I.—Cuando sin justa causa no comparezca.

II.—Cuando insista en negarse a declarar.

III.—Cuando al declarar insista en no responder.

afirmativa o negativamente, o en manifestar que ignora los hechos;

IV.—Cuando obre en los términos previstos en las dos fracciones que anteceden, respecto a las preguntas que le formule el tribunal, conforme al artículo 116.

Art. 128.—En el primer caso del artículo anterior, el tribunal abrirá el pliego de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración.

En los demás casos, el tribunal, al terminarse la diligencia, hará la declaración de tener por confesa a la parte.

Art. 129.—El auto que declare confesa a una parte y el que niegue esta declaración son apelables.

Se tendrá por confeso al articulante, y, sólo en lo que le perjudique, respecto a los hechos propios que consten en las posiciones que formule, y contra ellos no se le admitirá prueba de ninguna clase.

Art. 130.—Las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la administración pública, absolverán posiciones por medio de oficio en que se insertarán las preguntas que quiera hacerles la contraparte, para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que designe el tribunal. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contestare dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente, afirmando o negando los hechos.

Art. 131.—En el caso del artículo anterior y en el de la fracción I, del 127, la declaración de confeso se hará a instancia de parte, en todo tiempo, hasta antes de la audiencia final del juicio.

En cualquier estado del juicio en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan articularse nuevamente posiciones.

CAPITULO III.

Documentos Públicos y Privados.

Art. 132.—Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público, revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

Art. 133.—Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.

Art. 134.—Para que hagan fe en el Estado los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos que fije el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 135.—De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor.

Art. 136.—Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 132.

Art. 137.—Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza que obre en las oficinas públicas, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza.

Art. 138.—Los documentos existentes en un lugar distinto de aquél en que se sigue el negocio, se compulsarán a virtud de despacho o exhorto que dirija el

tribunal de los autos al del lugar en que aquéllos se hallen.

Art. 139.—Los documentos privados se presentarán originales, y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulsa la parte que señalen los interesados.

Art. 140.—Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia testimonial se tomará en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados a llevar al tribunal los libros de cuentas, ni a más que a presentar las partidas o documentos designados.

Art. 141.—Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se nieguen o que se ponga en duda la autenticidad de un documento privado: Para este cotejo, se procederá con sujeción a lo que se previene en el capítulo IV, de este Título.

Art. 142.—La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos indubitados, con que deba hacerse, o pedirá al tribunal que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letra o huella digital que servirá para el cotejo.

Art. 143.—Se considerarán indubitados para el cotejo:

I.—Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo;

II.—Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidas en juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa;

III.—Los documentos cuya letra, firma o huella digital ha sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se atribuya la dudosa; exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha en rebeldía.

IV.—El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique, y

V.—Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar.

Art. 144.—Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, se observarán las prescripciones relativas del Código de Procedimientos en materia criminal. En este caso, si el documento puede ser de influencia notoria en el pleito, no se efectuará la audiencia final del juicio, sino hasta que se decida sobre la falsedad por las autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el documento renuncie a que se tome como prueba.

Cuando concluya el procedimiento penal sin decidir si el documento es o no falso, el tribunal de lo civil concederá un término de diez días para que rindan las partes sus pruebas, a fin de que, en la sentencia, se decida sobre el valor probatorio del documento.

Art. 145.—Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces; los exhibidos con posterioridad, podrán serlo en igual término, contado desde que surta efectos la notificación del auto que los haya tenido como pruebas.

CAPITULO IV.

Prueba Pericial.

Art. 146.—La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo previene la ley.

Art. 147.—Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que ha de oirse su parecer, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados.

Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o, estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a juicio del juez, aun cuando no tengan título.

Art. 148.—Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.

Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan.

Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados.

Art. 149.—La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo.

El tribunal concederá a las demás partes el término de tres días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndoles que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promoviente.

Si pasados los tres días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición de un perito tercero, el tribunal, de oficio, nombrará al uno y al otro, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 148, en su caso.

Art. 150.—Los peritos nombrados por las partes serán presentados por éstas al tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas de habérseles tenido como tales, a manifestar la aceptación y protesta de desem-

peñar su encargo con arreglo a la ley. Si no lo hicieron o no aceptaren, el tribunal hará, de oficio, desde luego, los nombramientos que a aquéllas correspondía. Los peritos nombrados por el tribunal serán notificados personalmente de su designación, para que manifiesten si aceptan y protestan desempeñar el cargo.

Art. 151.—El Juez señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si él debe presidirla.

En cualquier otro caso, señalará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen.

El Juez deberá presidir la diligencia cuando así lo solicite alguna de las partes y lo permita la naturaleza del reconocimiento, pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes, y exigirles la práctica de nuevas diligencias.

Art. 152.—En el caso del párrafo final del artículo anterior, se observarán las reglas siguientes:

I.—El perito que dejare de concurrir sin causa justa, calificada por el juez, será responsable de los daños y perjuicios que por su falta se causaren;

II.—Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir los interesados al acto y hacerles cuantas observaciones quieran; pero deberán retirarse para que los peritos discutan y deliberen solos. Los peritos estarán obligados a considerar, en su dictamen, las observaciones de los interesados y del juez;

III.—Los peritos darán inmediatamente su dictamen, siempre que lo permita la naturaleza del reconocimiento; de lo contrario, se les señalará un término prudente para que lo rindan.

Art. 153.—Cuando el juez no asista a la diligencia, los peritos practicarán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de las partes.

Art. 154.—Si los peritos están conformes, extenderán su dictamen en un mismo escrito que presentarán, o en una acta que harán asentar por el secretario del tribunal, firmando los dos. Si no lo estuvieren,

formularán su dictamen en escrito por separado, del que acompañarán una copia.

Art. 155.—Rendidos los dictámenes, dentro de las cuarenta y ocho horas del últimamente presentado, los examinará el tribunal, y, si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre que debe versar el parecer pericial, mandará, de oficio, que, por notificación personal, se hagan del conocimiento del perito tercero, entregándole las copias de ellos y previniéndole que, dentro del término que le señale, rinda el suyo. Si el término fijado no bastare, el tribunal podrá acordar, a petición del perito, que se le amplié.

El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos.

Art. 156.—El perito que no rinda su dictamen o lo rinda después del término señalado, sin causa justificada, será responsable de los perjuicios que se causen a la parte por la que hubiere sido nombrado, sin que pueda nombrarse nuevo perito.

Art. 157.—Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases que, en su caso, fije la ley.

Art. 158.—Si el objeto del dictamen pericial fuere la práctica de un avalúo, los peritos tenderán a fijar el valor comercial, teniendo en cuenta los precios de plaza, los frutos que en su caso produjere o fuere capaz de producir la cosa, objeto del avalúo, y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial.

Art. 159.—El perito tercero que nombre el juez puede ser recusado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se notifique su nombramiento a los litigantes, por las mismas causas que pueden serlo los jueces; pero si se tratare de perito nombrado en rebeldía de una de las partes, sólo ésta podrá hacer uso de la recusación.

Art. 160.—La recusación se resolverá por el juez, por el procedimiento incidental, a menos que el perito confesare la causa, caso en el cual se admitirá des-

de luego la recusación y se procederá al nombramiento de nuevo perito.

Art. 161.—Contra el auto en que se admita o deseché la recusación, no procede recurso alguno.

Art. 162.—Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró, o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas.

Art. 163.—Para el pago de los honorarios de que trata el artículo anterior, los peritos presentarán al tribunal la correspondiente regulación, de la cual se dará vista, por el término de tres días, a la parte o partes que deban pagarlos.

Transcurrido dicho término, contesten o no las partes, hará el juez la regulación definitiva y ordenará su pago, teniendo en consideración, en su caso, las disposiciones arancelarias. Esta resolución es apelable si los honorarios reclamados exceden de mil pesos.

En caso de que el importe de honorarios se hubiere fijado por convenio, se estará a lo que en él se establezca.

CAPITULO V.

Reconocimiento o Inspección Judicial.

Art. 164.—La inspección judicial puede practicarse a petición de parte o por disposición del juez, con citación previa y expresa, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda y que no requieran conocimientos técnicos especiales.

Art. 165.—Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.

Art. 166.—De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurren.

Art. 167.—A juicio del juez o a petición de parte, se levantarán planos o se sacarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados.

CAPITULO VI.

Prueba Testimonial.

Art. 168.—Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.

Art. 169.—Una parte sólo puede presentar hasta cinco testigos sobre cada hecho.

Art. 170.—Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder por sí misma hacer que se presenten.

Los que, citados legalmente, se nieguen a comparecer, sin causa justificada, y los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, serán apremiados por el tribunal.

Art. 171.—Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a declarar, serán satisfechos por la parte que los llamare, en los términos del artículo 94, salvo siempre lo que se decida sobre condenación en costas.

Art. 172.—Los funcionarios públicos o quienes lo hayan sido, no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamente cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados á declarar.

Art. 173.—A los ancianos de más de 70 años, a las mujeres y a los enfermos, podrá el tribunal, según las circunstancias, recibirles la declaración en la casa en que se hallen en presencia de la otra parte, si asistiere.

Art. 174.—A los funcionarios públicos menciona-

dos en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado, generales con mando y jefes superiores de las oficinas federales, se les pedirá su declaración por oficio y en esta forma la rendirán, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en el artículo 177; sin embargo, si los expresados funcionarios lo estimaren pertinente y lo ofrecieren en respuesta al oficio que se les dirija, podrán rendir su declaración personalmente.

Art. 175.—La parte que desee rendir prueba testimonial, deberá promoverla dentro de los quince primeros días del término ordinario o del extraordinario, en su caso.

Art. 176.—Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes o sus abogados al testigo. Primero interrogará el promovente de la prueba y a continuación las demás partes, pudiendo el tribunal, en casos en que la demora pueda perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que a raíz de una respuesta hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella, o formularlas el propio tribunal.

Art. 177.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el testigo resida fuera del lugar del negocio, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios, con las copias respectivas para las demás partes, las cuales serán puestas a su disposición, en el mismo auto en que se mande recibir la prueba, para que, dentro de tres días, presenten, en pliego cerrado, si quisieren, su interrogatorio de repreguntas; pero si lo presentaren después, no les será admitido, sin perjuicio de que, en todo caso pueda la parte interesada presentarse a repreguntar directamente ante el tribunal requerido, el que hará la calificación de las repreguntas.

Para el examen de los testigos que no residan en el lugar del negocio, se librárá recado al tribunal que ha de practicar la diligencia, acompañándole, en plie-

go cerrado, los interrogatorios, previa la calificación correspondiente.

Art. 178.—Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas en términos claros y precisos; han de ser conducentes a la cuestión debatida; se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho y no hechos o circunstancias diferentes, y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva.

Art. 179.—Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirlo de la pena en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de su residencia, ocupación, domicilio, si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito, o en otro semejante y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A continuación, se procederá al examen.

Art. 180.—El tribunal vigilará el interrogatorio que las partes formulen, y cuando una pregunta no se ajuste a los términos legales la desaprobará, haciéndose constar en autos.

Art. 181.—Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil.

Art. 182.—Cuando el testigo deje de contestar a algún punto, o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del tribunal para que, si lo estima conveniente, exija a aquél las respuestas y aclaraciones que procedan.

Art. 183.—El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos testigos, asentándose todo en el acta.

Art. 184.—Si el testigo no habla el castellano, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete. Este último deberá, antes de desempeñar su encargo, protestar hacerlo lealmente, haciéndose constar esta circunstancia.

Art. 185.—Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma que al mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta formulada. Sólo cuando expresamente lo pida una parte, respecto a preguntas especiales, puede el tribunal permitir que primero se escriba textualmente la pregunta y a continuación la respuesta.

Art. 186.—Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí, y el tribunal deberá exigirla.

Art. 187.—El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga, después de habérsele leído o de que la lea por sí mismo y la ratifique. Si no puede o no sabe leer, la declaración será leída por el Secretario, y, si no puede o no sabe firmar, imprimirá sus huellas digitales, y sólo en caso de que no pueda hacerlo, se hará constar esta circunstancia.

Art. 188.—La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en la substancia, ni en la redacción.

Art. 189.—Con respecto a los hechos sobre que haya versado un examen de testigos, no puede la misma parte volver a presentar prueba testimonial en ningún momento del juicio.

Art. 190.—En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad. Para la prueba de las circunstancias alegadas se concederá

un término de diez días, y, cuando sea testimonial, no se podrán presentar más de tres testigos sobre cada circunstancia. El dicho de estos testigos ya no puede impugnarse por medio de prueba, y su valor se apreciará en la sentencia, según el resultado de la discusión en la audiencia final del juicio.

Art. 191.—Al valorar la prueba testimonial, el tribunal apreciará las justificaciones relativas a las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, ya sea que éstas hayan sido alegadas, o que aparezcan de autos.

CAPITULO VII.

Fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Art. 192.—Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Art. 193.—Para que las fotografías de documentos surtan efectos probatorios, es necesario que en ellas se certifique haber sido tomadas y corresponder exactamente al contenido del documento a que se refieren.

Art. 194.—En todo caso en que se necesiten conocimientos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, podrá el juez oír el parecer de un perito nombrado por él.

CAPITULO VIII.

Presunciones.

Art. 195.—Las presunciones son:

I.—Las que establece expresamente la ley, y

II.—Las que se deducen de hechos comprobados.

Art. 196.—Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando para las primeras exista prohibición expresa de la ley.

Art. 197.—La parte que alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido.

Art. 198.—La parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los supuestos de aquélla.

Art. 199.—La parte que impugne una presunción debe probar contra su contenido.

Art. 200.—La prueba producida contra el contenido de una presunción, obliga al que la alegó a rendir la prueba de que estaba relevado en virtud de la presunción.

Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones que mutuamente se destruyan, se aplicará, independientemente para cada una de ellas, lo dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 201.—Si una parte alega una presunción general que es contradicha por una presunción especial alegada por la contraria, la parte que alegue la presunción general está obligada a producir la prueba que destruya los efectos de la especial, y la que alegue ésta sólo queda obligada a probar contra la general cuando la prueba rendida por su contraparte sea bastante para destruir los efectos de la presunción especial.

CAPITULO IX.

Valuación de la Prueba.

Art. 202.—El juez goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria, a menos que la ley fije las

reglas para hacer esta valuación, observando sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.

Art. 203.—No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes de este Título, a menos que sólo teniéndolas en consideración pueda el tribunal formar su convicción respecto a los hechos de que se trata. En este caso, deberá fundar especial y cuidadosamente esta parte de su fallo.

Art. 204.—La confesión expresa hará prueba plena cuando concurren en ella las circunstancias siguientes:

I.—Que sea hecha por persona capacitada para obligarse;

II.—Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, y

III.—Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.

Art. 205.—Los hechos propios de las partes aseverados en la demanda en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

Art. 206.—La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuando no haya pruebas que la contradigan.

Art. 207.—Los documentos públicos hacen prueba plena. Los procedentes del extranjero tendrán el valor probatorio que les conceda el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 208.—El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa.

El escrito privado que contenga una declaración

de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados.

Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado.

Art. 209.—Quien sea el autor de un escrito privado, se demuestra sólo con la subscripción, salva la excepción de que trata el artículo 211.

Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe.

La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo, ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor si no están escritas por su mano ó no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción.

Art. 210.—Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado suscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 145, que la subscripción haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer que haya sido puesta por el que aparece como subscriptor, si éste es un tercero, se tendrá la subscripción por reconocida. En caso contrario, la verdad de la subscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, de conformidad con los capítulos anteriores.

Si la subscripción está certificada por Notario o por cualquier otro funcionario revestido de la fe pública, se tendrá como auténtica y tendrá el mismo valor que un documento público indubitado.

Art. 211.—Quien es el autor de un documento privado, se demuestra, aun sin la subscripción, para aquel documento que, según los usos comunes, no se acostumbra suscribir, como, por ejemplo, los registros domésticos y los libros de comercio.

Si la parte contra la cual se propone un documento de esta naturaleza no objeta, dentro del término fijado por el artículo 145, ser su autor, ni declara no reconocer como tal al tercero indicado por quien lo presentó, se tendrá al autor por reconocido. En caso contrario, la verdad del hecho de que el documento haya sido escrito por cuenta de la persona indicada, debe demostrarse por prueba directa, de acuerdo con los capítulos anteriores de este Título.

En los casos de este artículo y en los del anterior no tendrá valor probatorio el documento no objetado, si el juicio se ha seguido en rebeldía, pues entonces es necesario el reconocimiento del documento, el que se practicará con sujeción a las disposiciones sobre confesión y surtirá sus mismos efectos.

Art. 212.—Las copias hacen fe de la existencia de los originales, conforme a las reglas precedentes.

Art. 213.—Los escritos privados hacen fe de su fecha, en cuanto ésta indique un hecho contrario a los intereses de su autor.

Art. 214.—Si un documento privado contiene juntos uno o más hechos contrarios a los intereses de su autor y uno o más hechos favorables al mismo, la verdad de los primeros no puede aceptarse sin aceptar al propio tiempo la verdad de los segundos, en los límites dentro de los cuales los hechos favorables suministren a aquel contra el cual esté producido el documento, una excepción o defensa contra la prestación que apoyan los hechos que le son contrarios.

Art. 215.—El documento privado que un litigante presente, prueba plenamente en su contra, de acuerdo con los artículos anteriores.

Art. 216.—El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del juez.

Art. 217.—El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena cuando se refiera a puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales.

Art. 218.—Para los casos en que se haya extraviado o destruido el documento público o privado y para aquél en que no pueda disponer, sin culpa alguna de su parte, quien debiera presentarlo y beneficiarse con él, tales circunstancias pueden acreditarse por medio de testigos, los que exclusivamente servirán para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede la parte presentar el documento; más de ninguna manera para hacer fe del contenido de éste, el cual se probará, sólo por confesión de la contraparte, sin perjuicio de las pruebas de otra clase para acreditar directamente la existencia de la obligación o de la excepción que debía probar el documento.

En este caso no será admisible la confesión ficta cuando el emplazamiento se haya verificado por edictos y se siga el juicio en rebeldía.

Art. 219.—El testimonio de los terceros no hace ninguna fe cuando se trate de demostrar:

I.—El contrato o el acto de que debe hacer fe un documento público o privado;

II.—La celebración, el contenido o la fe de un acto o contrato que debe constar, por lo menos, en escrito privado, y

III.—La confesión de uno de los hechos indicados en las dos fracciones precedentes.

Art. 220.—El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del juez, quien, para apreciarla, tendrá en consideración:

I.—Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes;

II.—Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que deponen;

III.—Que por su edad, capacidad e instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar del acto;

IV.—Que por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad;

V.—Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaran y no por inducciones ni referencias de otras personas;

VI.—Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas, ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales;

VII.—Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y

VIII.—Que den fundada razón de su dicho.

Art. 221.—Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por su dicho, siempre que éste no esté en oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso su valor quedará a la prudente apreciación del juez.

Art. 222.—El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas o de otras cualesquiera, aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio del juez, quien, para fijarlo, observará lo dispuesto por los artículos anteriores de este capítulo.

Art. 223.—Las presunciones legales que no admiten prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor, mientras no sean destruídas.

El valor probatorio de las presunciones restantes, quedará al prudente arbitrio del juez.

TITULO QUINTO.

Capítulo Unico.

Resoluciones Judiciales.

Art. 224.—En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad y la determinación judicial, y se firmarán por el juez o magistrado que corresponda, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.

Art. 225.—Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias: decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.

Art. 226.—Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el Secretario con la promoción respectiva. Lo mismo se observará respecto de los autos que, para ser dictados, no requieran citación para audiencia; en caso contrario, se pronunciarán dentro del término que fija la ley, o, en su defecto, dentro de cinco días. La sentencia se dictará en la forma y términos que previenen los artículos 355 y 356 de este Ordenamiento.

Art. 227.—Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.

Art. 228.—Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia o de un auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los dos días siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame.

Art. 229.—El tribunal resolverá, dentro de los tres días siguientes, lo que estime procedente; sin que pueda variar la substancia de la resolución.

Art. 230.—El auto que resuelva sobre la aclaración o adición de una resolución, se reputará parte integrante de ésta, y no admitirá ningún recurso.

Art. 231.—La aclaración o adición, interrumpe el término para apelar.

TITULO SEXTO.

Recursos.

CAPITULO I.

Revocación.

Art. 232.—Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio.

Art. 233.—La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o dentro del día siguiente de notificado el recurrente.

Art. 234.—Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por el término de tres días, y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día.

Art. 235.—Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso.

CAPITULO II.

Apelación y Revisión Forzosa.

Art. 236.—El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados.

Art. 237.—La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero.

Art. 238.—La apelación admitida en ambos efectos suspende, desde luego, la ejecución de la sentencia o del auto, hasta que éstos causen ejecutoria, y,

entre tanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieran a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos.

Art. 239.—La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado.

Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará, en el Juzgado, copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, remitiéndose el expediente original al tribunal de segunda instancia.

Si se tratare de un auto, en el de admisión se mandará remitir al tribunal copia del apelado, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionada con las que señalen las demás partes dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto que ordene la remisión de la copia.

Si el apelante no señalare constancias al interponer el recurso, se tendrá por no interpuesto. Si las demás partes no hacen el señalamiento que les corresponda, se enviará la copia con las constancias señaladas por el apelante.

En todo caso, la copia contendrá, además, las constancias que el juez estime conducentes.

Art. 240.—Para ejecutar la sentencia o el auto que ponga fin a un incidente, en el caso del artículo anterior, se otorgará previamente caución, que podrá consistir:

I.—En hipoteca sobre bienes bastantes, a juicio del juez, ubicados dentro de su territorio jurisdiccional;

II.—En depósito de dinero efectivo, constituido en Institución de Crédito facultada para ello, o

III.—En fianza con renuncia de los beneficios de orden y excusión.

La caución será bastante para garantizar la devolución de lo que se deba percibir, sus frutos e intereses, la indemnización de daños y perjuicios y, en general, la restitución de las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución, en el caso de que el tribunal revoque la resolución.

Art. 241.—Otorgada la garantía de que trata el artículo anterior, la parte contraria al ejecutante puede evitar la ejecución, otorgando, a su vez, caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a su contraparte por no llevarse adelante la resolución recurrida, sino hasta que se confirme, pagando el importe de los gastos de la fianza que se hubiere otorgado.

En este caso y en el del artículo anterior la garantía se calificará con audiencia de la contraparte.

Art. 242.—Cuando el auto contra el cual se haya admitido el recurso de apelación en ambos efectos, hubiere recaído en expediente tramitado por cuerda separada, sólo serán remitidos al tribunal de apelación los autos relativos al punto apelado; sin perjuicio de que, en copia, se remitan las constancias que del principal soliciten las partes, o que se envíe éste, si ambas lo solicitaren.

En los autos que queden en el tribunal no podrá nunca dictarse resolución alguna que modifique, revoque o en otra forma afecte lo acordado en la resolución apelada, entre tanto que el recurso esté pendiente, para lo cual se dejará copia de ella.

Art. 243.—Sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de mil pesos y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero.

Art. 244.—Las sentencias que fueren apelables conforme al artículo anterior lo serán en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

Art. 245.—Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos.

Art. 246.—La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución, en el acto de la notificación o dentro de los cinco días siguientes, si se tratare de sentencia, o de tres, si fuere auto.

Art. 247.—Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el tribunal la admitirá sin sustanciación alguna, si procede legalmente, y, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, remitirá al tribunal de apelación los autos originales, cuando el recurso se hubiere admitido en ambos efectos. Si se hubiere admitido sólo en el efecto devolutivo, se remitirá el testimonio correspondiente, tan pronto como quede concluido.

Art. 248.—En el auto en que se admita la apelación se emplazará al apelante para que, dentro de los tres días siguientes de habersele notificado, ocurra al tribunal de apelación a continuar el recurso, ampliándose el término que se le señale, en su caso, por razón de la distancia.

Art. 249.—En el escrito en que el apelante se presente a continuar el recurso expresará los agravios que le cause la resolución apelada, y los conceptos por los que, a su juicio, se hayan cometido.

Art. 250.—El tribunal de apelación, recibidos los autos o el testimonio, en su caso, lo hará saber a las partes.

Art. 251.—Notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo anterior a los tres días siguientes examinará y declarará el tribunal, de oficio, en primer lugar, si el recurso fué interpuesto o no en tiempo y si es o nó apelable la resolución recurrida, y,

en segundo, si el escrito del apelante fué presentado en tiempo y contiene la expresión de agravios.

Art. 252.—Cuando se declare que la resolución no es apelable o que no fué interpuesto en tiempo el recurso, no será necesario decidir respecto a la oportunidad de la continuación del recurso y a la expresión de agravios. En caso contrario, en el mismo auto en que se resuelva sobre la procedencia de la apelación, se decidirá sobre si el escrito de continuación del recurso fué presentado en tiempo y contiene la expresión de agravios.

Art. 253.—Si se declara que la resolución recurrida no es apelable o que no fué interpuesto el recurso en tiempo, se devolverán al tribunal que conoció del negocio los autos que hubiere enviado, con testimonio del fallo, para que continúe la tramitación, en su caso, o para que se proceda a la ejecución, si se tratare de sentencia.

Art. 254.—Si se determina que el escrito del apelante fué presentado fuera del término del emplazamiento o que no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y que ha causado ejecutoria la sentencia, en su caso, mandándose devolver los autos que se hubieren recibido, y remitir testimonio de la resolución al tribunal que hubiere conocido del negocio.

Art. 255.—Dentro del día siguiente a la notificación del decreto a que se refiere el artículo 250 pueden las partes manifestar su disconformidad respecto de los efectos en que se haya admitido la apelación.

El tribunal resolverá de plano y sin ulterior recurso, en el mismo auto de que trata el artículo 251.

Art. 256.—Si la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo se declara admisible en ambos, y no se hubieren remitido los autos, se prevendrá, al tribunal que conoció del negocio, que los envíe.

Cuando la apelación admitida en ambos efectos se declare admisible sólo en el devolutivo, si la reso-

lución recurrida fuere sentencia, se enviará al juzgado de procedencia la copia de que trata el artículo 239; si fuere auto, se devolverán los originales, dejándose, en el tribunal, copia de las constancias necesarias, que se compulsarán observándose lo dispuesto en el artículo citado; y de lo que las partes señalen dentro de los dos días siguientes a la notificación respectiva.

Art. 257.—En el auto en que se declare que se han llenado los requisitos necesarios para que proceda la sustanciación del recurso, o recibidos los autos o expedida la copia respectiva, en los casos del artículo anterior, se mandará correr traslado a las demás partes, por el término de tres días, del escrito de expresión de agravios.

Art. 258.—Sólo tratándose de sentencias o de autos que pongan fin a un incidente, se admitirán a las partes pruebas en la segunda instancia, siempre que se trate de la documental que no hubieren podido rendir en la primera, por no haber tenido conocimiento de ella, y las de cualesquiera otras clases que no se hubieren recibido por causas ajenas a su voluntad o que sean relativas a excepciones posteriores a la audiencia de alegatos de primera instancia o a las anteriores de que no haya tenido conocimiento el interesado antes de dicha audiencia.

Las excepciones podrán proponerse y la prueba documental rendirse, hasta antes de la celebración de la audiencia del negocio.

Art. 259.—Para recibir las pruebas a que se refiere el artículo anterior, se concederá un término de diez días.

Art. 260.—Fuera de los casos del artículo 258, el tribunal se concretará, en su fallo, a apreciar los hechos tal como hubieren sido probados en la primera instancia.

Art. 261.—En el auto en que se mande correr traslado del escrito de agravios, se citará a las partes

a la audiencia de alegatos en el negocio, que se celebrara dentro de los diez días de fenecido el término del traslado; pero, si se concediere término de prueba, quedara sin efecto la citación, y la audiencia se celebrara dentro de los diez días de concluido dicho término, procediéndose en ella en la forma prescrita para la audiencia final del juicio. Si la resolución apelada fuere auto que no ponga fin a un incidente, no se concederá en ningún caso término de prueba y la audiencia de alegatos se celebrará dentro de los cinco días de fenecido el término del traslado del escrito de agravios, fallándose dentro de los cinco días siguientes de verificada la audiencia.

Art. 262.—Notificada la sentencia se remitirá testimonio de ella y de sus notificaciones al tribunal que conociere o hubiere conocido del negocio en primera instancia, devolviéndole los autos, en su caso.

Art. 263.—La revisión forzosa que la ley establece respecto de algunas resoluciones judiciales, tendrá por objeto estudiar el negocio en su integridad, a menos que la misma ley la restrinja a puntos determinados, para el efecto de confirmar, reformar o revocar la sentencia del inferior. En su tramitación y fallo se observarán las reglas de este capítulo, en cuanto fueren aplicables.

CAPITULO III.

Denegada apelación.

Art. 264.—La denegada apelación procede cuando se declara inadmisibile la apelación.

Art. 265.—El recurso se interpondrá en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes.

Al interponer el recurso, el recurrente señalará las constancias que le interesen para la integración del testimonio a que se refiere el artículo siguiente.

Art. 266.—El juez, sin substanciación alguna y sin suspender los procedimientos en el negocio, resol-

verá si da entrada o no al recurso, y, en caso afirmativo, acordará la expedición de un testimonio, en que se insertarán, además del auto que ordene su expedición y las notificaciones del mismo, el auto apelado y sus notificaciones, el que haya negado la admisión del recurso y sus notificaciones, las constancias que el tribunal señale como conducentes, las que hubiere designado el recurrente y las que, dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto que ordene la expedición, señalen las demás partes.

Art. 267.—Si el recurrente no hiciere la designación de constancias se tendrá por no interpuesto el recurso, y si las demás partes no hicieren el señalamiento que les corresponde, se enviará el testimonio únicamente con las designadas por el recurrente y por el juez.

El testimonio se remitirá dentro del término de cinco días.

Art. 268.—En el auto a que se refiere el artículo 266 el juez emplazará al recurrente para que, dentro del término de tres días, que se ampliará, en su caso, con los que correspondan por razón de la distancia, se presente al tribunal de apelación para continuar el recurso.

Art. 269.—El tribunal, al recibir la promoción de que trata el artículo anterior, si ya obra en su poder el testimonio, examinará, de oficio, si el recurrente se presenta en tiempo para continuar el recurso. Si resultare que la presentación fué extemporánea, lo declarará desierto y comunicará su resolución al juez del negocio.

Si se declara que la continuación del recurso fué hecha en tiempo, en la misma resolución se decidirá sobre la calificación del grado, hecha por el inferior, a no ser que, del testimonio, aparezca que la denegada fué interpuesta fuera de tiempo, caso en el cual se revocará la resolución que la admitió, comunicándolo así al inferior.

Si al recibir el tribunal la promoción a que se refiere el párrafo primero, no tuviese en su poder el testimonio, mandará reservarla para cuando aquel se reciba, y, llegado que sea, se procederá en la forma indicada.

Cuando se reciba el testimonio y de él aparezca que transcurrió ya el término para mejorar el recurso, se declarará desierto, de oficio, y se comunicará al juez del negocio.

Art. 270.—Si se revoca la calificación del grado y se declara admisible la apelación en ambos efectos, se ordenará al inferior que remita los autos.

Si se declara admisible la apelación en el efecto devolutivo, se le ordenará que envíe testimonio de las constancias que las partes designen y de las que el juez señale, si no se consideran bastantes las contenidas en el remitido para la denegada apelación, si se tratare de apelación de auto, o que remita los autos, si se tratare de sentencia definitiva. En el primer caso, los términos, para que designen constancias las partes, se contarán a partir de la notificación del auto en que el inferior les haga saber que está en su poder la resolución del tribunal de apelación.

Art. 271.—La segunda instancia se tramitará en la forma prevenida en el capítulo precedente.

Art. 272.—Contra la resolución del inferior que no dé entrada a la denegada apelación, procede la queja ante el tribunal de apelación, quien la substanciará con sólo un informe que rendirá el inferior y se resolverá sin ulterior recurso.

CAPITULO IV.

Disposiciones Comunes.

Art. 273.—Los recursos no son renunciables.

Art. 274.—Si se pronunciare sentencia definitiva estando pendiente un recurso y no fuere recurrida la sentencia, luego que cause ésta ejecutoria, se

comunicará el tribunal que conozca del recurso, para que se declare sin materia y se ordene su archivo. Si la sentencia fuere recurrida, se comunicará la admisión del recurso al tribunal que conozca del que está en trámite, para que remita el expediente al que ha de conocer del interpuesto contra la sentencia, para que los resuelva sucesivamente, primero el recurso pendiente y luego el interpuesto contra la sentencia.

TITULO SEPTIMO.

Actos procesales en general.

CAPITULO I.

Formalidades Judiciales.

Art. 275.—Las actuaciones judiciales y promociones pueden efectuarse en una forma cualquiera, siempre que la ley no haya previsto una especial.

Art. 276.—Cuando la ley prescriba una determinada forma para una actuación, sólo será nula, si se efectúa en una forma diversa, cuando la ley así lo ordene.

Art. 277.—Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero, se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

Las fechas y cantidades se escribirán con letra.

Art. 278.—En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada, salvándose, al fin, con toda precisión, el error cometido. Igualmente se salvarán las frases escritas entre renglones.

Art. 279.—Todas las declaraciones ante los tribunales se rendirán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de la pena en que incurre el que

comete el delito de falsedad en declaraciones judiciales.

Art. 280.—Las audiencias serán públicas en todos los tribunales; hecha excepción de las relativas a los casos de divorcio y de las demás que, a juicio del tribunal, convenga que sean secretas.

El acuerdo será reservado.

Art. 281.—El juez, recibirá, por sí, todas las declaraciones, y presidirá todos los actos de averiguación, bajo pena de nulidad y responsabilidad. La verdad será estimada en la resolución definitiva del asunto.

Art. 282.—Todo litigante, con su primera promoción, presentará:

I.—El documento o documentos que acrediten el carácter con que se presenta en el negocio, sea como de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame haya sido de habersele transmitido por otra persona; hecha excepción de los casos de gestión oficiosa y de apoderamientos en que la representación le corresponda por disposición de la ley;

II.—El número de copias simples necesarias para correr traslado a las demás partes, tanto de la demanda principal o incidental como de los documentos que con ella se acompañen.

No se dará entrada a la promoción si no se acompañan las copias. Esta disposición es aplicable a todos los casos en que haya que correrse traslado de la promoción.

Art. 283.—Los interesados pueden presentar una copia más de sus escritos, para que se les devuelva firmada y sellada por el Secretario, con anotación de la hora y fecha de presentación.

Art. 284.—Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes.

00037

Art. 285.—Las copias certificadas de constancias judiciales serán autorizadas por el Secretario.

Art. 286.—No objetados, en su oportunidad, los documentos que se presentaren en juicio, o resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, pueden las partes pedir, en todo tiempo, que se les devuelvan los originales que hubieren presentado, dejando, en su lugar, copia certificada. Cuando se trate de planos, esquemas, croquis, y en general, de otros documentos que no puedan ser copiados por el personal del tribunal, no podrán devolverse mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente; pero podrán expedirse, a costa del interesado, copias cotejadas y autorizadas por un perito que nombre el tribunal.

En todo caso de devolución de los originales, se harán, en ellos, autorizadas por el secretario, las indicaciones necesarias para identificar el juicio en que fueron presentados, expresándose si está pendiente o ya fué resuelto definitivamente, y, en este último caso, el sentido de la sentencia.

Cuando no quepa en el documento la relación que previene el párrafo anterior, se le unirá una hoja en que se termine, poniendo el sello de la secretaría, de manera que abarque al documento y a la hoja.

De la entrega se asentará razón, en autos.

CAPITULO II.

**Tiempo y lugar en que han de verificarse
los actos judiciales.**

Art. 287.—Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquéllos que la ley declare festivos. Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las diecinueve.

Art. 288.—El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo

exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad de habilitación expresa.

Art. 289.—Siempre que deba tener lugar un acto judicial en día y hora señalados, y, por cualquier circunstancia, no se efectuare, el secretario hará constar, en los autos, la razón por la cual no se practicó.

Art. 290.—Los términos judiciales, salva disposición diversa de la ley, empezarán a correr el día siguiente al del emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.

Art. 291.—Cuando fueren varias las partes, el término se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas, si el término fuere común a todas ellas.

Art. 292.—En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar las actuaciones judiciales, salva disposición contraria de la ley.

Cuando en uno o más días, dentro de un término, no haya habido, de hecho, despacho en el tribunal, se aumentarán, de oficio, al término, los días en que no hubiere habido despacho.

Art. 293.—En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que debe concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande abrir el término.

La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso.

Art. 294.—Concluídos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía.

Art. 295.—Cuando la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un derecho, dentro de un pro-

cedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en que radique el negocio, y se deba fijar un término para ello o esté fijado por la ley, se ampliará el término en un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba tener lugar el acto o ejercitarse el derecho. La distancia se calculará sobre la vía de transportes más usual que sea más breve en tiempo.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos en que, atenta la distancia, se señale expresamente, para los actos indicados, un término por la ley.

Art. 296.—Los términos que por disposición de la ley, no son individuales, se tienen por comunes para todas las partes.

Art. 297.—Los términos judiciales no pueden suspenderse, ni abrirse después de concluidos; pero pueden darse por terminados, por acuerdo de las partes, cuando estén establecidos en su favor.

Art. 298.—Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el número de días que les corresponda y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro.

Art. 299.—En caso de que hubieren de practicarse diligencias o aportarse pruebas de fuera del Estado, a petición del interesado se concederán los siguientes términos extraordinarios:

I.—Cincuenta días si el lugar está comprendido dentro del territorio Nacional;

II.—Ciento diez días si lo está en los Estados Unidos de América o en las Antillas;

III.—Ciento cuarenta días si está comprendido en Centro América;

IV.—Ciento sesenta días si estuviere en Europa o en la América del Sur, y

V.—Ciento noventa días cuando esté situado en cualquiera otra parte.

Art. 300.—Para que puedan otorgarse los términos del artículo anterior se requiere:

I.—Que se soliciten dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que conceda la práctica de la diligencia o que abra a prueba el negocio, y

II.—Que se ministren los datos necesarios para practicar la diligencia, llenándose, en su caso, los requisitos legales para cada prueba, y, si ésta no ha de recibirse fuera del lugar del juicio, sino simplemente solicitarse su envío, los datos necesarios para su identificación.

Art. 301.—Llenados los requisitos anteriores, el tribunal concederá de plano el término, sin que sea recurrible su resolución.

Art. 302.—Sólo disfrutará del término extraordinario la parte a quien se conceda, y únicamente para los fines indicados en el auto respectivo, cumplidos los cuales concluirá, aunque no haya fenecido el plazo.

Art. 303.—En el cómputo del término extraordinario no se excluirán días, por ningún motivo.

Art. 304.—Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

I.—Diez días para pruebas, y

II.—Tres días para cualquier otro caso.

Art. 305.—Las diligencias que no puedan practicarse en el partido en que se siga el juicio, deberán encomendarse, por exhorto o despacho, precisamente al juez de aquél en que han de practicarse.

También puede un tribunal, aunque una diligencia deba practicarse dentro de su propia jurisdicción, encomendarla a un juez inferior del mismo partido,

si por razón de la distancia fuere más obvio que ⁰⁰⁰³⁹este la practique.

Art. 306.—Las Salas del Supremo Tribunal pueden, en todo caso, encomendar la práctica de diligencias a cualquier juzgado del Estado.

Art. 307.—Los exhortos y despachos que manden dirigir las autoridades judiciales del Estado se expedirán el siguiente día al en que cause estado el acuerdo que los prevenga, a menos de determinación judicial en contrario, sin que en ningún caso el término fijado pueda exceder de diez días.

Art. 308.—Los exhortos y despachos que reciban las autoridades judiciales del Estado se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, y se diligenciarán dentro de los tres días siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso el juez fijará el que crea conveniente.

Art. 309.—En los despachos y exhortos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el tribunal requerido, por ordenarla la ley de su jurisdicción como requisito para obsequiarlos.

Para ser diligenciados por los tribunales del Estado los exhortos de los tribunales de otra Entidad o de la Federación, no se requiere la previa legalización de las firmas del tribunal que los expida.

Art. 310.—Los exhortos que se remitan al extranjero o se reciban de él, se sujetarán a las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 311.—Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de devolverlos con lo que se practicare, si por su conducto se hiciera la devolución.

Esta disposición no será aplicable cuando el exhorto exija el envío de documentos originales exhibidos por la contraparte.

CAPITULO III.

Notificaciones.

Art. 312.—Las notificaciones, citaciones y emplazamientos, se efectuarán, lo más tarde, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal en éstas no dispusiere otra cosa.

Art. 313.—La resolución en que se mande hacer una notificación, citación o emplazamiento, expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las personas con quienes ésta deba practicarse.

Art. 314.—Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que esté ubicado el tribunal, para que ~~se~~ les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto.

Art. 315.—Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deben ser personales.

Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión, a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse.

Art. 316.—Mientras un litigante no hiciere nue-

va designación de la casa en que han de hacérsele las notificaciones personales, seguirán haciéndose en la casa que para ello hubiere señalado.

Art. 317.—Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promoción de cualquier persona, o lo que expusiere en la primera diligencia que con ella se practicare, y si no contuviere la designación de la casa en que han de hacérsele las notificaciones personales, acordarán desde luego, sin necesidad de petición ni certificación de la secretaría, sobre la omisión, que se proceda en la forma prescrita por el artículo 315, mientras aquella no se subsane.

Art. 318.—Las notificaciones serán personales:

I.—Para emplazar a juicio al demandado y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio;

II.—Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la notificación por edictos;

III.—Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que por alguna circunstancia deben ser personales, y así lo ordene expresamente, y

IV.—En los demás casos en que la ley expresamente lo disponga.

Art. 319.—Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, dándole lectura íntegra de la resolución, en la casa designada, y, no encontrándolo el notificador, le dejará instructivo en el cual hará constar la fecha y hora en que lo entregue; el nombre y apellido del promovente; el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, comprendiendo sólo la parte resolutive, si fuere sentencia o auto que concluya con puntos resolutivos, y el nombre y apellido de la persona que lo recibe, reconociéndole la firma, en su caso, en la razón que se asentará del acto.

Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encuentre a quien deba ser notificada, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo.

Art. 320.—Para hacer una notificación personal y salvo el caso previsto en el artículo 316, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que debe ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en la misma.

En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal.

Art. 321.—Si en la casa se negare el interesado, o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador.

Art. 322.—Cuando, a juicio del notificador, hubiere sospecha fundada de que se niegue que la persona por notificar vive en la casa designada, le hará la notificación en el lugar en que habitualmente trabaje, si la encuentra, según los datos que proporcione el que hubiere promovido. Puede igualmente hacerse la notificación personalmente al interesado en cualquier lugar en que se encuentre; pero, en los casos de este artículo, deberá certificar el secretario ser la persona notificada de su conocimiento personal, o haberle sido identificada por dos testigos de su conocimiento, que firmarán con él, si supieren hacerlo. Para hacer la notificación, en los casos de este artículo, lo mismo que cuando el promovente hiciere diversa designación del lugar en que ha de practicarse, no se necesita nueva determinación judicial.

Art. 323.—Cuando la persona que haya de ser notificada por primera vez, resida fuera del lugar del juicio, se aplicará lo dispuesto por el artículo 305.

Art. 324.—Cuando ~~hubiere~~ que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de ocho en ocho días, en el Periódico Oficial del Estado, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en redeldía, haciéndose las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse.

Art. 325.—Las notificaciones que no deban ser personales, se harán en el tribunal, si vienen las personas que han de recibirlas a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que han de notificarse, sin perjuicio de hacerlo, dentro de igual tiempo, por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado.

De toda notificación por rotulón se agregará a los autos un tanto de éste, sentándose la razón correspondiente.

Art. 326.—Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquella a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere, sin necesidad de acuerdo judicial.

Art. 327.—Si los interesados, sus procuradores o las personas autorizadas por ellos, no ocurren al tri-

bunal a notificarse dentro del término señalado por el artículo 325, las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos el día siguiente al de la fijación del rotulón.

Art. 328.—Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida.

Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto.

Art. 329.—No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano.

Art. 330.—Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique.

LIBRO SEGUNDO.

Contención.

TITULO PRIMERO.

Juicio.

CAPITULO I.

Demanda.

Art. 331.—La demanda expresará:

I.—El tribunal ante el cual se promueve;

II.—El nombre del actor y el del demandado;

III.—Los hechos en que el actor fúnde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa;

IV.—Los fundamentos de derecho, y

V.—Lo que se pide, designándose con toda exactitud, en términos claros y precisos.

Art. 332.—Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde la acción. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos, en la forma que prevenga la ley, antes de admitirse la demanda. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales.

Si el actor no pudiese presentar los documentos en que funde su acción, por las causas previstas en el artículo 218, antes de admitirse la demanda se le recibirá información testimonial para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los documentos.

Art. 333.—Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte, y los que presentare después, con violación de este precepto, no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda y aquellos que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad asevere que no tenía conocimiento de ellos.

Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba documental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella no hace

mención de la misma, para el efecto de que oportunamente sea recibida.

Art. 334.—Si la demanda es obscura o irregular, el tribunal debe, por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete, señalándole, en forma concreta, sus defectos. Presentada nuevamente la demanda, el tribunal le dará curso o la desechará.

El auto que admita la demanda no es recurrible, el que la deseche es apelable.

Art. 335.—Cuando se demande a una persona moral, cuya representación corresponda, por disposición de la ley o de sus reglamentos o estatutos, a un consejo, junta o grupo director, la demanda se dirigirá, en todo caso, contra la persona moral, y el emplazamiento se tendrá por bien hecho si se hace a cualquiera de los miembros del consejo, junta o grupo director.

CAPITULO II.

Emplazamiento.

Art. 336.—De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia.

Si el demandado residiere en el extranjero, se ampliará prudentemente el término del emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente.

Art. 337.—Los efectos del emplazamiento son:

I.—Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace;

II.—Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación;

00043

III.—Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, salvo siempre el derecho de promover la incompetencia, y

IV.—Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial.

•CAPITULO III.

Contestación de la demanda.

Art. 338.—La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que explícitamente el demandado no suscitare controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos; la negación de éstos no implica la negación del derecho.

Art. 339.—Las excepciones y defensas que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer al contestar la demanda; sólo las supervenientes y aquellas de que no haya tenido conocimiento el demandado al contestar, podrán oponerse después, hasta antes de la audiencia final del juicio; pero no serán admitidas después de cinco días de que haya tenido conocimiento de los hechos en que se funden.

Art. 340.—Lo dispuesto en los artículos 332 y 333 es aplicable al demandado, respecto de los documentos en que funde sus excepciones o que deban de servirle como pruebas en el juicio.

Art. 341.—Cuando haya transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, se tendrán por confesados los hechos, siempre que el emplazamiento se haya hecho personal y directamente al demandado, su representante o apo-

derado; quedando a salvo sus derechos para probar en contra. En cualquier otro caso se tendrá por contestada en sentido negativo.

Art. 342.—Si al contestar la demanda se opusiere reconvención, se correrá traslado de ella al actor, para que la conteste; observándose lo dispuesto en los artículos anteriores sobre demanda y contestación.

Art. 343.—Sólo la incompetencia se substanciará en artículo de previo y especial pronunciamiento.

Art. 344.—Cuando una excepción se funde en la falta de personalidad o en cualquier defecto procesal que pueda subsanarse, para encauzar legalmente el desarrollo del proceso, podrá el interesado corregirlo en cualquier estado del juicio.

Art. 345.—Las excepciones supervenientes o de que no haya tenido conocimiento el interesado, se probarán dentro del término probatorio, si lo que de él quedare no fuere menor de diez días. En caso contrario se completará o concederá este plazo.

CAPITULO IV.

Término probatorio.

Art. 346.—Transcurrido el término para contestar la demanda, o la reconvención, en su caso, el juez abrirá el juicio a prueba, por un término de treinta días.

Art. 347.—Ninguna parte puede oponerse a que se reciba el negocio a prueba, ni tampoco a la recepción de éstas, aun alegando que las ofrecidas son inverosímiles o inconducentes.

Art. 348.—Las pruebas ofrecidas oportunamente, que no se hayan recibido por causas independientes de la voluntad de los interesados, se recibirán, a solicitud de parte, en el término que prudentemente fije el juez.

Contra el auto que ordene su recepción no cabrá ningún recurso.

00044

Art. 349.—Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable en todas las instancias, salvo disposición contraria de la ley.

En toda dilación probatoria respecto de la cual no se disponga en este Código la forma y tiempo de proponer o recibir las pruebas, el juez lo determinará en el auto que la conceda, teniendo en consideración la naturaleza de los hechos que han de probarse y de las pruebas que han de rendirse.

CAPÍTULO V.

Audiencia final del juicio.

Art. 350.—Cuando no haya controversia sobre los hechos, pero sí sobre el derecho, se citará desde luego para la audiencia de alegatos y se pronunciará la sentencia.

Art. 351.—Concluída la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y las decretadas por el juez, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a los artículos siguientes, concurran o no las partes.

Art. 352.—Abierta la audiencia, pondrá el juez a discusión, en los puntos que estime necesarios, la prueba documental del actor, y en seguida, la del demandado, concediendo a cada parte el uso de la palabra, alternativamente, por dos veces respecto de la prueba de cada parte, por un término que no puede exceder de quince minutos.

Discutida la prueba documental, se pasará a la discusión de la pericial en los puntos que el juez estime necesarios, si hubiere habido discrepancia entre los peritos, concediéndose a éstos el uso de la palabra, sólo una vez, por un término que no excederá de treinta minutos. Si no hubiere habido discrepancia, se pasará a la discusión de la prueba testimonial, la que se llevará a efecto exclusivamente por interrogatorio directo del juez a los testigos y a las partes, puestos

en formal careo, para el efecto de aclarar los puntos contradictorios observados en sus declaraciones.

Art. 353.—Terminada la discusión de que tratan los artículos precedentes, se abrirá la audiencia de alegatos en la que se observarán las siguientes reglas:

I.—El secretario leerá las constancias de autos que pidiere la parte que esté en el uso de la palabra;

II.—Alegará primero el actor y en seguida el demandado. También alegará el Ministerio Público cuando fuese parte en el negocio;

III.—Sólo se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, quienes, en la réplica y dúplica, deberán alegar tanto sobre la cuestión de fondo como sobre las incidencias que se hayan presentado en el proceso;

IV.—Cuando una de las partes estuviere patrocinada por varios abogados, no podrá hablar, por ella, más que uno solo en cada turno;

V.—En los alegatos procurarán las partes la mayor brevedad y concisión;

VI.—No se podrá usar de la palabra por más de media hora cada vez. Los tribunales tomarán las medidas prudentes que procedan, a fin de que las partes se sujeten al tiempo indicado. Sin embargo, cuando la materia del negocio lo amerite, los tribunales podrán permitir que se amplié el tiempo marcado o que se use por otra vez de la palabra, observándose la más completa equidad entre las partes, y

VII.—Las partes, aun cuando no concurran o renuncien al uso de la palabra, podrán presentar apuntes de alegatos, antes de que concluya la audiencia. Los de la parte que no concurra o renuncie al uso de la palabra serán leídos por el Secretario.

CAPITULO VI.

Sentencia.

Art. 354.—Cuando la demanda fuere confesada

expresamente, en todas sus partes, y cuando el actor manifieste su conformidad con la contestación, sin más trámite se pronunciará la sentencia.

Art. 355.—Terminada la audiencia de que trata el capítulo anterior, puede en ella, si la naturaleza del negocio lo permite, pronunciar el juez su sentencia.

Art. 356.—Si en la audiencia no pronunciase el juez su sentencia, en ella misma se citará para la sentencia, que se pronunciará dentro del término de diez días.

Art. 357.—Al pronunciarse la sentencia se estudiarán previamente las excepciones que no destruyan la acción, y, si alguna de éstas se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el juez.

Art. 358.—La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio.

Art. 359.—Cuando el actor no prueba su acción será absuelto el demandado.

Art. 360.—Salvo el caso del artículo 80, no podrán los tribunales, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.

Art. 361.—Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos.

Art. 362.—Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio.

CAPITULO VII.

Sentencia ejecutoria.

Art. 363.—La cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Art. 364.—Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.

Art. 365.—Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

I.—Las que no admiten ningún recurso;

II.—Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto o se haya desistido el recurrente de él, y

III.—Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante.

Art. 366.—En los casos de las fracciones primera y tercera del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha, a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el juez que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que éste se haya hecho valer.

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso.

TITULO SEGUNDO.

CAPITULO UNICO.

Incidentes.

Art. 367.—Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se sujetarán a la establecida en este Título.

Art. 368.—Los incidentes que pongan obstáculo a la continuación del procedimiento, se substanciarán en la misma pieza de autos, quedando, entre tanto, en suspenso aquél; los que no lo pongan se tramitarán en cuaderno separado.

Art. 369.—Los incidentes impiden la continuación del procedimiento cuando la ley lo dispone y cuando tienen por objeto resolver una cuestión que debe quedar establecida para poder continuar la secuela en lo principal.

Art. 370.—Promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las otras partes, por el término de tres días.

Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el juez las estimare necesarias, se citará para dentro de los tres días siguientes, a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. Si se promoviere prueba o el juez la estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria de diez días, y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el Capítulo V del Título Primero de este Libro.

En cualquiera de los casos anteriores, el juez, dentro de los cinco días siguientes, dictará su resolución.

Art. 371.—Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a lo preceptuado en este Título, con la sola modificación de que las pruebas pericial y testimonial se ofrecerán dentro de los primeros tres días del término probatorio.

Art. 372.—En la resolución definitiva de un incidente, se hará la correspondiente declaración sobre costas.

Art. 373.—Los autos que en segunda instancia resuelvan un incidente no admiten recurso alguno.

Art. 374.—Las resoluciones incidentales no surten efecto alguno más que en el juicio en que hayan si-

do dictadas, a no ser que la resolución se refiera a varios juicios, caso en el cual surtirá efectos en todos ellos.

TITULO TERCERO.

Suspensión, interrupción y caducidad del proceso.

CAPITULO I.

Suspensión.

Art. 375.—El proceso se suspende cuando el tribunal del juicio no está en posibilidad de funcionar, por un caso de fuerza mayor, y cuando alguna de las partes o su representante procesal, en su caso, sin culpa alguna suya, se encuentra en la absoluta imposibilidad de atender al cuidado de sus intereses en el litigio.

Art. 376.—El proceso se suspende cuando no pueda pronunciarse la decisión sino hasta que se pronuncie una resolución en otro negocio, y en cualquier otro caso especial determinado por la ley.

Art. 377.—La suspensión se decretará por el juez, a instancia de parte o de oficio, indicando en su resolución, el día en el que deba terminar la suspensión.

Cuando llegue el día señalado para terminar la suspensión y subsistan los motivos de la misma, en los términos de los dos artículos anteriores, se prorrogará la suspensión en la forma establecida en el párrafo precedente. Si el representante fuese un procurador, pasado el término de la suspensión, ya no se prorrogará éste, siendo a perjuicio de la parte la falta de aquél, si no nombra nuevo representante.

Art. 378.—Con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento, todo acto procesal verificado durante la suspensión, es ineficaz, sin que sea necesario pedir ni declarar su nulidad.

Los actos ejecutados ante un tribunal distinto del

que conozca del negocio, durante el tiempo de la suspensión, pero antes de que ésta se le comuniqué, son plenamente eficaces.

El tiempo de la suspensión no se computa en ningún término.

CAPITULO II.

Interrupción.

Art. 379.—El proceso se interrumpe cuando muere, antes de la audiencia final del negocio, una de las partes.

También se interrumpe cuando muere el representante procesal de una parte, antes de la audiencia final del negocio.

Art. 380.—En el primer caso del artículo anterior, la interrupción durará por el tiempo indispensable para que se apersoné en el juicio el representante de la sucesión.

En el segundo caso del mismo artículo la interrupción durará el tiempo necesario para que la parte que ha quedado sin representante procesal provea a su substitución.

Art. 381.—En caso de muerte de la parte, la interrupción cesará tan pronto como se acredite la existencia de un representante de la sucesión. En el segundo caso la interrupción cesa al vencimiento del término señalado por el juez para la substitución del representante procesal desaparecido.

Art. 382.—Es aplicable al caso de interrupción, lo dispuesto por el artículo 378.

CAPITULO III.

Caducidad.

Art. 383.—El proceso caduca en los siguientes casos:

I.—Por convenio o transacción de las partes;

II.—Por desistimiento de la acción, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de la demanda;

III.—Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y

IV.—Fuera de los casos previstos en los dos capítulos precedentes, cuando no se haya verificado ningún acto procesal ni promoción, durante un término continuo, mayor de ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya verificado el último acto procesal o hecho la última promoción. Esta disposición es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal caducan los incidentes. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal cuando hayan suspendido el procedimiento en éste.

Art. 384.—Si la transacción o convenio, el desistimiento de la acción o el cumplimiento de la reclamación no comprenden todas las cuestiones litigiosas, para cuya resolución se haya abierto el proceso, éste continuará solamente para la decisión de las cuestiones restantes.

Art. 385.—En los casos de las fracciones primera a tercera del artículo 383, la resolución que decrete la caducidad la hará el juez, a petición de parte o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que la motivan.

En el caso de la fracción cuarta del mismo artículo, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del término indicado.

En cualquier caso en que hubiere caducado un proceso, se hará la declaración de oficio, por el juez o tribunal, o a petición de cualesquiera de las partes.

La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos. ⁰⁰⁰⁴

Cuando la caducidad se declare en la segunda instancia, habiendo sentencia de fondo de la primera, causará ésta ejecutoria.

Art. 386.—En los casos de las tres primeras fracciones del artículo 383, se observarán las reglas siguientes, con relación a la condena en costas:

I.—Si hubiere convenio, se estará a lo pactado en él;

II.—Si no hubiere convenio y se tratare de los casos de las fracciones I y II, no habrá lugar a la condenación.

Si se tratare del caso de la fracción III se aplicarán las reglas establecidas en el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero.

Art. 387.—En el caso de la fracción IV del artículo 383 no habrá lugar a la condenación en costas.

Art. 388.—La caducidad tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados; entendiéndose como no presentada la demanda.

Art. 389.—En cualquier juicio sobre la misma controversia no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco.

Art. 390.—La caducidad no influye en forma alguna sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso.

TITULO CUARTO.

CAPITULO UNICO.

Medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias.

Art. 391.—Cuando una parte requiera indispensablemente, para entablar una demanda, la inspección de determinadas cosas, documentos, libros o papeles,

la autoridad judicial puede decretar la exhibición de los mismos, previa comprobación del derecho con que se pide la medida y la necesidad de la misma.

Art. 392.—Si la persona de quien se pide la exhibición se opusiere a ella, se substanciará su oposición por el procedimiento incidental.

Art. 393.—En caso de incumplimiento de la persona obligada a la exhibición, sea que se haya opuesto y no haya prosperado su oposición o que no haya habido ésta, el tribunal hará uso de los medios de apremio para hacer cumplir su determinación.

Art. 394.—La resolución que conceda o niegue la medida es apelable.

Art. 395.—La solicitud de exhibición interrumpe la prescripción, siempre que se presente la demanda correspondiente dentro de los cinco días siguientes al en que se efectúe la exhibición.

Art. 396.—Antes de iniciarse el juicio pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable.

Art. 397.—La parte que tenga interés en que se modifique la situación de hecho existente, deberá proponer su demanda ante la autoridad competente.

Art. 398.—Cuando la mantención de los hechos en el estado que guarden implique la suspensión de una obra, la demanda debe ser propuesta por la parte que solicitó la medida, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se haya ordenado la suspensión.

El hecho de no interponer la demanda dentro del plazo indicado deja sin efecto la medida.

Art. 399.—En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la

medida, se exigirá previamente garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decreta.

Art. 400.—La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guardan al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita.

Art. 401.—Dentro del juicio o antes de iniciarse éste pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias:

I.—Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio;

II.—Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito, y

III.—Depósito de personas.

Art. 402.—La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aun no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse.

Si la medida se refiere a alimentos provisionales, deberá acreditarse la necesidad de los mismos y la posibilidad de quien deba darlos, y la resolución que los ordene fijará la cantidad que periódicamente deba ministrarse y ordenará que se otorgue la correspondiente garantía de que se ministrarán, y, en caso de no otorgarse, que se embarguen bienes suficientes para garantizarlos.

Al solicitarse la medida debe comprobarse el derecho con que se piden los alimentos.

Art. 403.—Con excepción del caso de alimentos provisionales, la parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen

y la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la misma o que ésta no se lleve a cabo, mediante el otorgamiento de garantía por su parte, suficiente para responder de los resultados del juicio.

Art. 404.—La medida de que trata la fracción II del artículo 401, se decretará cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles, puedan perderse o alterarse.

Art. 405.—En el caso del artículo anterior, el que solicite la medida otorgará previamente garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, sin que la contraparte pueda otorgar garantía para que se levante la medida o para que no se lleve a cabo. Para fijar el importe de la garantía de que trata este artículo y el 403, podrá oír el juez, cuando lo estime necesario, el parecer de un perito.

Art. 406.—Las medidas de que tratan las fracciones I y II del artículo 401, se practicarán aplicándose, en lo conducente, las disposiciones del Capítulo VI del Título Sexto del Libro Segundo.

Art. 407.—La medida de que trata la fracción III del artículo 401, procederá en asuntos de divorcio, cuando la solicite para sí la mujer, ya sea que ella haya entablado o pretenda entablar la demanda, o que sea la demandada, y en los que se refieran a la situación de los menores.

Art. 408.—El depósito de la mujer o de los menores se ordenará por el juez, señalando el domicilio de familia honorable o institución de beneficencia en que una u otros deban permanecer, entre tanto se resuelve el negocio.

El depósito de los menores puede ser solicitado por cualquiera de las partes o por el Ministerio Público.

Art. 409.—Cuando se ordene el depósito de los menores, siempre quedarán en poder de la madre los

que necesiten indispensablemente de sus cuidados. Sólo que ésta se niegue a cuidarlos o se demuestre que no cumple con sus deberes, se proveerá al cuidado de los mismos. 00070

Art. 410.—Cuando fuere procedente, en la misma resolución que decrete el depósito se ordenará la ministración de alimentos, en los términos previstos por el párrafo segundo del artículo 402, pudiendo decretarse los de los menores a solicitud del Ministerio Público.

Art. 411.—Toda medida de las autorizadas por el artículo 401, se decretará sin audiencia de la contraparte, y se ejecutará sin notificación previa.

Art. 412.—La resolución que niegue la medida es apelable en ambos efectos; la que la conceda sólo lo es en el devolutivo.

Art. 413.—Si la medida se decretó antes de iniciarse el juicio, quedará insubsistente si no se interpone la demanda dentro de los cinco días de practicada, y se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de dictarse la medida, hecha excepción de los casos de alimentos provisionales, en que no podrán repetirse los que se hayan ministrado, respecto de los cuales, en este caso y en cualquiera otro, tendrá sus derechos a salvo el que los haya ministrado para reclamarlos del que se resuelva que está obligado a darlos.

Art. 414.—En el caso del artículo anterior y en el del último párrafo del artículo 398, la garantía otorgada para obtener la medida no se cancelará, sino que perdurará por el tiempo indispensable para la prescripción liberatoria, salvo convenio contrario de las partes.

Art. 415.—No podrá decretarse diligencia alguna preparatoria, de aseguramiento o precautoria que no esté autorizada por este título o por disposición especial de la ley.

TITULO QUINTO.

CAPITULO UNICO.

Juicio de paz.

Art. 416.—En los juicios ante los jueces municipales se observarán las disposiciones que rigen para el juicio ante los demás tribunales, con las modificaciones que se contienen en este Título.

Art. 417.—En la demanda y la contestación ante los jueces municipales no se requiere formalidad alguna especial; pero, además de expresarse los hechos en que se funden y acompañarse los documentos respectivos con la demanda, concluirán con la petición clara y precisa que se formule.

Art. 418.—Tanto la demanda y la contestación, como cualesquiera otras promociones, pueden ser hechas por escrito u oralmente. En este último caso asentará el secretario en el acta los puntos sustanciales, y, antes de cerrarla, dictará el juez el acuerdo que proceda.

Art. 419.—Formulada la demanda, mandará el juez, en el mismo acto, citar al promovente y a la persona contra quien se dirija, a una audiencia oral, que se efectuará dentro de los nueve días siguientes.

Al citarse al demandado a la audiencia, se le entregará o dejará una copia de la demanda y de los documentos que con ella se hubieren presentado, y se le apercibirá de que, si no comparece, se tendrán por confesados los hechos de la reclamación, en el caso del artículo 421.

Art. 420.—En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, exhortará el juez a los interesados a una conciliación, empleando los medios que le aconseje su prudencia, según los datos que obtenga respecto al negocio. Si las partes llegaren a un arreglo, se asentará en el acta y producirá los efectos de cosa juzgada, para la ejecución correspondiente. En caso contrario, se requerirá al demandado para que, en el

mismo acto, conteste la reclamación, apercibido de que, si no lo hace, se tendrán por confesados los hechos en que se base.

Art. 421.—Si el demandado que haya sido emplazado personalmente o por medio de su apoderado o representante, no comparece a la audiencia por si o debidamente representado, o si en ella no produce su contestación inmediatamente después de requerírsele en los términos del artículo anterior, el juez tendrá por confesados los hechos de la demanda. Si comparece el demandado y no el actor, sin justa causa, se impondrá a éste una multa hasta de diez pesos, que se aplicará a aquél, por vía de indemnización; y sin que se justifique haberse hecho el pago, no se citará de nuevo a la audiencia.

Art. 422.—Producida la contestación, o dados por confesados los hechos de la demanda o por contestada ésta, en sentido negativo, en el caso del último párrafo del artículo 341, en el mismo acto citará el juez a las partes a la audiencia del juicio, que se efectuará, a más tardar, dentro de los quince días siguientes, concurran o no las partes.

Art. 423.—Las pruebas periciales, testimoniales y de inspección judicial, se promoverán en la misma audiencia a que se refiera el artículo 419, inmediatamente después de que se produzca la contestación de la demanda o se tengan por confesados los hechos de ella o por contestada en sentido negativo. Si se promovieren después serán desechadas de plano. Las demás pruebas se promoverán en la misma audiencia del juicio.

Art. 424.—Al pedirse la prueba pericial designará el que la promoviere el perito de su parte y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo. En seguida el juez requerirá a la otra parte, si estuviere presente, para que, en el mismo acto, nombre el suyo y manifieste si está conforme con la proposición de perito tercero, o le fijará el término de dos días para que lo haga, si estuviere ausente.

Art. 425.—Si en el acto del requerimiento a que se refiere el artículo anterior, o transcurrido, en su caso, el término señalado, no hiciere la otra parte el nombramiento del perito que le corresponde, ni hubiere habido acuerdo en la designación del tercero, el juez nombrará al uno y al otro.

Art. 426.—Al promoverse la prueba pericial se formulará el cuestionario para los peritos o se indicarán con precisión los puntos sobre que ha de versar su dictamen, y, en todo caso, se señalarán los objetos que deban ser examinados por aquéllos, a fin de que oportunamente puedan desempeñar su cometido.

Art. 427.—Los peritos rendirán su dictamen en la audiencia del juicio, primero el de la parte que hubiere promovido la prueba, en seguida el de la contraria, y, por último, si fuere necesario, el tercero, a quien se concederá, si lo pidiere, un término que no excederá de treinta minutos, a fin de que, hecho el examen de los otros dictámenes, produzca el suyo.

Art. 428.—Cuando la inspección judicial no pueda, por su naturaleza, tener lugar en la audiencia del juicio, señalará el juez día y hora para la diligencia, dentro de los que medien entre la citación para aquella y la fecha en que deba efectuarse.

Las partes pueden asistir a la diligencia y hacer al juez las observaciones que estimen pertinentes.

Art. 429.—Todas las diligencias de prueba se practicarán en la audiencia del juicio, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, y cuando alguna se encomiende a un juez de distinta jurisdicción territorial.

Art. 430.—En la audiencia del juicio se procederá como sigue: el juez dispondrá que el secretario dé lectura a la demanda, a la contestación, en su caso, y a los documentos que con una y otra se hubieren presentado; en seguida se recibirán las pruebas del actor y luego las del demandado; a continuación se

oirán las objeciones que se formulen y precisen contra las pruebas de las fracciones II, III y VII del artículo 96 y las circunstancias alegadas contra la credibilidad de los testigos, y se recibirán las pruebas que se ofrezcan sobre las unas y las otras; después se oirán los alegatos de las partes en cuanto al fondo del asunto, primero los del actor y después los del demandado, hasta por dos veces cada uno sin exceder de veinte minutos cada vez, y por último pronunciará el juez, precedidos de las consideraciones del caso, los puntos resolutivos de su fallo, que en el mismo acto hará conocer a las partes.

Art. 431.—Las sentencias serán pronunciadas a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse estrictamente a las reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos como el juez lo creyere debido en conciencia.

Art. 432.—Las cuestiones incidentales que se susciten, con excepción de la incompetencia y de la acumulación, se resolverán juntamente con lo principal. Si se promovieren después de la sentencia, se resolverán en una audiencia, a la que se citará, sin más trámite, para dentro de los tres días siguientes a la promoción y en ella rendirán las partes las pruebas que tuvieren, y alegarán por una sola vez, sin exceder de diez minutos, y en seguida el juez decidirá.

Art. 433.—Los jueces proveerán a la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones, y, a este efecto, dictarán las medidas necesarias, en la forma y términos que estimen más prudente, sin contrariar lo dispuesto en el artículo que sigue.

Art. 434.—Si al pronunciarse una sentencia estuvieren presentes todas las partes, el juez las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución, y procurará que lleguen a un avenimiento a este respecto.

Art. 435.—El condenado podrá proponer fianza

para garantizar el cumplimiento de lo sentenciado. El juez calificará la fianza según su prudente arbitrio, y, si la aceptare, podrá conceder un término hasta de ocho días para el cumplimiento, y aun mayor, si el que obtuvo'estuviere conforme. Si vencido el término no hubiere cumplido el sentenciado, se procederá de plano a ejecutar el fallo contra el fiador, quien no gozará de beneficio alguno.

Art. 436.—El tercero que considere perjudicados sus derechos al ejecutarse la sentencia, puede ocurrir al juez, quien citará al promovente y a las partes a una audiencia verbal para dentro de tres días, y después de recibir las pruebas que se presenten y de oír a los interesados por una sola vez y sin exceder de diez minutos cada uno, decidirá en el mismo acto si subsiste o no el secuestro o el acto de ejecución, sin resolver sobre la propiedad de la cosa, ni sobre otros derechos controvertidos.

Art. 437.—Las sentencias de los jueces municipales son revisables a petición del interesado. Conocerán de la revisión los jueces de partido, los cuales dispondrán que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para resolver sin sujetarse a las formalidades establecidas para los juicios de su competencia, sino de la manera que consideren bastante para asegurar un fallo justo, y deberán resolver el recurso en un plazo máximo de quince días.

Art. 438.—Fuera de las sentencias, ninguna otra resolución de los jueces municipales admite recurso alguno, a no ser que haya sido dictada en procedimientos de ejecución, caso en el cual admitirá los recursos que el Título siguiente concede.

Art. 439.—Con las modalidades establecidas en este capítulo, los procedimientos de ejecución se regirán por el Título que sigue.

— Art. 440.—En los casos a que se refiere este Título no habrá lugar a la condenación en costas.

TITULO SEXTO.

00053

Ejecución.

CAPITULO I.

Reglas generales.

Art. 441.—La demanda de ejecución debe llenar los requisitos establecidos por el Título Primero, Capítulo I, de este Libro, a no ser que exista sentencia anterior ejecutoria, caso en el cual sólo se pedirá que se ejecute.

Art. 442.—Admitida la demanda se dictará auto ordenando que se requiera al deudor para que, en el acto del requerimiento, cumpla con la obligación, si esto es posible, y, si no lo hace, se le embarguen o aseguren bienes suficientes para cumplirla, o para asegurar el pago de los daños y perjuicios.

Art. 443.—Si el deudor no cumple con la obligación, se practicará el aseguramiento o embargo y se emplazará al demandado en los términos del Capítulo II del Título Primero de este Libro, siguiéndose conforme al mismo el juicio.

Art. 444.—Transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, cuando el emplazamiento se haya hecho personal y directamente al demandado, su representante o apoderado, si de los mismos documentos acompañados con la demanda no apareciese justificada una excepción, se pronunciará sentencia de condena y se llevarán adelante los procedimientos de ejecución.

Cuando el emplazamiento haya sido hecho en forma diversa, se tendrá por contestada negativamente la demanda de ejecución y se proseguirá el juicio en la forma prevista por el Título Primero de este Libro.

Art. 445.—Pronunciada la sentencia ejecutoria, sólo se admitirán las excepciones posteriores a la audiencia final de la última instancia, acreditadas por

prueba documental o confesional, o que resulten directamente de la ley. Para resolver sobre ellas se hará uso del procedimiento incidental. Resuelta la oposición ya no se admitirá excepción alguna.

Art. 446.—Aun cuando en la sentencia que haya causado ejecutoria se fije término para el cumplimiento de la obligación, a solicitud de parte puede decretarse, en cualquier tiempo, antes de su cumplimiento, el embargo o aseguramiento de bienes suficientes para cumplir la sentencia o para asegurar el pago de los daños y perjuicios, en caso de incumplimiento.

Se equiparan a las sentencias las transacciones o convenios judiciales o extrajudiciales ratificados judicialmente.

Art. 447.—El auto que niegue la ejecución es apelable en ambos efectos.

CAPITULO II.

Documentos ejecutivos.

Art. 448.—Motivan ejecución:

I.—Las sentencias ejecutoriadas;

II.—Los documentos públicos que conforme a este Código hacen prueba plena, y

III.—Los documentos privados reconocidos ante notario o ante la autoridad judicial.

Art. 449.—El reconocimiento sólo puede pedirse de la persona obligada, del albacea de su sucesión, del representante legítimo del obligado, del representante de un ausente o ignorado, del gerente, presidente o director de una sociedad o asociación de hecho, del que lleva la firma social en las sociedades y del mandatario con poder bastante.

Art. 450.—Promovido el reconocimiento, se mandará citar a la persona de quien se pretenda, para que comparezca el día y hora que se le señale, a decir si reconoce como expedido por ella o por su representante el documento, y como suya o de su representado, la firma con que está suscrito, apercibida de que, si

no comparece, se tendrá por reconocido, cuando se trate de la persona misma del signatario. El mismo apercebimiento procederá cuando el documento esté firmado a ruego de la persona que debe reconocerlo.

Art. 451.—Cuando a la diligencia de reconocimiento de un documento comparezca la persona a quien se atribuya su expedición o a cuyo ruego haya sido expedido, deberá decir categóricamente si lo reconoce o no, así como la firma con que está suscrito, si es la propia.

En caso de que reconozca como suya sólo parte del documento o sólo la firma, se hará constar con toda claridad cuál es la parte del documento reconocida y cual no.

Art. 452.—Se tendrá por reconocido un documento:

I.—Cuando no comparezca el signatario del mismo, o la persona que debe reconocerlo, cuando otra haya firmado a su nombre y

II.—Cuando las personas señaladas en la fracción anterior no contesten categóricamente si reconocen o no el documento.

El reconocimiento ficto se rige por las reglas de la confesión ficta.

Art. 453.—Es juez competente para conocer del reconocimiento, el que lo sea para conocer del juicio.

La citación para el reconocimiento de un documento se hará en la forma prescrita para la confesión.

Art. 454.—El documento que no haya sido reconocido en su totalidad no es ejecutivo.

Art. 455.—No será necesario el reconocimiento cuando el documento privado sea una escritura de venta, permuta, hipoteca o prenda que se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Art. 456.—No obstante el carácter de ejecutivos de los documentos, no se despachará la ejecución si no son de plazo cumplido y no sujetas a condición las

obligaciones que en ellos se contengan, a menos que judicialmente se hayan declarado exigibles.

Art. 457.—Si la obligación contenida sólo es cierta y determinada en parte, sólo por ésta se despachará la ejecución.

Art. 458.—En todo caso en que, para despachar ejecución, sea necesario practicar previamente una liquidación, se efectuará ésta por el procedimiento incidental.

Art. 459.—Puede despacharse ejecución fundada en un documento privado no ejecutivo, mediante el otorgamiento de garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se causen.

Art. 460.—Puede prepararse la ejecución por alguna de las medidas señaladas por el artículo 391.

Si se tratase de ejecución de una obligación alternativa, cuya elección corresponda al deudor, se requerirá a éste previamente para que la haga, apercibido de que será hecha por el juez, en su rebeldía, o por quien corresponda, de conformidad con lo establecido en el contrato o en la ley.

CAPITULO III.

Formas de ejecución.

Art. 461.—Cuando la obligación consista en hacer alguna cosa, se fijará al obligado un plazo prudente para su cumplimiento, atendidas las circunstancias, si no estuviere fijado en la sentencia o en el documento.

Art. 462.—Si pasado el plazo el obligado no cumpliera, se observarán las reglas siguientes:

I.—Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiese prestarse por otro, el ejecutante podrá reclamar el pago de daños y perjuicios, a no ser que en el título se hubiere fijado alguna pena, caso en el cual por ésta se despachará la ejecución;

II.—Si el hecho pudiese prestarse por otro, el tribunal nombrará persona o personas que lo ejecuten,

a costa del obligado, en el término que se les fije, o se resolverá la obligación en daños y perjuicios, a elección del ejecutante;

III.—Si el hecho consiste en el otorgamiento de una escritura, lo hará el juez en rebeldía del ejecutado, y 000

IV.—Si el hecho consistiere en la entrega de alguna persona, finca o cosas, documentos, libros o papeles, se hará uso de los medios de apremio para obtener la entrega.

La desocupación de una finca, por falta de pago de rentas, sólo puede ordenarse en sentencia definitiva; pudiéndose conceder un término hasta de sesenta días, fijado prudentemente por el juez, para hacer entrega de ella. En este caso el aseguramiento de bienes sólo puede tener lugar para garantizar las rentas adeudadas y los daños y perjuicios.

Art. 463.—En el caso de la fracción II del artículo anterior, la persona nombrada por el tribunal tiene derecho de pedir, en los mismos autos de la ejecución, antes de hacer su trabajo, que el obligado le asegure su importe, fijado por acuerdo entre ellos, o, en su defecto, por medio de peritos; y si el obligado se resistiere a hacer el pago, podrá aquélla pedir que se despache ejecución en su contra por la cantidad convenida, o, en su defecto, por la que determine el tribunal, con vista de los dictámenes periciales.

Art. 464.—Cuando se trate de sentencia que condene a no hacer, su ejecución consistirá en notificar al sentenciado que, a partir del cumplimiento del término que en ella misma se señale o del que, en su defecto, le fije el tribunal prudentemente, se abstenga de hacer lo que se le prohíba.

Lo mismo se observará cuando la obligación de no hacer constare en cualquier otro título que motive ejecución.

Art. 465.—En cualquier otro caso en que se despache ejecución, mandará el tribunal que se requiera

deudor para que, en el acto de la diligencia, cubra las prestaciones reclamadas, y que, en caso de no haberlo, si no hubiere bienes embargados afectos al cumplimiento de la obligación, o los que hubiere no fuesen suficientes, se le embarguen los que basten para satisfacer la reclamación.

Art. 466.—En el mismo auto a que se refiere el artículo anterior, se mandará prevenir a las partes que, dentro de tres días, nombre cada una un perito valuador, y, entrambas, un perito tercero, apercibidas de que los nombramientos que dejaren de hacer serán hechos por el tribunal.

Art. 467.—Cuando la ejecución tenga por objeto cosa cierta y determinada, y al tratar de llevarse a efecto resultare que ya no existe o que el deudor la ha ocultado o simplemente no aparece, el ejecutante puede reclamar su valor, intereses, daños y perjuicios, por las cantidades que fije, con la debida separación, y por ellas se despachará ejecución, substanciándose la oposición, en su caso, por el procedimiento incidental.

Art. 468.—Si la cosa se halla en poder de un tercero, la ejecución no podrá despacharse en su contra, sino en los casos siguientes:

I.—Cuando la ejecución se funde en acción real,

II.—Cuando judicialmente se haya declarado nula la enajenación por la que adquirió el tercero.

Art. 469.—La ejecución de sentencias extranjeras se sujetará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y a los tratados o convenios sobre la materia.

CAPITULO IV

Oposición de terceros a la ejecución.

Art. 470.—Cuando en una ejecución se afecten intereses de terceros que no tengan con el ejecutante o el ejecutado alguna controversia que pueda influir

sobre los intereses de éstos, en virtud de los cuales se ha ordenado la ejecución, tanto el ejecutante como el ejecutado son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que con ella se causen al tercero, y la oposición de éste se resolverá por el procedimiento incidental.

Art. 471.—Cuando en una ejecución se ⁰⁰⁰⁷⁶afecten intereses de tercero que tenga una controversia con el ejecutante o el ejecutado, que pueda influir en los intereses de éstos que han motivado la ejecución, la oposición del tercero se substanciará en forma de juicio, autónomo o en tercería, según que se haya o no pronunciado sentencia que defina los derechos de aquellos.

La demanda deberá entablarla el opositor hasta antes de que se haya consumado definitivamente la ejecución; pero dentro de los nueve días de haber tenido conocimiento de ella.

La demanda deja en suspenso los procedimientos de ejecución; pero, si no es interpuesta en el término indicado, se llevará adelante hasta su fin, dejando a salvo los derechos del opositor.

CAPITULO V.

Responsabilidades de las partes en la ejecución.

Art. 472.—Las partes, en la ejecución, son responsables en los términos establecidos en el Capítulo II del Título Primero del Libro Primero.

CAPITULO VI.

Embargos.

Art. 473.—Decretado el embargo, si el deudor no fuere encontrado en su domicilio para hacerle el requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que espere a hora fija del día siguiente hábil, y, si no espera, se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa o con el vecino más inmediato.

Cuando se encontrare cerrada la casa o se impidiere el acceso a ella, el ejecutor judicial requerirá el auxilio de la policía para hacer respetar la determinación judicial, y hará que, en su caso sean rotas las cerraduras para poder practicar el embargo de bienes muebles que se hallen dentro de la casa.

Art. 474.—No verificado el pago, sea que la diligencia se haya o no entendido con el ejecutado, se procederá al embargo de bienes, en el mismo domicilio del demandado o en el lugar en que se encuentren los que han de embargarse.

Art. 475.—No son susceptibles de embargo:

I.—Los bienes que constituyan el patrimonio de familia, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

II.—El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su mujer o de sus hijos, no siendo de lujo;

III.—Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado;

IV.—La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a efecto de lo cual oirá el juez el informe de un perito nombrado por él, a menos que se embarguen juntamente con la finca;

V.—Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales;

VI.—Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen, indispensables para éste, conforme a las leyes relativas;

VII.—Los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles o industriales, en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento, a efecto de lo cual oirá el juez el dictamen de un perito nombrado por él;

pero podrán ser intervenidos juntamente con la negociación a que estén destinados; 00057

VIII.—Las mieses, antes de ser cosechadas; pero sí los derechos sobre las siembras;

IX.—El derecho de usufructo, pero sí los frutos de éste;

X.—Los derechos de uso y habitación;

XI.—Los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos;

XII.—Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén constituídas; excepto la de aguas que es embargable independientemente;

XIII.—La renta vitalicia, en los términos establecidos en el Código Civil;

XIV.—El salario mínimo y los sueldos, pensiones y comisiones hasta mil quinientos pesos anuales;

XV.—Los ejidos de los pueblos y la parcela individual que en su fraccionamiento haya correspondido a cada ejidatario, y

XVI.—Los demás bienes exceptuados por la ley.

En los casos de las fracciones VI y VII, el nombramiento del perito será hecho, cuando el juez lo estime conveniente, al practicar la revisión de que trata el artículo 69.

Art. 476.—Nunca ni por ningún motivo podrá embargarse más de las tres cuartas partes de la totalidad de los bienes del deudor. Sobre la cuarta parte restante sólo podrá practicarse embargo, y en la misma proporción antes establecida, por virtud de responsabilidad o deudas contraídas con posterioridad a haberse practicado secuestro sobre las primeras tres cuartas partes. Lo mismo se observará en las ulteriores ejecuciones.

El beneficio de este artículo no es renunciabile.

Art. 477.—En los casos en que el secuestro recaiga sobre sueldos, salarios, comisiones o pensiones,

sólo podrá embargarse la quinta parte del exceso sobre mil quinientos pesos hasta tres mil y la cuarta del exceso sobre tres mil en adelante; pero, para hacer efectivo el pago de alimentos, podrá embargarse la parte bastante para cubrir la pensión alimenticia.

El beneficio de este artículo no es renunciabile.

Art. 478.—El orden que debe guardarse para los secuestros es el siguiente:

I.—Bienes consignados como garantía de la obligación que se reclame;

II.—Dinero;

III.—Créditos realizables en el acto;

IV.—Alhajas;

V.—Frutos y rentas de toda especie;

VI.—Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores;

VII.—Bienes raíces;

VIII.—Sueldos o pensiones;

IX.—Derechos;

X.—Créditos no realizables en el acto.

Art. 479.—El derecho de designar los bienes que han de embargarse en el orden establecido en el artículo anterior, corresponde al deudor; y sólo que éste se rehuse a hacerlo o que esté ausente, podrá ejercerlo el actor, según el conocimiento que tenga de los bienes.

Art. 480.—Cualquier dificultad suscitada en la diligencia no impedirá el embargo; el ejecutor judicial la allanará prudentemente, a reserva de lo que determine el juez.

Art. 481.—El ejecutante puede señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro, sin sujetarse al orden establecido por el artículo 478:

I.—Si para hacerlo estuviere autorizado por el obligado, en virtud de convenio expreso;

II.—Si los bienes que señale el ejecutado no son

bastantes, o si no se sujeta al orden establecido en el artículo 478, y

00058

III.—Si los bienes estuvieren en diversos lugares; en este caso puede señalar los que se hallen en el lugar del juicio.

Art. 482.—El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal, costas, gastos y daños y perjuicios, en su caso, incluyéndose los nuevos vencimientos y réditos hasta la conclusión del procedimiento.

Art. 483.—Cuando, practicado el remate de los bienes consignados como garantía, no alcanzare su producto para cubrir la reclamación, el acreedor puede pedir el embargo de otros bienes.

Art. 484.—Puede decretarse la ampliación de embargo:

I.—En cualquier caso en que, a juicio del juez, no basten los bienes embargados para cubrir la deuda y las costas, y cuando, a consecuencia de las retasas que sufrieren, su avalúo dejare de cubrir el importe de la reclamación, o cuando, siendo muebles, pasaren seis meses sin haberse logrado la venta;

II.—Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y después aparecen o los adquiere, y

III.—En los casos de tercerías.

Art. 485.—La ampliación del embargo no suspende el curso de la ejecución.

Art. 486.—De todo secuestro se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sean objeto de él, a la persona o institución de crédito que, bajo su responsabilidad, nombre el ejecutante, salvo lo dispuesto en los artículos 487, 490 y primero y último párrafos del 491.

El depositario o interventor recibirá los bienes bajo inventario formal, previa aceptación y protesta de desempeñar el cargo, ante el juez o ante el ministro ejecutor, en el acto de la diligencia.

Art. 487.—Cuando se justifique que los bienes que se trate de embargar están sujetos a depósito o intervención con motivo de secuestro judicial anterior, en caso de reembolso no se nombrará nuevo depositario o interventor, sino que el nombrado con anterioridad lo será para todos los reembargos subsecuentes, mientras subsista el primer secuestro, y se pondrá en conocimiento de los jueces que ordenaron los anteriores aseguramientos. Cuando se remueva al depositario, se comunicará el nuevo nombramiento a los jueces que practicaron los ulteriores embargos.

Art. 488.—Cuando, por cualquier motivo, quede insubsistente el primitivo embargo, el juez que lo haya dictado lo comunicará así al que le siga en orden, para que ante él se haga el nombramiento de nuevo depositario; pero el juez que dictó el primer embargo no cancelará, por esta razón, las garantías otorgadas, hasta que el que le siga en orden le comunique que ante él se otorgaron las que exige la ley.

El juez cuyo embargo quede en primer término lo comunicará así a los ulteriores, con expresión de todos los requisitos que ante él llenó el nuevo depositario.

Art. 489.—De todo embargo de bienes raíces se tomará razón en el Registro de Hipotecas del Partido, librándose, al efecto, copia certificada de la diligencia de embargo.

Art. 490.—Cuando el secuestro recaiga sobre dinero efectivo o alhajas, el depósito se hará en una Institución de Crédito y, donde no haya esta institución, en casa comercial de crédito reconocido. En este caso, el billete de depósito se guardará en la caja del juzgado y no se recogerá lo depositado sino en virtud de orden escrita del juez de los autos.

Art. 491.—Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a notificar al deudor o a quien deba pagarlos, que no efectúe el pago al acreedor, sino que, al vencimiento de aquellos, exhiba la cantidad o can-

tidades correspondientes a disposición del juzgado, en concepto de pago, apercibido de repetirlo en caso de desobediencia, observándose, si el crédito o créditos fueren cubiertos, lo dispuesto en el artículo anterior; y al acreedor contra quien se haya decretado el secuestro, que no disponga de esos créditos, bajo las penas que señale el Código Penal. Esto mismo se hará en el caso del artículo 477.

Si llegare a asegurarse el título mismo del crédito, se nombrará un depositario que lo conserve en guarda, quien tendrá obligación de hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y de intentar las acciones y recursos que la ley conceda para hacer efectivo el crédito. Si el crédito fuere pagado, se depositará su importe en los términos del artículo anterior, y desde ese momento cesará en sus funciones el depositario nombrado.

Art. 492.—Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la providencia de secuestro se notificará al juez de los autos respectivos, dándose a conocer al depositario nombrado, a fin de que éste pueda, sin obstáculo alguno, desempeñar las obligaciones que le impone el artículo anterior.

Art. 493.—Cuando el secuestro recaiga sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas, ni créditos, el depositario que se nombre sólo tendrá el carácter de simple custodio de los objetos puestos a su cuidado, los que conservará a disposición del juez respectivo.

Art. 494.—El depositario, al recibir lo secuestrado, pondrá en conocimiento del juzgado el lugar en que quede constituido el depósito y recabará su autorización para hacer, en caso necesario, los gastos del almacenaje.

Si no pudiere el depositario hacer los gastos que demande el depósito, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juez, para que éste, oyendo a las partes en junta que se efectuará dentro de tres días, de-

crete el modo de hacer los gastos, según en la junta se acordare, o, en caso de no haber acuerdo, imponiendo esa obligación al que obtuvo la providencia del secuestro.

Art. 495.—Si los muebles depositados fueren cosas fungibles, el depositario tendrá, además, obligación de imponerse de los precios que en plaza tengan los objetos confiados a su guarda, a fin de que, si encuentra ocasión favorable para la venta, lo ponga en conocimiento del juzgado, con el objeto de que éste determine lo que estime más prudente, en una junta en que oirá al depositario y a las partes, si asistieren, y que se efectuará, a más tardar, dentro de los tres días.

Art. 496.—Cuando hubiere inminente peligro de que las cosas fungibles se pierdan o inutilicen, entre tanto que se cita y efectúa la junta a que se refiere el artículo anterior, el depositario está obligado a realizarlas al mejor precio de la plaza, rindiendo al juzgado cuenta con pago.

Art. 497.—Si los muebles depositados fueren cosas fáciles de deteriorarse o demeritarse, el depositario deberá examinar frecuentemente su estado, y poner en conocimiento del juez el deterioro o demérito que en ellos observe o tema fundadamente que sobrevenga, a fin de que la expresada autoridad, oyendo a las partes y al depositario, como se dispone en el artículo 500, dicte el remedio oportuno para evitar el mal, o acuerde su venta en las mejores condiciones, en vista de los precios en plaza y del demérito que hayan sufrido o estén expuestos a sufrir los objetos secuestrados.

Art. 498.—Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas, o sobre éstas solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador, con las facultades y obligaciones siguientes:

I.—Podrá contratar arrendamientos sobre la base de que las rentas no sean menores de las que, al

tiempo de efectuarse el secuestro, rindiere la finca o departamento de ella que estuviere arrendado;

II.—Recogerá, de quien los conserve, los contratos de arrendamiento vigentes, así como las últimas boletas de pago de contribuciones, a fin de poder cumplir sus atribuciones, y, si el tenedor rehusare entregárselos, lo pondrá en conocimiento del juez para que lo apremie por los medios legales;

III.—Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la finca, en sus términos y plazos; procediendo contra los inquilinos morosos, con arreglo a la ley;

IV.—Hará, sin previa autorización, los gatos ordinarios de la finca, como el pago de contribuciones y los de servicios y aseo, no siendo excesivo su monto; y, si hubiere morosidad de su parte en hacer el pago, será responsable de los daños y perjuicios que con ello se originen;

V.—Presentará, a la Oficina de Contribuciones, en tiempo oportuno, las manifestaciones que la ley de la materia previene; y, de no hacerlo así, serán de su responsabilidad los daños y perjuicios que su omisión cause;

VI.—Para hacer los gastos de conservación, reparación o construcción, ocurrirá al juez, solicitando licencia para ello, acompañando, al efecto, los presupuestos respectivos, y

VII.—Pagará, previa autorización judicial, los réditos de los gravámenes que pesen sobre la finca.

Art. 499.—Para el efecto a que se refiere la fracción I del artículo anterior, si ignorare el depositario cuál era el importe de la renta al tiempo de practicarse el secuestro, recabará autorización judicial.

Art. 500.—Pedida la autorización a que se refiere la fracción VI del artículo 498, el juez citará al depositario y a las partes a una audiencia, que se efectuará dentro de tres días, para que éstas, con vista de los documentos que se acompañen, resuelvan de co-

00000

mún acuerdo si se autoriza o no el gasto. Si no se logra el acuerdo, y el depositario o alguna de las partes insiste en la necesidad de la reparación, conservación o construcción, el juez resolverá autorizando o no el gasto, como lo estime conveniente.

Art. 501.—Cuando se embarguen bienes que estuvieren arrendados o alquilados, se notificará a los arrendatarios que, en lo sucesivo, deben pagar las rentas o alquileres al depositario nombrado, apercibidos de doble pago si no lo hicieren así. Al hacerse la notificación se dejará en poder del inquilino cédula en que se insertará el auto respectivo. Si en el acto de la diligencia, o dentro de las veinticuatro horas de notificarse por instructivo, el inquilino o arrendatario manifestare haber hecho algún anticipo de rentas o alquileres, deberá justificarlo al hacer su manifestación con los recibos del arrendador o alquilador. De lo contrario no se tomará en cuenta y quedará obligado en los términos anteriores.

Art. 502.—Si el secuestro se verifica en una finca rústica o en una negociación mercantil o industrial, el depositario será mero interventor con cargo de la caja, vigilando la contabilidad, y tendrá las siguientes atribuciones:

I.—Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica, en su caso, y las operaciones que en ellas respectivamente se verifiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible;

II.—Vigilará, en las fincas rústicas, la recolección de los frutos y su venta, y recogerá el producto de ésta;

III.—Vigilará las compras y ventas de las negociaciones mercantiles, recogiendo, bajo su responsabilidad, el numerario;

IV.—Vigilará la compra de materia prima, su elaboración y la venta de los productos, en las negociaciones industriales, recogiendo el numerario y efectos de comercio para hacerlos efectivos a su vencimiento;

V.—Ministrará los fondos para los gastos de la negociación o finca rústica, en su caso, y atenderá a que la inversión de esos fondos se haga convenientemente;

VI.—Depositará el dinero que resultare sobrante después de cubiertos los gastos necesarios y ordinarios, como lo previene el artículo 490, y

VII.—Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje, para evitar abusos y malos manejos de los administradores, dando inmediatamente cuenta al juez para su ratificación, y, en su caso, para que determine lo conveniente a remediar el mal.

Art. 503.—Si en el cumplimiento de los deberes que el artículo anterior impone al interventor, encontrare que la administración no se hace convenientemente, o puede perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá en conocimiento del juez, para que, oyendo a las partes y al mismo interventor, en una audiencia que citará con término de tres días, determine lo que estime pertinente.

Art. 504.—El depositario o interventor y el ejecutante, cuando éste lo hubiere nombrado y fuere persona distinta del deudor, serán solidariamente responsables de los actos que ejecutare aquél en el ejercicio de su cargo. Cuando el depositario fuere el mismo deudor, la responsabilidad será exclusivamente suya.

Art. 505.—El depositario deberá tener bienes raíces bastantes, a juicio del juez, para responder del secuestro, o, en su defecto, otorgar fianza en autos por la cantidad que el juez designe. La comprobación de poseer bienes raíces el depositario, o el otorgamiento de la fianza, se hará antes de ponerlo en posesión de su encargo.

Art. 506.—Los depositarios que tengan administración de bienes, presentarán cada mes al tribunal una cuenta de los esquilmos y demás frutos obtenidos y de los gastos erogados, con todos los compro-

bantes respectivos, y copias de éstos para las partes.

Art. 507.—Presentada la cuenta, mandará el juez poner las copias a disposición de las partes y citará a éstas y al depositario a una audiencia verbal, que se efectuará dentro de tres días. Si las partes no objetan la cuenta la aprobará el juez; en caso contrario se tramitará el incidente respectivo. El juez determinará los fondos que deban quedar para los gastos necesarios, mandando depositar el sobrante líquido.

Todo lo relativo a la cuenta mensual formara cuaderno separado.

Art. 508.—El depositario que no rinda la cuenta mensual, será separado de plano de la administración. Al resolver el juez sobre las cuentas objetadas, fallará sobre la remoción o no del depositario, si se le hubiere pedido. Si el removido fuere el deudor, el ejecutante nombrará nuevo depositario; si lo fuere el acreedor o la persona por él nombrada, la nueva designación se hará por el juez, observándose lo dispuesto en el artículo 505.

Art. 509.—Siempre que hubiere cambio de depositario, se prevendrá, a quien tuviere los bienes, que haga entrega de ellos al que fuere nombrado nuevamente, dentro de tres días, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se hará uso inmediato de la fuerza pública.

Art. 510.—Los depositarios de dinero, alhajas, muebles, semovientes, títulos de crédito o fincas urbanas sin cargo de la administración, percibirán, como honorario, el uno por ciento sobre los primeros diez mil pesos de su valor y el medio por ciento sobre el resto. Los depositarios que efectuaren las ventas o gestiones a que se refieren los artículos 491, 492, 495 a 497 y 500, tendrán, además, el honorario que de común acuerdo les fijan las partes, y, si no hubiere este acuerdo, el que, con audiencia de ellas,

les señale el juez, según las circunstancias, sin que baje del uno ni exceda del cinco por ciento sobre el valor de los créditos que cobraren, de los bienes que vendieren, de aquellos cuyo deterioro o demérito se prevenga o de la reparación o construcción que se efectuare. Los que tuvieren administración de fincas urbanas y los interventores de fincas rústicas o negociaciones mercantiles o industriales, percibirán el honorario que, de común acuerdo, les señalen las partes, y, si no hubiere este acuerdo, el que, con audiencia de ellas y según las circunstancias, les fije el juez, sin bajar del cinco ni exceder del diez por ciento sobre el monto de los productos que se recauden, cualesquiera que sean las gestiones, operaciones y actos de administración en general que lleven a cabo.

En los honorarios que este artículo señala al depositario o interventor, queda comprendido cualquier pago de emolumentos de abogados, patronos o procuradores que aquél emplee.

CAPITULO VII.

Remates.

Art. 511.—Todo remate de bienes inmuebles, semovientes y créditos será público y deberá efectuarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente para la ejecución, dentro de los veinte días siguientes a haberlo mandado anunciar; pero en ningún caso mediarán menos de cinco días entre la publicación del último edicto y la almoneda. Cuando los bienes estuvieren ubicados fuera de la jurisdicción del juez, se ampliarán dichos términos por razón de la distancia, atendiendo a la mayor, cuando fueren varias.

Art. 512.—Si los bienes no estuvieren valuados anteriormente, o si los interesados no hubieren convenido precio para el caso de remate, se procederá al avalúo por peritos, observándose las disposiciones relativas a la prueba pericial.

Art. 513.—Cuando el ejecutado no hubiere hecho el nombramiento de perito valuador en el término legal, puede el actor solicitar que el juez nombre perito en rebeldía o que se pida certificado a la Oficina de Contribuciones o al Catastro, respecto al valor de la finca, y éste servirá de base para el remate; pero si en dichas oficinas no hubiere la constancia respectiva, el juez, sin nueva promoción, hará el nombramiento de perito.

Art. 514.—No podrá procederse al remate de bienes raíces, sin que previamente se haya pedido al Registro Público correspondiente un certificado total de los gravámenes que pesen sobre ellos, ni sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan de dicho certificado. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el relativo al período transcurrido desde la fecha de aquél hasta la en que se decretó la venta.

Art. 515.—Los acreedores citados conforme al artículo anterior y los que se presenten con certificados de Registro posteriores tendrán derecho de intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al juez las observaciones que estimen oportunas para garantizar sus derechos y apelar del auto en que se finque el remate; pero sin que su intervención pueda dar lugar a que el juez mande suspender la almoneda.

Art. 516.—Valuados los bienes, se anunciará su venta por dos veces, de cinco en cinco días, publicándose edictos en el Periódico Oficial del Estado y en la tabla de avisos o puerta del juzgado, en los términos señalados. Si los bienes estuvieren ubicados en diversos Partidos Judiciales, en todos éstos se publicarán los edictos, en la puerta del juzgado correspondiente.

Art. 517.—Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará otra, para dentro de los quince días siguientes, mandando que los edictos correspondientes se publiquen, por una sola vez, en la

forma antes indicada, y de manera que entre la publicación o fijación del edicto y la fecha del remate medie un término que no sea menor de cinco días. En la almoneda se tendrá como precio el primitivo, con deducción de un diez por ciento.

Art. 518.—Si en la segunda almoneda no hubiere postura legal, se citará la tercera, en la forma que dispone el artículo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando obrare la misma causa, hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base.

Art. 519.—En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho de pedir la adjudicación, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate. La resolución relativa es apelable en ambos efectos.

Art. 520.—El acreedor a quien se adjudique la cosa reconocerá a los acreedores hipotecarios anteriores sus créditos, hasta donde vaste a cubrir el precio de adjudicación, para pagárselos al vencimiento de sus escrituras.

Art. 521.—Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado a la cosa, con tal que la parte de contado sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado.

Art. 522.—Cuando, por el importe del valor fijado a los bienes, no sea suficiente la parte de contado para cubrir lo sentenciado, será postura legal las dos terceras partes de aquél, dadas de contado.

Art. 523.—Las posturas se formularán por escrito, expresando, el mismo postor o su representante con poder jurídico:

I.—El nombre, capacidad legal y domicilio del postor;

II.—La cantidad que se ofrezca por los bienes licitados;

III.—La cantidad que se dé de contado y los términos en que se haya de pagar el resto;

IV.—El interés que deba causar la suma que se quede reconociendo, el que no puede ser menor del nueve por ciento anual, y

V.—La sumisión expresa al juez que conozca del negocio para que haga cumplir el contrato.

Art. 524.—Cuando se hagan posturas ofreciendo de contado sólo una parte del precio, los postores exhibirán, en el acto del remate el diez por ciento de aquella en numerario o en cheque certificado a favor del juez, y la cantidad que queden adeudando la garantizarán con primera hipoteca o prenda, expresando, al formular su postura, los bienes que quedarán sujetos al gravamen respectivo. Concluída la diligencia, se devolverán las exhibiciones a sus dueños, excepto la que corresponda al postor en quien se finque el remate, la que, como garantía del cumplimiento de su obligación se mandará depositar como se dispone en el artículo 490, observándose, respecto del billete de depósito, lo que ahí se previene.

Art. 525.—Cuando el importe de las posturas y mejoras se ofrezca de contado debe exhibirse en numerario o en cheque certificado a favor del juez, en el acto del remate; y, fincado éste en favor del postor que hubiere hecho la exhibición, el juez procederá en los términos de la parte final del artículo anterior.

Art. 526.—En el caso del artículo 524, si el postor no cumpliera sus obligaciones, ya porque se negare a otorgar la garantía ofrecida, ya porque, extendida la escritura correspondiente, en su caso, se negare a firmarla en el término legal, el juez, cerciorándose de estas circunstancias, declarará sin efecto el remate para citar nuevamente a la misma almoneda, y el postor perderá el diez por ciento exhibido, el que

se aplicará, por vía de indemnización, por partes iguales, al ejecutante y al ejecutado.

Art. 527.—Cuando el ejecutante quiera hacer postura, la garantía o la exhibición de contado, en su caso, se limitará al exceso de la postura, sobre el importe de lo sentenciado.

Art. 528.—El postor no puede rematar para un tercero sino con poder bastante, quedando prohibido hacer postura sin declarar desde luego el nombre de la persona para quien se hace.

Art. 529.—Desde que se anuncie el remate, y durante éste se pondrán de manifiesto los planos que hubiere, y estarán a la vista los avalúos.

Art. 530.—Los postores tendrán la mayor libertad para hacer sus propuestas, debiendo ministrárseles los datos que pidan y se hallen en los autos.

Art. 531.—El juez decidirá de plano, bajo su responsabilidad, cualquiera cuestión que se suscite relativa al remate.

Art. 532.—El día del remate, a la hora señalada, pasará el juez, personalmente, lista de los postores presentados, y declarará que va a procederse al remate, y ya no admitirá nuevos postores. En seguida revisará las propuestas, desechando desde luego las que no contengan postura legal y las que no estuvieren debidamente garantizadas.

Art. 533.—Calificadas de buenas las posturas, el juez mandará darles lectura por la secretaría, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas legales, el juez declarará preferente la que importe mayor cantidad, y si dos o más importaren la misma cantidad, será preferente la que esté mejor garantizada.

Art. 534.—Hecha la declaración de la postura considerada preferente, el juez preguntará si alguno de los postores la mejora. En caso de que alguno la mejore antes de transcurrir cinco minutos de hecha la pregunta, interrogará si algún postor puja la me-

jora; y así sucesivamente se procederá con respecto a las pujas que se hagan. En cualquier momento en que, pasados cinco minutos de hecha cualquiera de las mencionadas preguntas, no se mejorare la última postura o puja, declarará el juez fincado el remate a favor del postor que hubiere hecho aquella. La resolución relativa es apelable en ambos efectos.

Art. 535.—Antes de fincado el remate, puede el deudor librar sus bienes, si paga en el acto lo sentenciado.

Art. 536.—Al declarar fincado el remate, mandará el juez que, dentro de los tres días siguientes y previo pago de la cantidad ofrecida de contado, se otorgue, a favor del rematante, la escritura de venta correspondiente, conforme a la ley, en los términos de su postura, y que se le entreguen los bienes rematados.

Art. 537.—Si el deudor o quien deba hacerlo se niega a otorgar la escritura, o si no lo hace dentro del término de cinco días de haberse mandado otorgar, la otorgará el juez, en su rebeldía, sin más trámite; pero en todo caso es responsable de la evicción el deudor.

Art. 538.—Otorgada la escritura, pondrá el juez al comprador en posesión de los bienes rematados, si lo pidiere, con citación de los colindantes, arrendatarios, aparceros, colonos y demás interesados de que se tenga noticia.

Art. 539.—Con el precio se pagará al acreedor hasta donde alcance, y, si hubiere gastos y costas pendientes de liquidar, se mantendrá en depósito la cantidad que se estime bastante para cubrirlos, hasta que sean aprobados los que faltaren de pagarse; pero, si el ejecutante no formula su liquidación dentro de los ocho días de hecho el depósito o, en cualquier caso, dejare pasar igual término sin proseguir su instancia de liquidación, perderá el derecho de reclamarlos y se mandará entregar lo depositado al deudor,

salvo lo previsto en la parte final del artículo ⁰⁰⁰⁰⁵siguiente.

Art. 540.—Si la parte que se diere de contado excediere del monto de lo sentenciado, formada y aprobada la liquidación, se entregará la parte restante al ejecutado, si no se hallare retenida a instancia de otro acreedor, observándose, en su caso, lo dispuesto sobre concursos.

Art. 541.—En la liquidación deberán comprenderse todos los gastos y costas posteriores a la sentencia de remate.

Art. 542.—Cuando los bienes estuvieren sujetos a diversos embargos, cualquier embargante puede llevarlos a remate; pero sólo se le pagará el importe de su crédito después de haber sido pagados los acreedores preferentes, cuando ya hubiere sentencia firme que defina sus créditos, o reservada la cantidad necesaria para cubrir principal, intereses y costas de dichos créditos preferentes, en caso de que aun no haya sentencia. El sobrante líquido se entregará al ejecutado o se pondrá a disposición del juez que corresponda, si hubiere embargos posteriores.

Art. 543.—Cuando, al exigirse la deuda, convengan el ejecutante y el ejecutado en que aquél se adjudique la cosa en el precio que entonces le fijen, sin haberse renunciado el remate, éste se hará teniéndose como postura legal para terceros la que exceda del precio señalado para la adjudicación y cubra con la parte de contado el importe de lo sentenciado. Si no hubiere postura legal, se llevará desde luego a efecto la adjudicación, en el precio convenido. Cuando se hubiere renunciado expresamente la subasta, la adjudicación se hará luego que cause ejecutoria la sentencia respectiva y haya transcurrido el término fijado para su cumplimiento.

Art. 544.—En los casos de hipoteca o prenda en que el deudor haya convenido, en el contrato, el precio que servirá de base para el remate de los bienes

hipotecados o empeñados, no se hará avalúo judicial, sino que el convenido será la base para la primer moneda.

Art. 545.—Cuando los bienes cuyo remate se haya decretado fueren muebles, se observará lo siguiente:

I.—Se efectuará su venta, siempre de contado, por medio de corredor o casa de comercio que expendá objetos o mercancías similares, haciéndoles saber el precio, para la busca de compradores, que será igual a las dos terceras partes del valor fijado por peritos o por convenio de las partes;

II.—Si pasados diez días de puestos a la venta, no se hubiere logrado ésta, el juez ordenará una rebaja del diez por ciento del valor fijado primitivamente, y, conforme a ella, comunicará al corredor o casa de comercio el nuevo precio de venta, y así sucesivamente cada diez días, hasta obtener la realización;

III.—Efectuada la venta, el corredor o casa de comercio entregará los bienes al comprador, otorgándosele la factura correspondiente, que firmará el ejecutado o el juez en su rebeldía;

IV.—En cualquier tiempo, después de ordenada la venta, puede el ejecutante pedir la adjudicación de los bienes, por el precio que tuvieren señalado al hacer la petición, eligiendo los que basten para cubrir su crédito, según lo sentenciado;

V.—Los gastos de corretaje o comisión serán de cuenta del deudor, y se deducirán preferentemente del precio de venta que se obtenga; y

VI.—En todo lo demás se estará a las disposiciones de este Capítulo.

LIBRO TERCERO.

Procedimientos especiales.

TITULO PRIMERO.

Concursos.

CAPITULO I

Reglas generales.

Art. 546.—El concurso del deudor no comerciante

puede ser voluntario o necesario. Es voluntario cuando el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores, presentándose por escrito, acompañando un estado de su activo y pasivo con expresión del nombre y domicilio de sus deudores y acreedores, así como una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso. Sin estos requisitos no se admitirá la solicitud. No se incluirán en el activo los bienes que no puedan embargarse.

Es necesario cuando dos o más acreedores de plazo cumplido han demandado y ejecutado, ante uno mismo o diversos jueces, a su deudor y no haya bienes bastantes para que cada uno secuestre lo suficiente para cubrir su crédito y costas.

Art. 547.—En el caso del párrafo primero del artículo anterior, procederá el juez, de plano, en la forma prevista por el artículo siguiente. En el caso del párrafo último deberán acreditarse plenamente los requisitos exigidos en el mismo para proceder en la forma indicada.

Art. 548.—Declarado el concurso el juez resolverá:

I.—Hacer saber a los acreedores la promoción del concurso, en la forma prevista para los emplazamientos por edictos, además de hacerlo personalmente o por exhortos a los acreedores cuyos domicilios se conozcan;

II.—Nombrar síndico;

III.—Decretar el embargo y aseguramiento de los bienes, libros, correspondencia y documentos del deudor, diligencias que deberán practicarse en el día, sellando las puertas de los almacenes y despacho del deudor y muebles susceptibles de embargo que se hallen en el domicilio del mismo deudor;

IV.—Hacer saber a los deudores la prohibición de hacer pagos o entregar efectos al concursado y la orden a éste de entregar los bienes al síndico, bajo el apercibimiento de segunda paga a los primeros y de proce-

derse penalmente en contra del deudor que ocultare cosas de su propiedad;

V.—Señalar un término de nueve días, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos el emplazamiento, para que los acreedores presenten sus demandas; con apercibimiento de que las que no se presentan en el término indicado, no entrarán en concurso, sino que se dejarán a los interesados sus derechos a salvo;

VI.—Pedir a los jueces ante quienes se tramiten pleitos contra el concursado, que los envíen para su acumulación al juicio universal. Se exceptúan los juicios hipotecarios que estén pendientes y los que se promuevan después y los juicios que se hubiesen fallado en primera instancia; éstos se acumularán una vez que se decidan definitivamente. Se exceptúan igualmente los que procedan de créditos prendarios y los que no sean acumulables por disposición expresa de la ley.

Art. 549.—El deudor puede oponerse al concurso necesario dentro de los tres días siguientes a la notificación respectiva, substanciándose su oposición por el procedimiento incidental, sin suspender las medidas a que se refiere el artículo anterior. La resolución que se pronuncie es apelable en el efecto devolutivo.

Revocado el auto que declaró abierto el concurso se repondrán las cosas al estado que tenían antes.

Art. 550.—Los acreedores, aun los garantizados con privilegio, hipoteca o prenda, podrán pedir, por cuerda separada, que se revoque la declaración del concurso, aun cuando el concursado haya manifestado ya su estado o haya consentido el auto judicial respectivo.

Art. 551.—El concursado que hubiere hecho cesión de bienes no podrá pedir la revocación de la declaración respectiva, a no ser que alegue error en la apreciación de sus negocios.

En este caso y en el previsto en el artículo ante-

rior la revocación se tramitará como lo previene el artículo 549.

Art. 552.—El concursado, en el caso de concurso forzoso, deberá presentar al juzgado, dentro de los cinco días de la notificación del auto que lo declare, un estado detallado de su activo y pasivo, con nombres y domicilios de acreedores y deudores, privilegiados y valistas; y, si no lo presentare, lo hará el síndico.

Art. 553.—De las demandas presentadas dentro del término señalado por la fracción V del artículo 548, se correrá traslado al deudor, por el término legal, siguiéndose los respectivos juicios en la forma prevista por el Libro Segundo, cada uno por separado, hasta la resolución definitiva de los mismos.

Art. 554.—Resueltos los juicios de que trata el artículo anterior, se pondrán a la vista de todos los acreedores, por el término de quince días, para que preparen sus alegatos sobre graduación de créditos, que harán valer en la audiencia respectiva, que se celebrará dentro de los quince siguientes a la expiración del mencionado término.

En la resolución que ponga a la vista de los acreedores los juicios, se señalará día y hora para la audiencia de alegatos de graduación de los créditos. Esta audiencia se celebrará en la forma prevista para los alegatos en el juicio y no serán partes en ella más que los acreedores.

Art. 555.—Celebrada la audiencia de alegatos, la sentencia de graduación de los créditos se pronunciará en la forma y términos establecidos en el Libro Segundo.

CAPITULO II.

Funciones del Síndico.

Art. 556.—Aceptado el cargo por el síndico se le pondrá bajo inventario, desde el día siguiente del aseguramiento, en posesión de los bienes, libros y pa-

peles del deudor. Si éstos estuviesen fuera del lugar del juicio, se inventariarán con intervención de la autoridad judicial exhortada al efecto, y se citará al deudor para la diligencia.

El dinero se depositará en el establecimiento destinado al efecto por la ley, en la forma establecida por este Código, dejándose en poder del síndico lo indispensable para atender a los gastos de administración.

Art. 557.—El síndico es el administrador de los bienes del concurso, debiendo entenderse con él las operaciones ulteriores a toda cuestión judicial o extrajudicial que el concursado tuviere pendiente o que hubiere de iniciarse. La defensa de los créditos en favor del concurso corresponderá al síndico, cuando el concursado se niegue a entablar las correspondientes demandas o a continuar los juicios respectivos.

Ejecutará personalmente las funciones del cargo, a menos que tuviere que desempeñar sus funciones fuera del asiento del juzgado, caso en el cual podrá valerse de mandatarios.

Art. 558.—No puede ser síndico el pariente del concursado o del juez dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo de afinidad, ni su amigo, ni su socio, ni el enemigo, ni con quien tenga comunidad de intereses.

El que se halle en alguno de estos casos deberá excusarse y ser substituído inmediatamente.

Art. 559.—El síndico deberá otorgar fianza dentro de los primeros quince días siguientes a la aceptación del cargo.

Art. 560.—Si el síndico comprendiere que hay necesidad de realizar efectos, bienes o valores que pudieran perderse, disminuir su precio o deteriorarse, o fuere muy costosa su conservación, podrá enajenarlos con autorización del juez, quien la dará, previa audiencia del Ministerio Público, para que aquél haga la enajenación en el plazo que le señale, según la urgencia del caso.

Esto mismo se hará cuando fuere estrictamente indispensable para cubrir gastos urgentes de administración y conservación.

Art. 561.—El síndico deberá presentar, del primero al 10 de cada mes, en cuaderno por separado, un estado de la administración, previo depósito, en el establecimiento respectivo, del dinero que hubiere percibido. Esas cuentas estarán a disposición de los interesados hasta el fin del mes; término dentro del cual podrán ser objetadas.

Las objeciones se substanciarán por el procedimiento incidental.

Art. 562.—El síndico será removido de plano si dejare de rendir la cuenta mensual o dejare de caucionar su manejo.

Será removido, por los trámites establecidos para los incidentes, por mal desempeño de su cargo o por comprobarse alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 558.

Art. 563.—Los honorarios de los síndicos se determinarán en la forma prevista por el artículo 510, aumentados hasta en un ciento por ciento, a juicio del juez y dada la importancia y dificultad de la administración de los bienes del concurso. La administración se sujetará a las reglas prevenidas para los depositarios judiciales, en lo que fueren aplicables.

TITULO SEGUNDO.

Sucesiones.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Art. 564.—Los jueces municipales son competentes para conocer de toda clase de juicios sucesorios, cuyo caudal no exceda de un mil pesos; de los que excedan de dicha cantidad conocerán los jueces de Partido, así como de aquellos en que sea heredero o legatario el Estado o la Beneficencia.

Art. 565.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil sobre administración del cónyuge superviviente, dictará el juez, con audiencia del Ministerio Público, a instancia de parte legítima, las medidas necesarias para asegurar los bienes, a efecto de evitar que se oculten o dilapiden.

Art. 566.—Dentro de las medidas que el juez debe dictar se comprenden necesariamente las siguientes:

I.—Reunir los papeles del difunto, para depositarlos en el secreto del juzgado, debidamente inventariados;

II.—Gestionar de la oficina que corresponda, que le remita la correspondencia y paquetes o bultos dirigidos al autor de la sucesión, los que serán abiertos en presencia del Ministerio Público, a efecto de ordenar lo que proceda, si se tratare de asuntos urgentes y reservar los restantes en la forma prevista en la fracción anterior, y

III.—Mandar depositar, en establecimiento autorizado por la ley, el dinero y alhajas.

El Ministerio Público asistirá a la diligencia de aseguramiento de los bienes.

Art. 567.—De todos los bienes muebles que se encuentren se formará un riguroso inventario, del que se dejará un duplicado a la persona en cuyo poder se encuentren, la cual tendrá, mientras no haya resolución judicial que disponga otra cosa, las obligaciones y responsabilidades, respecto de ellos, de los depositarios judiciales, con excepción de la de otorgar fianza. Las mismas obligaciones tendrán los poseedores de los bienes inmuebles.

Art. 568.—De las cantidades recogidas se dispondrá por el Juzgado, de oficio, con audiencia del Ministerio Público, que se hagan los gastos urgentes y de administración, facilitando las cantidades indispensables para pagos de contribuciones y de sueldos o salarios. Lo propio se hará respecto de alimentos.

Art. 569.—Las medidas de que tratan los artículos 565 a 567 se ordenarán por cualquier juez, aun cuando no sea competente para conocer de la sucesión, y aun tratándose de jueces municipales, respecto de los bienes existentes dentro de su territorio jurisdiccional, comunicando, inmediatamente, al juez que sea competente, las medidas tomadas, enviándole copia íntegra del expediente relativo.

Art. 570.—Las medidas de aseguramiento adoptadas se comunicarán a la Administración General de Rentas y a la oficina local respectiva, para que éstas practiquen las investigaciones que procedan, respecto de los bienes, en defensa de los intereses fiscales, y aporten al Ministerio Público los datos obtenidos, a efecto de que éste promueva lo que sea procedente.

Art. 571.—El juez competente, al tener por radicada una sucesión, además de las medidas de que tratan los artículos anteriores, a solicitud de los interesados, del Ministerio Público o de oficio, ordenará la publicación de edictos, en la forma prevista para los emplazamientos, haciendo saber la radicación del juicio sucesorio para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia y los acreedores de la misma.

Art. 572.—En todo juicio sucesorio tendrá el Fisco del Estado un interventor que cuide de sus intereses, designado por las autoridades hacendarias y sin honorarios a cargo de la sucesión. Su intervención cesará luego que estén cubiertos los intereses fiscales.

Art. 573.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si pasados diez días de la muerte del autor de una sucesión no se presenta el testamento, si en él no está nombrado el albacea o si no se denuncia el intestado por quien acredite ser heredero legítimo, el juez nombrará un interventor que reúna los requisitos siguientes:

I.—Ser mayor de edad;

II.—Ser de notoria buena conducta;

III.—Estar domiciliado en el lugar donde se abra la sucesión;

IV.—Otorgar fianza para responder de su manejo. La fianza deberá otorgarse en un plazo de diez días, contados a partir de la aceptación del cargo, bajo pena de remoción.

Art. 574.—El interventor recibirá los bienes por inventario, y tendrá el carácter de simple depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas que las de mera conservación y las que se refieran al pago de las deudas mortuorias, y siempre con autorización judicial.

Art. 575.—El interventor cesará en su encargo luego que se nombre o dé a conocer al albacea, y entregará a éste los bienes, sin que pueda retenerlos bajo ningún pretexto, aun por razón de mejoras o gastos de mantención o reparación.

Art. 576.—Al promoverse la apertura de una sucesión debe presentarse una copia certificada del acta relativa al fallecimiento del autor de la herencia, expedida por el encargado del Registro Civil, y, no siendo esto posible, otro documento o prueba bastante.

Art. 577.—Cuando, con fundamento en la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ausente, se haya abierto su sucesión, si durante la tramitación del asunto se hace constar la fecha de la muerte, desde ella se entenderá abierta la sucesión; y, cesando en sus funciones el representante, se procederá al nombramiento de interventor o albacea; con arreglo a derecho.

Art. 578.—En todo asunto sucesorio en que haya herederos o legatarios menores que no tuvieren representante legítimo, dispondrá el juez que se provea al nombramiento de tutores.

Art. 579.—En todo asunto sucesorio en que haya herederos o legatarios ausentes, o incapacitados que no tengan representante legítimo o que el que tengan sea interesado en la herencia y sus intereses sean

opuestos a los de aquéllos, o en que sea heredera la beneficencia pública y no tenga representante especial, la representación corresponderá al Ministerio Público.

También será parte el Ministerio Público en todo asunto sucesorio mientras no sea hecho el reconocimiento o la declaración de herederos. Una vez hecho el reconocimiento o la declaración, cesará de intervenir, salvo, en su caso, lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 580.—El representante legal en las sucesiones es el albacea, en todo lo que se refiere a los intereses generales. En cuanto a los particulares de cada heredero o legatario, son éstos parte para ejercitar sus respectivos derechos.

Art. 581.—El albacea manifestará, dentro de tres días de hacérsele saber el nombramiento, si acepta y protesta desempeñar su encargo con arreglo a la ley.

Es aplicable al albacea lo dispuesto por la fracción IV del artículo 573.

Art. 582.—Son acumulables a los juicios testamentarios y a los intestados:

I.—Los pleitos ejecutivos incoados contra el finado antes de su fallecimiento;

II.—Las demandas ordinarias por acción personal, pendientes en primera instancia contra el finado;

III.—Los pleitos incoados contra el mismo, por acción real, que se hallen en primera instancia, cuando no se sigan en el juzgado del lugar en que esté sita la cosa inmueble o donde se hubieren hallado los muebles sobre que se litigue;

IV.—Los juicios que sigan los herederos deduciendo la acción de petición de herencia, ya impugnando el testamento o la capacidad de los herederos presentados o reconocidos, o exigiendo su reconocimiento, siempre que esto último acontezca antes de la adjudicación;

V.—Las acciones de los legatarios, reclamando sus legados, siempre que sean posteriores a la facción de inventarios y antes de la adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensiones, de educación y de uso y habitación.

Art. 583.—Iniciado el juicio y siendo los herederos mayores de edad podrán, después del reconocimiento de sus derechos, encomendar a un notario la formación de inventarios, avalúos, liquidación y partición de la herencia, procediendo en todo de común acuerdo, que constará en una o varias actas. Podrán convenir los interesados que los acuerdos se tomen a mayoría de votos, que siempre será por personas.

Cuando no hubiere este convenio, la oposición de parte se substanciará ante el juez que previno, por el procedimiento incidental.

Art. 584.—El juez dará aviso de la separación inmediatamente al fisco, haciéndole saber el nombre del notario y los demás particulares.

Art. 585.—En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho.

Art. 586.—La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos:

I.—El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado;

II.—Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia;

III.—Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios;

IV.—Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores;

V.—Las resoluciones que se pronuncien sobre la

validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos.

Art. 587.—La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá:

- I.—El inventario provisional del interventor;
- II.—El inventario y avalúo que forme el albacea;
- III.—Los incidentes que se promuevan;
- IV.—La resolución sobre el inventario y avalúo.

Art. 588.—La tercera sección se llamará de administración y contendrá:

- I.—Todo lo relativo a la administración;
- II.—Las cuentas, su glosa y calificación;
- III.—La comprobación de haberse cubierto el impuesto.

Art. 589.—La cuarta sección se llamará de partición y contendrá:

- I.—El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios;
- II.—El proyecto de partición de los bienes;
- III.—Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores;
- IV.—Los arreglos relativos;
- V.—Las resoluciones sobre los proyectos mencionados;
- VI.—Lo relativo a la aplicación de los bienes.

Art. 590.—Si durante la tramitación de un intestado apareciere el testamento, se dará por terminado aquél para abrir el juicio de testamentaría a no ser que las disposiciones testamentarias se refieran solo a una parte de los bienes hereditarios. En este caso se acumularán los juicios bajo la representación del ejecutor testamentario, y la liquidación y partición serán siempre comunes; los inventarios lo serán también cuando los juicios se acumulen antes de su liquidación.

CAPITULO II.

Testamentarias.

Art. 591.—El que promueva el juicio de testamentaria debe presentar el testamento del difunto. El juez, sin más trámite, lo tendrá por radicado y, en el mismo auto, convocará a los interesados a una junta para que, si hubiere albacea nombrado en el testamento, se les dé a conocer, y, si no lo hubiere, procedan a elegirlo con arreglo a lo prescrito en el Código Civil.

Art. 592.—La junta se verificará dentro de los ocho días siguientes a la citación, si la mayoría de los herederos reside en el lugar del juicio. Si la mayoría residiere fuera del lugar del juicio, el juez señalará el plazo que crea prudente, atendidas las distancias. La citación se hará por correo certificado.

Art. 593.—Si no se conociere el domicilio de los herederos y éstos estuvieren fuera del lugar del juicio, se mandarón publicar edictos en el lugar del juicio, en el del último domicilio del finado y en el de su nacimiento, que se fijarán en la puerta del juzgado correspondiente.

Estando ausentes los herederos y sabiéndose su residencia se les citará por exhorto.

Art. 594.—Si hubiere herederos menores o incapacitados que tengan tutor, mandará citar a éste para la junta.

Si los herederos menores no tuvieren tutor, se dispondrá que se les nombre, con arreglo a derecho.

Art. 595.—Respecto del declarado ausente se entenderá la citación con el que fuere su representante legítimo.

Art. 596.—Se citará también al Ministerio Público para que represente a los herederos cuyo paradero se ignore y a los que, habiendo sido citados, no se presentaren.

Luego que se presenten los herederos ausentes cesará la representación del Ministerio Público.

Art. 597.—Si el tutor o cualquier representante legítimo de algún heredero menor o incapacitado tiene interés en la herencia, proveerá el juez a éste con arreglo a derecho de un tutor especial para el juicio, o hará que lo nombre si tuviere edad para ello. La intervención del tutor especial se limitará sólo a aquello en que el tutor ordinario o representante legítimo tenga incompatibilidad.

Art. 598.—Si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el juez, en la misma junta reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados, en las porciones que les correspondan.

Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, se substanciará el juicio correspondiente con el albacea o el heredero respectivamente, sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los bienes en la partición.

Art. 599.—En la junta prevenida por el artículo 591 podrán los herederos nombrar interventor, conforme a la facultad que les concede el Código Civil y se nombrará precisamente en los casos en que impone tal obligación el mismo Código.

CAPITULO III.

Intestados.

Art. 600.—Al promoverse un intestado justificará el denunciante el parentesco o lazo, si existiere, y que lo hubiere unido con el autor de la herencia, en el grado por el que pueda considerarse heredero legítimo.

Debe el denunciante indicar los nombres y domicilio de los parientes en línea recta y del cónyuge superviviente, o, a falta de ellos, los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible se presenta-

rán las partidas del Registro Civil que acredite la relación.

Art. 601.—El juez tendrá por radicada la sucesión y mandará notificarlo por correo certificado a las personas señaladas como descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite, o, en su defecto, como parientes colaterales, dentro del cuarto grado, haciéndoles saber el nombre del finado con las demás particulares que lo identificaren y la fecha y lugar del fallecimiento, para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea.

Art. 602.—Los herederos ab-intestato que sean descendientes del finado, podrán obtener la declaración de su derecho, justificando, con los correspondientes documentos o con la prueba que sea legalmente posible, su parentesco con el mismo, y con información testimonial que acredite que ellos o los que designen son los únicos herederos.

Art. 603.—Dicha información se practicará con citación del Ministerio Público, quien, dentro de los tres días que sigan al de la diligencia, debe formular su pedimento. Si éste fuere impugnando sólo de incompleta la justificación, se dará vista a los interesados para que subsanen la falta.

Art. 604.—Practicadas las diligencias antes dichas, haya o no pedimento del Ministerio Público, el juez, sin más trámites, dictará auto haciendo la declaración de herederos ab-intestato, si la estimare procedente, o denegándola, con reserva de sus derechos a los que la hayan pretendido para deducirla en el juicio.

Este auto será apelable en el efecto devolutivo.

Art. 605.—El mismo procedimiento establecido en los tres artículos que preceden se empleará para la declaración de herederos ab-intestato, cuando lo solicitaren ascendientes del finado o el cónyuge supérstite.

Art. 606.—Hecha la declaración de herederos, de acuerdo con los artículos precedentes, el juez, en el

mismo auto en que la hizo, citará a una junta de herederos, dentro de los ocho días siguientes, para que designen albacea. Se omitirá la junta si el heredero fuere único, o si los interesados, desde su presentación, dieren su voto por escrito o en comparecencia; en este último caso, al hacerse la declaración de herederos, hará el juez la designación de albacea.

Art. 607.—Si ninguno de los pretendientes hubiere sido declarado heredero, continuará como albacea judicial el interventor que se hubiere nombrado antes o que, en su defecto, se nombre.

Art. 608.—Si la declaración de herederos la solitaren parientes colaterales dentro del cuarto grado, el juez, después de recibir los justificantes del entroncamiento y la información testimonial del artículo 602, mandará fijar avisos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento y origen del finado, anunciando su muerte sin testar y los nombres y grado de parentesco de los que reclaman la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el juzgado a reclamarlo, dentro de cuarenta días, contados a partir de la fecha en que se haya hecho la última fijación, cualquiera que sea, de los indicados, el lugar en que ésta se haya verificado.

El juez prudentemente podrá ampliar el plazo anterior cuando, por el origen del difunto u otras circunstancias, se presuma que podrá haber parientes fuera de la República.

Los avisos se insertarán además, para mayor publicidad, dos veces, de diez en diez días, en un periódico de información, si el valor de los bienes hereditarios excediere de cinco mil pesos.

Art. 609.—Transcurrido el término de los avisos, si nadie se hubiere presentado, trayendo los autos a la vista, el juez hará el nombramiento prevenido en el artículo 606.

Si hubieren comparecido otros parientes, el juez

les señalará un término no mayor de quince días para que, con audiencia del Ministerio Público, presenten los justificantes del parentesco, procediéndose como se indica en los artículos 604 a 608.

Art. 610.—Si dentro del mes de iniciado el juicio sucesorio no se presentaren descendientes, cónyuge, ascendientes o colaterales dentro del cuarto grado, el juez mandará fijar edictos en los sitios públicos, de la manera y por el término expresados en el artículo 608, anunciando la muerte intestada de la persona de cuya sucesión se trate y llamando a los que se crean con derecho a la herencia.

Art. 611.—Los que comparezcan a consecuencia de dichos llamamientos, deberán expresar, por escrito, el grado de parentesco en que se hallen con el causante de la herencia, justificándolo con los correspondientes documentos, acompañados del árbol genealógico, en la parte relativa al entroncamiento. Estos escritos y documentos se unirán a la sección de sucesión, por el orden en que se vayan presentando.

Art. 612.—Si a consecuencia de dichos llamamientos se presentare un aspirante o varios que aleguen igual derecho fundados en un mismo título, se procederá como se indica en los artículos 604 a 608.

Si fueren dos o más los aspirantes a la herencia y no estuvieren conformes en sus pretensiones, los impugnadores harán de demandantes y los impugnados de demandados, debiendo, los que hagan causa común, formular sus pretensiones o defensas en un mismo escrito y bajo representante común. La controversia se substanciará en juicio, y el Ministerio Público presentará su pedimento en la audiencia respectiva.

Art. 613.—La declaración de herederos de un intestado surte el efecto de tener por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto a la persona en cuyo favor se hizo.

Art. 614.—Después de los plazos a que se refie-

ren los artículos 608 y 609 no serán admitidos los que se presenten deduciendo derechos hereditarios; pero les queda a salvo su derecho para que lo hagan valer en los términos de la ley, contra los que fueren declarados herederos.

Art. 615.—Al albacea se le entregarán los bienes sucesorios, así como los libros y papeles, debiendo rendir cuentas al Juzgado, de las cuales remitirá copias al interventor o interventores, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil.

Art. 616.—Si no se hubiere presentado ningún aspirante a la herencia, antes o después de los edictos, o no fuere reconocido con derecho a ella ninguno de los pretendientes, se tendrán como herederos los que, en su defecto, señalen el Código Civil u otras leyes.

CAPITULO IV.

Inventario y avalúo.

Art. 617.—Dentro de diez días de haber aceptado su cargo el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 620, y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlos.

El inventario y el avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes.

Art. 618.—El inventario se practicará por el ministro ejecutor del juzgado o por un notario nombrado por la mayoría de los herederos, cuando ésta la constituyan menores de edad o cuando los establecimientos de beneficencia o el fisco tuvieran interés en la sucesión como herederos o legatarios.

Art. 619.—Deben ser citados por correo certificado, para la formación del inventario, el cónyuge que sobrevive, y los herederos, acreedores y legatarios que se hubieren presentado.

El juez puede concurrir cuando lo estime oportuno.

Art. 620.—Los herederos, dentro de los diez días que sigan a la declaración o reconocimiento de sus derechos, designarán, a mayoría de votos, un perito o peritos valuadores, y, si no lo hicieren o no se pusieren de acuerdo, el juez lo designará.

Art. 621.—El notario o el albacea, en su caso, procederá, en el día señalado, con los que concurran, a hacer la descripción de los bienes, con toda claridad y precisión, por el orden siguiente: dinero, alhajas, efectos de comercio o industria, semovientes, frutos, muebles, raíces, créditos, documentos y papeles de importancia, bienes ajenos que tenía en su poder el finado en comodato, depósito, prenda o bajo cualquier otro título, expresándose éste.

Art. 622.—La diligencia o diligencias de inventario serán firmadas por todos los concurrentes, y en ellas se expresará cualquiera disconformidad que se manifestare, designando los bienes sobre cuya inclusión o exclusión recae.

Art. 623.—El perito o peritos designados valorará todos los bienes inventariados.

Art. 624.—Los títulos y acciones que se coticen en la bolsa de comercio podrán valorarse por informes de la misma. No será necesario tasar los bienes cuyos precios consten en instrumento público, cuya fecha esté comprendida dentro del año inmediato anterior.

Art. 625.—Practicados el inventario y avalúo, serán agregados a los autos y se pondrán de manifiesto en la secretaría por cinco días, para que los interesados puedan examinarlos, citándoseles, al efecto, por correo certificado.

Art. 626.—Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámites. Si se dedujese oposición contra el inventario o avalúo, se sustanciarán las que se presentaren en forma incidental, con una audiencia común, si fueren varias, a la que concurrirán los interesados y el peri-

to que hubiere practicado la valorización para que, con las pruebas rendidas, se discuta la cuestión promovida.

Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario.

Art. 627.—Si los que dedujeren oposición no asistieren a la audiencia, se les tendrá por desistidos. Si dejaren de presentarse los peritos, perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos practicados.

En la tramitación de este incidente cada parte es responsable de la asistencia de los peritos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno de los propuestos.

Art. 628.—Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar representante común en la audiencia.

Art. 629.—Si las reclamaciones tuvieren por objeto impugnar simultaneamente el inventario y el avalúo respecto de un mismo bien, una misma resolución abarcará las dos oposiciones.

Art. 630.—El inventario hecho por el albacea o por heredero aprovecha a todos los interesados, aunque no hayan sido citados, incluso los sustitutos y los herederos por intestado.

El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron.

Aprobado el inventario por el juez o por el consentimiento de todos los interesados, no puede reformarse sino por error o dolo, declarados por sentencia definitiva pronunciada en juicio.

Art. 631.—Si pasados los términos que señala el artículo 617, el albacea no promoviere o no concluye-

En el inventario, se estará a lo dispuesto por el Código Civil, removiéndolo.

La remoción a que se refiere este precepto será de pleno.

Art. 632.—Los gastos de inventario y avalúo son a cargo de la herencia, salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa.

CAPITULO V.

Administración y rendición de cuentas.

SECCION PRIMERA.

Administración.

Art. 633.—El cónyuge supérstite tendrá la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal, con intervención del albacea, y será puesto en ella en cualquier momento en que la pida, aunque antes la haya tenido el albacea u otra persona, sin que por esto pueda empeñarse cuestión alguna.

Contra el auto que otorgue la posesión y administración al cónyuge, no se admitirá ningún recurso; contra el que la niegue habrá el de apelación en ambos efectos.

Art. 634.—En el caso del artículo anterior, la intervención del albacea se concretará a vigilar la administración del cónyuge, y, en cualquier momento en que observe que no se hace convenientemente, dará cuenta al tribunal, quien citará a ambos a una audiencia, para dentro de los tres días siguientes, y dentro de otros tres resolverá lo que proceda.

Art. 635.—Si la falta de sucesión depende de que el autor haya declarado no ser suyos los bienes o de otra causa que la impida por intestado, el albacea judicial durará en su encargo hasta que se entreguen los bienes a su legítimo dueño.

Art. 636.—Si la falta de herederos depende de incapacidad legal del nombrado o de renuncia, el al-

albacea judicial durará en su encargo el tiempo señalado en el Código Civil.

Art. 637.—Si por cualquier motivo no hubiere albacea después de un mes de iniciado el juicio sucesorio, podrá el interventor, con autorización del tribunal, intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la sucesión, y contestar las demandas que contra ella se promuevan.

En los casos muy urgentes podrá el juez, aun antes de que se cumpla el término que se fija en el párrafo que antecede, autorizar al interventor para que demande y conteste a nombre de la sucesión. La falta de autorización no podrá ser invocada por terceros.

Art. 638.—El interventor no puede deducir en juicio las acciones que por razón de mejoras, mantención o reparación tenga contra la testamentaria o el intestado, sino cuando haya hecho esos gastos con autorización previa.

Art. 639.—El albacea judicial tendrá el dos por ciento del importe de los bienes, si no exceden de veinte mil pesos; por el excedente de esta suma hasta cien mil pesos, tendrá el uno por ciento, y, si excediere de cien mil pesos tendrá el medio por ciento sobre la cantidad excedente. Los honorarios del interventor se fijarán por juicio pericial.

Art. 640.—El juez abrirá la correspondencia que venga dirigida al difunto, en presencia del secretario y del interventor, en los períodos que se señalen, según las circunstancias. El interventor recibirá la que tenga relación con el caudal, dejándose testimonio de ella en los autos; y el juez conservará la restante para darle, en su oportunidad, el destino correspondiente.

Art. 641.—Todas las disposiciones relativas al interventor regirán respecto del albacea judicial.

Art. 642.—Durante la substanciación del juicio sucesorio no se podrán enajenar los bienes inventariados, sino en los casos previstos en el Código Civil, y en los siguientes:

I.—Cuando los bienes pueden deteriorarse;

II.—Cuando sean de difícil y costosa conservación;

III.—Cuando, para la enajenación de los frutos, se presenten condiciones ventajosas.

Art. 643.—Los libros de cuentas y papeles del difunto se entregarán al albacea, y, hecha la partición, a los herederos reconocidos, observándose, respecto a los títulos, lo prescrito en el capítulo VI siguiente. Los demás papeles quedarán en poder del que haya desempeñado el albaceazgo.

Art. 644.—Aprobados el inventarios y el avalúo de los bienes y terminados todos los incidentes a que uno y otro hayan dado lugar, se procederá a la liquidación del caudal.

SECCION SEGUNDA.

Rendición de cuentas.

Art. 645.—El interventor, el cónyuge, en el caso del artículo 633 y el albacea, están obligados a rendir, dentro de los cinco primeros días de cada año del ejercicio de su encargo, la cuenta de su administración correspondiente al año anterior, pudiendo el juez, de oficio, exigir el cumplimiento de este deber.

Art. 646.—Las cantidades que resulten líquidas se depositarán a disposición del juzgado, en el establecimiento destinado por la ley.

Art. 647.—La garantía otorgada por el interventor y el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración.

Art. 648.—Cuando el que administre no rinda, dentro del término legal, su cuenta anual, será removido de plano. También podrá ser removido, a juicio

del juez y solicitud de cualquiera de los interesados, cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad.

Art. 649.—Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea debe dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios.

Art. 650.—Concluídas las operaciones de liquidación, dentro de los ocho días siguientes presentará el albacea su cuenta general de albaceazgo; si no lo hace se le apremiará por los medios legales, siendo aplicables las reglas de ejecución de sentencia.

Art. 651.—Presentada la cuenta mensual, anual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados, por un término de diez días, para que se impongan de ella.

Art. 652.—Si todos los interesados aprobaren la cuenta o no la impugnaren, el juez la aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no estuvieren conformes, se tramitará el incidente respectivo; pero es indispensable, para que se le dé curso, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común.

El auto que apruebe o repruebe la cuenta es apelable en el efecto devolutivo.

CAPITULO VI.

Liquidación y partición de la herencia.

Art. 653.—El albacea, dentro de los quince días de aprobado el inventario, presentará al juzgado un proyecto para la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos y legatarios, en proporción a su haber. La distribución de los productos se hará en efectivo o en especie.

Art. 654.—Presentado el proyecto, mandará el juez ponerlo a la vista de los interesados por cinco días.

Si los interesados están conformes o nada exponen dentro del término de la vista, lo aprobará el juez y mandará abonar a cada uno la porción que le corresponda. La disconformidad expresa se substanciará en forma incidental.

Art. 655.—Cuando los productos de los bienes varíen de bimestre a bimestre, el albacea presentará su proyecto de distribución por cada uno de los períodos indicados. En este caso deberá presentarse el proyecto dentro de los primeros cinco días del bimestre.

Art. 656.—Aprobada la cuenta general de administración, dentro de los quince días siguientes presentará el albacea el proyecto de partición de los bienes, en los términos que dispone el Código Civil y con sujeción a este capítulo, o, si no hiciere por sí mismo la partición, lo manifestará al juez, dentro de los tres días de aprobada la cuenta, a fin de que se nombre contador que haga aquélla.

Art. 657.—Será separado de plano el albacea en los siguientes casos: 1º Si no presentare el proyecto de partición dentro del término indicado en el artículo anterior o dentro de la prórroga que le concedan los interesados, por mayoría de votos; 2º Cuando no haga la manifestación a que se refiere el final del artículo anterior, dentro de los tres días que sigan a la aprobación de la cuenta; 3º Si no presentare el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, dentro de los plazos mencionados en los artículos 653 y 655, y 4º Cuando, durante dos bimestres consecutivos, sin justa causa, deposite de cubrir a los herederos o legatarios las porciones y frutos correspondientes.

Art. 658.—Tienen derecho a pedir la partición de la herencia:

I.—El heredero que tenga la libre disposición de los bienes, en cualquier tiempo en que lo solicite, siempre que hayan sido aprobados los inventarios y rendida la cuenta de administración; puede, sin em-

bargo, hacerse la partición antes de la rendición de cuentas o de su aprobación, si así lo conviniere la mayoría de los herederos, estando cubierto o asegurado el interés fiscal.

II.—Los herederos bajo condición, luego que se haya cumplido ésta;

III.—El cesionario del heredero y el acreedor de un heredero que haya trabado ejecución en los derechos que tenga en la herencia, siempre que hubiere obtenido sentencia de remate y no haya otros bienes con qué hacer el pago;

IV.—Los coherederos del heredero condicional, siempre que aseguren el derecho de éste, para el caso de que se cumpla la condición, hasta saberse que ésta ha faltado o no puede ya cumplirse, y sólo por lo que respecta a la parte en que consista el derecho pendiente. El albacea o el contador partidador en su caso, proveerá al aseguramiento del derecho pendiente;

V.—Los herederos del heredero que muera antes de la partición.

Art. 659.—Cuando el albacea no haga la partición por sí mismo, promoverá, dentro del tercer día de aprobada la cuenta, la elección de un contador o abogado con título oficial registrado en el asiento del tribunal, para que haga la división de los bienes. El juez convocará a los herederos, por medio del correo certificado, a junta, dentro de los tres días siguientes, a fin de que se haga en su presencia la elección,

Si no hubiere mayoría, el juez nombrará partidador, eligiéndolo entre los propuestos.

El cónyuge, aunque no tenga el carácter de heredero, será tenido como parte, si entre los bienes hereditarios hubiere bienes de la sociedad conyugal.

Art. 660.—El juez pondrá a disposición del partidador los autos, y bajo inventario, los papeles y documentos relativos al caudal, para que proceda a la partición, señalándole un término, que nunca excederá de veinticinco días, para que presente el proyecto par-

itorio, bajo el apercibimiento de perder los honorarios que devengare y ser separado de plano de su enlargo.

Art. 661.—El partidor pedirá a los interesados las instrucciones que juzgue necesarias a fin de haber las adjudicaciones de conformidad con ellos, en todo lo que estén de acuerdo, o de conciliar, en lo posible, sus pretensiones.

Puede ocurrir al juez para que, por correo certificado los cite a una junta, a fin de que en ella los interesados fijen, de común acuerdo, las bases de la partición, que se considerará como un convenio. Si no hubiere conformidad, el partidor se sujetará a los principios legales.

En todo caso, al hacerse la división se separarán los bienes que correspondan al cónyuge que sobreviva, conforme a las capitulaciones matrimoniales o a las disposiciones que regulan la sociedad conyugal.

Art. 662.—El proyecto de partición se sujetará en todo caso a la designación de partes que hubiere hecho el testador.

A falta de convenio entre los interesados, se incluirán en cada porción bienes de la misma especie, si fuere posible.

Si hubiere bienes gravados, se especificarán los gravámenes, indicando el modo de redimirlos o dividirlos entre los herederos. Lo mismo se hará cuando se graven bienes, en el caso de la fracción IV del artículo 658, para garantizar la porción del heredero condicional.

Art. 663.—Concluido el proyecto de partición, el juez lo mandará poner a la vista de los interesados, en la secretaría, por un término de diez días.

Vencido el término, sin hacerse oposición, el juez probará el proyecto y dictará sentencia de adjudicación, mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados, con los títulos de

propiedad, después de ponerse en ellos, por el secretario, una nota en que se haga constar la adjudicación.

Art. 664.—Si se dedujese oposición contra el proyecto, se sustanciará en forma incidental, procurando que, si fueren varias, la audiencia sea común y a ella concurrirán los interesados y el partidor, para que se discutan las cuestiones promovidas, y se reciban pruebas.

Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concretamente cuál sea el motivo de la disconformidad, y cuáles las pruebas que se invocan como base de la oposición.

Si los que se opusieren dejaren de asistir a la audiencia, se les tendrá por desistidos.

Art. 665.—Todo legatario de cantidad tiene derecho de pedir que se le apliquen en pago bienes de la herencia, y a ser considerado como interesado en las diligencias de partición.

Art. 666.—Pueden oponerse a que se lleve a efecto la partición:

I.—Los acreedores hereditarios legalmente reconocidos, mientras no se paguen sus créditos, si ya estuvieren vencidos, y, si no lo estuvieren, mientras no se les asegure debidamente el pago;

II.—Los legatarios de cantidad, de alimentos, de educación y de pensiones, mientras no se les pague o se garantice legalmente el derecho.

Art. 667.—La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que, por su naturaleza o cuantía, la ley exige para su venta. El notario ante el que se otorgare la escritura será designado por el juez.

Art. 668.—La escritura de partición, cuando haya lugar a su otorgamiento, deberá contener, además de los requisitos legales:

I.—Los nombres, medidas y linderos de los predios adjudicados, con expresión de la parte que cada here-

dero adjudicatario tenga obligación de devolver, si el precio de la cosa excede al de su porción, o de recibir, si falta;

II.—La garantía especial que, para la devolución del exceso, constituya el heredero, en el caso de la fracción que precede;

III.—La enumeración de los muebles o cantidades repartidas;

IV.—Noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas o repartidas;

V.—Expresión de las cantidades que algún heredero quede reconociendo a otro, y de la garantía que se haya constituido;

VI.—Las firmas de todos los interesados.

Art. 669.—La sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos, cuando el monto del caudal exceda de mil pesos.

CAPITULO VII.

Transmisión hereditaria del patrimonio familiar.

Art. 670.—En todo lo relativo a la sucesión de los bienes del patrimonio familiar, se observarán las disposiciones de este título, que no se opongan a las siguientes reglas:

I.—Con la certificación de la defunción del autor de la herencia, se acompañarán los comprobantes de la constitución del patrimonio familiar y su registro; así como el testamento o la denuncia del intestado;

II.—El inventario y avalúo se harán por el cónyuge que sobreviva o el albacea, si estuviere designado, y, en su defecto, por el heredero que sea de más edad; el avalúo deberá ser firmado por un perito oficial o, en su defecto, por cualquier comerciante de honorabilidad reconocida;

III.—El juez convocará a junta a los interesados, nombrando en ella tutores especiales a los menores que no tuvieren representante legítimo, o cuando el

interés de éstos fuere opuesto al de aquéllos, y procurará ponerlos de acuerdo sobre la forma de hacer la partición. Si no logra ponerlos de acuerdo, nombrará como partidador a un empleado oficial, capacitado para ello y que disfrute sueldo del Erario, para que, en el término de cinco días, presente el proyecto de partición, que dará a conocer a los interesados, en una nueva junta a que serán convocados por correo certificado.

En esa misma audiencia oírán y decidirá las oposiciones, mandando hacer la adjudicación;

IV.—Todas las resoluciones se harán constar en actas, y no se requieren peticiones escritas de parte interesada para la tramitación del juicio, con excepción de la denuncia del intestado, que se hará con copia para dar aviso al Fisco;

V.—El acta o actas en que consten las adjudicaciones pueden servir de título a los interesados.

CAPITULO VIII.

Tramitación por notarios.

Art. 671.—Cuando todos los herederos fueren mayores de edad y hubieren sido instituidos en un testamento público, la testamentaria podrá ser extrajudicial, con intervención de un notario, mientras no hubiere controversia alguna; con arreglo a lo que se establece en los artículos siguientes.

Art. 672.—El albacea, si lo hubiere, y los herederos, exhibiendo la partida de defunción del autor de la herencia y un testimonio del testamento, se presentarán ante un notario para hacer constar que aceptan la herencia, que se reconocen sus derechos hereditarios y que el albacea va a proceder a formar el inventario de los bienes de la herencia.

El notario dará a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado.

Art. 673.—Practicado el inventario por el alba-

ya y estando conformes con él todos los herederos, presentarán al notario para que lo protocolice.

Art. 674.—Formado por el albacea, con la aprobación de los herederos, el proyecto de partición de la herencia, lo exhibirán al notario, quien efectuará su protocolización.

Siempre que haya oposición de algún aspirante a la herencia o de cualquier acreedor, el notario suspenderá su intervención.

Art. 675.—Cuando todos los herederos fueren mayores de edad y hubieren sido reconocidos judicialmente con tal carácter en un intestado, éste podrá seguirse tramitando con intervención de un notario, de acuerdo con lo que se establece en este capítulo.

CAPITULO IX.

Disposiciones sobre testamentarias e intestados cuyo caudal aparente no exceda de mil pesos.

Art. 676.—Si hubiere herederos notorios y conocidos, se omitirán los edictos en caso de intestado; si no los hubiere, se publicará la convocatoria solamente en el lugar del juicio y en el del nacimiento del autor de la herencia.

Art. 677.—Las oposiciones que se hagan a la declaración de herederos, incluso las del Ministerio Público, se substanciarán en la forma de incidente.

Art. 678.—Los inventarios que los albaceas han de formar, así en las testamentarias como en los intestados, se harán por simples memorias, quedando en todo caso sujetos a la aprobación judicial, previa audiencia de los interesados. No habrá necesidad de publicar edictos, citando a los herederos para la formación de inventarios.

Art. 679.—El término ordinario para formar los inventarios, será el de quince días, el que podrá prorrogar el juez, en caso necesario, hasta por dos meses.

Art. 680.—Para el examen y aprobación de los inventarios, lo mismo que para el de las cuentas de albaceazgo y partición, no se correrán traslados; sino que sólo se pondrán los cuadernos relativos en la secretaría del juzgado, a la vista de los interesados, por el término que el juez señale y que no podrá exceder de diez días, a fin de que se enteren y hagan a su tiempo las promociones que a su derecho convengan. Concluído el término se les citará a junta, la que se verificará dentro de tercero día, y en ella expresarán su conformidad o disconformidad y las razones en que la funden. Si hubiere acuerdo, se procederá conforme a lo convenido; y si no, se substanciará la controversia por el procedimiento incidental.

Art. 681.—Para la venta de bienes que deba hacerse en subasta pública, porque la ley exija esta formalidad, sólo se publicarán edictos en el Periódico Oficial, o en otro que tenga bastante circulación, a juicio del juez; y si, por falta de postores en la primera almoneda hubiere de repetirse ésta, bastará que se anuncie con tres días de anticipación, por medio de rotulones en la puerta del juzgado.

Art. 682.—Los herederos o legatarios, así como los acreedores y demás personas a quienes, por cualquiera causa, se adjudiquen bienes de la herencia, reconocerán sobre los que se les hayan aplicado el exceso del precio que no paguen al contado, con el interés de un nueve por ciento anual y por el término de un año, que no podrá prorrogarse, sino por convenio de los interesados.

Art. 683.—No será necesario protocolizar la partición ni reducirla a escritura pública; pero, si hubiere menores o incapacitados, se requiere la aprobación judicial. Las copias certificadas de esta resolución con los insertos de la partición o convenio correspondiente, debidamente registradas, servirán de título legal para acreditar el dominio.

Art. 684.—En todo lo que no estuviere especial-

mente determinado por este capítulo, se observarán las demás reglas establecidas en este título.

CAPITULO X.

Testamento público cerrado.

Art. 685.—Para la apertura del testamento cerrado, los testigos reconocerán separadamente sus firmas y el pliego que lo contenga. El representante del Ministerio Público asistirá a la diligencia.

Art. 686.—Cumplido lo prescrito en sus respectivos casos por el Código Civil el juez, en presencia del notario, testigos, representante del Ministerio Público y secretario, abrirá el testamento, lo leerá para sí y, después, le dará lectura en voz alta omitiendo lo que debe permanecer en secreto.

En seguida firmarán al margen del testamento las personas que hayan intervenido en la diligencia, con el juez y el secretario, y se le pondrá el sello del juzgado, asentándose acta de todo ello.

Art. 687.—Será preferida, para la protocolización de todo testamento cerrado, la notaría del lugar en que haya sido abierto, y, si hubiere varias, se preferirá la que designe el promovente.

Art. 688.—Si se presentaren dos o más testamentos cerrados de una misma persona, sean de la misma fecha o de diversa, el juez procederá respecto a cada uno de ellos como se previene en este capítulo, y los hará protocolizar en un mismo oficio, para los efectos a que haya lugar, en los casos previstos por el Código Civil.

CAPITULO XI.

Declaración de ser formal el testamento privado.

Art. 689.—A instancia de parte legítima, formulada ante el tribunal del lugar en que se haya otorgado, puede declararse formal el testamento privado de una persona, sea que conste por escrito o sólo de palabra.

Art. 690.—Es parte legítima, para los efectos del artículo anterior:

I.—El que tuviere interés en el testamento;

II.—El que hubiere recibido en él algún encargo del testador.

Art. 691.—Hecha la solicitud, se señalarán día y hora para el examen de los testigos que hayan concurrido al otorgamiento.

Para la información se citará al representante del Ministerio Público, quien tendrá obligación de asistir a las declaraciones de los testigos y repreguntarlos para asegurarse de su veracidad.

Los testigos declararán al tenor del interrogatorio respectivo que se sujetará estrictamente a lo dispuesto en el Código Civil.

Recibidas las declaraciones, el tribunal hará la declaración que corresponda.

Art. 692.—De la resolución que niegue la declaración solicitada pueden apelar el promovente y cualesquiera de las personas interesadas en la disposición testamentaria; de la que acuerde la declaración puede apelar el representante del Ministerio Público.

CAPITULO XII.

Testamento militar.

Art. 693.—Luego que el tribunal reciba, por conducto del Secretario de Guerra, el parte a que se refiere el Código Civil, citará a los testigos que estuvieren en el lugar, y, respecto a los ausentes, mandará exhorto al tribunal del lugar donde se hallen.

Art. 694.—De la declaración judicial se remitirá copia autorizada al Secretario de Guerra.

En lo demás se observará lo dispuesto en el capítulo que antecede.

CAPITULO XIII

Testamento marítimo

Art. 695.—Hechas las publicaciones que ordena

el Código Civil, podrán los interesados ocurrir al tribunal competente para que pida a la Secretaría de Relaciones Exteriores la remisión del testamento, o directamente a ésta para que lo envíe.

TITULO TERCERO.

CAPITULO UNICO.

Divorcio por mutuo consentimiento.

Art. 696.—Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse voluntariamente, deberán ocurrir al tribunal competente, presentando una copia certificada del acta del matrimonio y de las de nacimiento de sus hijos menores.

Art. 697.—Presentada la solicitud, citará el juez a los cónyuges y al representante del Ministerio Público a una junta, que se efectuará después de ocho días y antes de quince, contados a partir de la presentación de la demanda. Si no asisten los cónyuges a esta junta, se les considerará desistidos de sus pretensiones y se mandará archivar el juicio. Si asistieren, procurará el juez reconciliarlos. Si logra la reconciliación, en el acta en que se haga constar se ordenará el archivo del expediente; si no la logra, con audiencia del Ministerio Público acordará provisionalmente lo relativo a la situación de los hijos menores o incapacitados y dictará las medidas necesarias para el aseguramiento de alimentos, y citará, además, a los cónyuges, a una nueva junta, que se efectuará después de ocho y antes de quince días de verificada la primera. Si en esta junta tampoco se lograre la reconciliación, se resolverá en ella definitivamente sobre la situación de los hijos menores o incapacitados y sobre los alimentos definitivos, con audiencia del Ministerio Público, y se dictará sentencia en que se ordene la disolución del vínculo matrimonial.

Si los cónyuges no asistieren a esta nueva junta, se les considerará desistidos y se ordenará el archivo del juicio.

Art. 698.—El cónyuge menor de edad necesita de un tutor especial para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento.

Art. 699.—En las juntas de que trata el artículo 697 deben comparecer personalmente los cónyuges, sin ir acompañados de otras personas.

Art. 700.—La sentencia que decrete o niegue el divorcio por mutuo consentimiento es apelable en ambos efectos.

Art. 701.—Ejecutoriada la sentencia de divorcio el tribunal mandará remitir copia de ella a la oficina del Registro Civil de su jurisdicción, a la del lugar en que el matrimonio se haya efectuado y a las de los lugares de nacimiento de los divorciados.

TITULO CUARTO.

CAPITULO UNICO.

Declaración de estado de interdicción.

Art. 702.—La declaración de estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de disposición especial de la ley.

Art. 703.—La declaración de estado de interdicción se hará mediante juicio seguido conforme a las disposiciones del Libro Segundo, entre el peticionario y un tutor interino que para tal objeto nombre el juez a la persona cuya interdicción se pida.

El nombramiento de tutor interino deberá recaer, por su orden, en las personas siguientes, si tuvieren la aptitud para desempeñarlo: cónyuge, padre, hijos, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si hubiere varios hijos o hermanos serán preferidos los de mayor edad. Si hubiere abuelos maternos y paternos se preferirá a los varones, y, en caso de ser del mismo sexo, los que lo sean por parte del padre a los que lo fueren por parte de la madre.

En caso de no haber ninguna de las personas indicadas o no siendo aptas para la tutela, el juez, con

todo escrúpulo, debe designar como tutor interino a persona de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del incapacitado o de sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependencia con el solicitante de la declaración.

Art. 704.—En el juicio a que se refiere el artículo anterior se observarán las siguientes reglas:

I.—Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente, previa autorización judicial;

II.—El estado de demencia puede probarse por testigos o documentos; pero, en todo caso, se requiere la certificación de tres médicos, por lo menos, preferentemente alienistas. El tutor puede nombrar un médico para que tome parte en la audiencia y se oiga su dictamen;

III.—Si la sentencia de primera instancia fuere declaratoria de estado, proveerá el juez, aunque fuere apelada o antes, si hubiere necesidad urgente, a la tutela de las personas que estuvieren bajo la guarda del presunto incapacitado, y a nombrar curador que vigile los actos del tutor interino, en la administración de los bienes y cuidado de la persona;

IV.—Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción se proveerá a discernir el cargo al tutor propietario, en los términos de ley.

LIBRO CUARTO.

Jurisdicción voluntaria.

TITULO UNICO.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Art. 705.—La jurisdicción voluntaria comprende

todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.

Art. 706.—Cuando **fuere** necesaria la audiencia de alguna persona, se la citará conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría del juzgado, para que se imponga de ellas y señalándole día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promoviente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella la falta de asistencia de éste.

Art. 707.—Se oirá precisamente al Ministerio Público:

I.—Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos;

II.—Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados;

III.—Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente;

IV.—Cuando lo dispusieren las leyes.

Art. 708.—Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.

Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor.

Art. 709.—El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa.

No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución.

Art. 710.—Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente, o llamado por el juez.

La substanciación de las apelaciones en jurisdicción voluntaria se ajustará a los trámites establecidos para los incidentes, no siendo necesaria la expresión de agravios.

CAPITULO II.

Nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de estos cargos.

Art. 711.—Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare el estado de minoridad o de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Lo dispuesto sobre tutela es aplicable, en lo conducente, a la curatela.

La declaración de estado de minoridad puede pedirse por el mismo menor, si ha cumplido diez y seis años; por su cónyuge; por sus presuntos herederos legítimos, y por el Ministerio Público.

Art. 712.—Si a la petición de declaración de minoridad se acompaña la certificación del registro civil, se hará la declaración de plano. En caso contrario se citará inmediatamente a una audiencia, dentro del tercer día, a la que concurrirá el menor, si fuere posible, y el Ministerio Público. En ella, con o sin asistencia de éste, y por las certificaciones del registro civil, si hasta este momento se presentaren, o por el aspecto del menor, a falta de testigos, se hará o denegará la declaración correspondiente.

Art. 713.—Todo tutor, cualquiera que sea su clase, debe aceptar previamente y prestar las garantías exigidas por el Código Civil para que se le discierna el cargo, a no ser que la ley lo exceptuare expresamente.

El tutor debe manifestar si acepta o no el cargo dentro de los cinco días que sigan a la notificación de su nombramiento. En igual término debe proponer sus impedimentos o excusas, disfrutando un día más por cada cuarenta kilómetros que medien entre su domicilio y el lugar de la residencia del juez competente.

Cuando el impedimento o la causa legal de excusa ocurrieren después del discernimiento de la tutela, los términos correrán desde el día en que el tutor conoció el impedimento o la causa legal de excusa.

La aceptación o el transcurso de los términos en su caso, importan renuncia de la excusa.

Art. 714.—El menor podrá oponerse al nombramiento de tutor hecho por la persona que, no siendo ascendiente, le haya instituído heredero o legatario, cuando tuviere diez y seis años o más.

Art. 715.—Siempre que el tutor o curador nombrados, no reúnan los requisitos que la ley exige para ser tutor o curador, el juez denegará el discernimiento del cargo y proveerá el nombramiento en la forma y términos prevenidos por el Código Civil.

Art. 716.—En los juzgados de primera instancia habrá un registro en que se pondrá testimonio simple de todos los discernimientos que se hicieren del cargo de tutor y curador.

Art. 717.—Dentro de los ocho primeros días de cada año, en audiencia pública, con citación del Ministerio Público, se procederá a examinar dicho registro, y, ya en su vista, se dictarán las siguientes medidas:

I.—Si resultare haber fallecido algún tutor, se hará que sea reemplazado con arreglo a la ley;

II.—Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada para darle destino determinado, se hará que desde luego tengan cumplido efecto las prescripciones del Código Civil;

III.—Se exigirá también que rindan cuenta los tutores que deban darla y que, por cualquier motivo,

no hayan cumplido con las prescripciones expresas del Código Civil;

IV.—Se obligará a los tutores a que depositen, en el establecimiento destinado al efecto, los sobrantes de las rentas o productos del caudal de los menores, después de cubiertas las sumas señaladas con arreglo al Código Civil, y de pagado el tanto por ciento de administración;

V.—Se pedirán las noticias que se estimen necesarias, del estado en que se halle la gestión de la tutela, y se adoptarán las medidas que se juzguen convenientes para evitar los abusos, y remediar los que puedan haberse cometido.

Art. 718.—En todos los casos de impedimento, separación o excusa del tutor o curador propietarios, se nombrará tutor o curador interino, mientras se decide el punto. Resuelto, se nombrará, en su caso, nuevo tutor o curador, conforme a derecho.

Art. 719.—Cuando, del examen de la cuenta, resulten motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa en el tutor, se iniciará desde luego a petición de parte o del Ministerio Público, el juicio de separación que se seguirá conforme a las disposiciones del Libro Segundo, y sí, de los primeros actos del juicio, resultaren confirmadas las sospechas, se nombrará desde luego un tutor interino, quedando en suspenso, entre tanto, el tutor propietario, sin perjuicio de que se remita testimonio de lo conducente a las autoridades penales, en su caso.

CAPITULO III

Enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos.

Art. 720.—Será necesaria licencia judicial para la venta de los bienes que pertenezcan exclusivamente a menores o incapacitados y correspondan a las clases siguientes: 1ª Bienes raíces; 2ª Derechos reales; 3ª Alhajas y muebles preciosos, y 4ª Acciones de

compañías industriales o mercantiles, cuyo valor exceda de cinco mil pesos. 00086

Art. 721.—Para decretar la venta de bienes se necesita que, al pedirse, se expresen el motivo de la enajenación y el objeto a que debe aplicarse la suma que se obtenga, y que se justifique la absoluta necesidad o la evidente utilidad de la enajenación.

Si fuere el tutor quien solicitare la venta, debe proponer, al hacer la promoción, las bases del remate en cuanto a la cantidad que deba darse de contado, el plazo, interés y garantías del remanente.

La solicitud del tutor se substanciará en forma de incidente con el curador y el Ministerio Público. La sentencia que se dicte es apelable en ambos efectos.

Los peritos que se designen para hacer el avalúo serán nombrados por el juez.

Art. 722.—Respecto de las alhajas y muebles preciosos, el juez determinará si conviniere o no la subasta, atendiendo en todo a la utilidad que resulte al menor; si se decreta, se hará por conducto del monte de piedad; de lo contrario, se procederá conforme al artículo 545.

El remate de los inmuebles se hará conforme a los artículos 516 y siguientes, y en él no podrá admitirse postura que baje de las dos tercias partes del avalúo pericial, ni la que no se ajuste a los términos de la autorización judicial.

Si en la primera almoneda no hubiere postor, el juez convocará, a solicitud del tutor o curador, a una junta, dentro del tercer día, para ver si son de modificarse o no las bases del remate, señalándose nuevamente las almonedas que fueren necesarias.

Art. 723.—Para la venta de acciones y títulos de renta se concederá la autorización sobre la base de que no se haga por menor valor del que se cotece en la plaza el día de la venta, y por conducto de corredor titulado, y, si no lo hay, de comerciante establecido y acreditado.

Art. 724.—El precio de la venta se entregará al tutor, si las fianzas o garantías prestadas son suficientes para responder de él. De otra manera se depositará en el establecimiento destinado al efecto.

El juez señalará un término prudente al tutor para que justifique la inversión del precio de la enajenación.

Art. 725.—Para la venta de los bienes inmuebles del hijo o de los muebles preciosos, requerirán, los que ejercen la patria potestad, la autorización judicial en los mismos términos señalados en el artículo 721. El incidente se substanciará con el Ministerio Público y con un tutor especial que, para el efecto, nombre el juez desde las primeras diligencias. La base de la primera almoneda, si es bien raíz, será el precio fijado por los peritos, y la postura legal no será menor de los dos tercios de ese precio.

Bajo las mismas condiciones podrán gravar los padres los bienes inmuebles de sus hijos o consentir la extinción de derechos reales.

Art. 726.—Para recibir dinero prestado en nombre del menor o incapacitado, necesita el tutor la conformidad del curador y la autorización judicial.

Art. 727.—Lo dispuesto en los artículos que preceden se aplicará al gravamen y enajenación de los bienes de ausentes, así como la transacción y arrendamiento por más de cinco años de bienes de ausentes, menores o incapacitados.

CAPITULO IV.

Adopción.

Art. 728.—El que pretenda adoptar a alguna persona, deberá acreditar los requisitos exigidos por la Ley Civil.

En la promoción inicial deberá manifestar el nombre y edad del menor o incapacitado, y el nombre y domicilio de quienes ejerzan sobre él la patria potes-

tad o la tutela o de las personas o institución de beneficencia que lo hayan acogido.

00087

Art. 729.—Rendidas las justificaciones que exigen en el artículo anterior y obtenido el consentimiento de las personas que deben darlo conforme al Código Civil, el tribunal resolverá dentro de tercera día.

Art. 730.—Cuando el adoptante y el adoptado pidan que la adopción sea revocada, el juez los citará a una audiencia verbal, para dentro de los tres días siguientes, en la que resolverá conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

Si el adoptado fuere menor de edad, no se decretará la revocación sin recabar el consentimiento de quienes lo prestaron para la adopción y sin oír al representante del Ministerio Público.

Para acreditar cualquier hecho relativo a la conveniencia de la revocación, en los casos del artículo anterior, pueden rendirse toda clase de pruebas.

CAPITULO V.

Informaciones ad perpetuam.

Art. 731.—Las informaciones ad perpetuam podrán decretarse cuando no tenga interés más que el promovente y se tratè:

I.—De justificar algún hecho o acreditar un derecho;

II.—Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble, y

III.—Cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real.

En los casos de las dos primeras fracciones, la información se recibirá con citación del Ministerio Público, y, en el de la tercera, con la del propietario o de los demás partícipes del derecho real.

El Ministerio Público y las personas con cuya

Elación se reciba la información, pueden tachar a los testigos por circunstancias que afecten su credibilidad.

Art. 732.—El juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes para asegurarse de la veracidad de su dicho.

Art. 733.—Si los testigos no fueren conocidos del juez o del secretario, la parte deberá presentar dos que abonen a cada uno de los presentados.

Art. 734.—Las informaciones se protocolizarán en el protocolo del notario que designe el promovente.

Art. 735.—En ningún caso se admitirán, en jurisdicción voluntaria, informaciones de testigos sobre hechos que fueren materia de un juicio comenzado.

CAPITULO VI

Apeo y deslinde.

Art. 736.—El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros, o que, habiéndose fijado, hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan destruído las señales que los marcaban, o porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo.

Art. 737.—Tiene derecho para promover el apeo:

I.—El propietario;

II.—El poseedor con título bastante para transferir el dominio;

III.—El usufructuario.

Art. 738.—La petición de apeo debe contener:

I.—El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse;

II.—La parte o partes en que el acto debe ejecutarse;

III.—Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo;

IV.—El sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y, si éstas no existen, el lugar donde estuvieron;

V.—Los planos y demás documentos que ⁰⁰⁰³⁸vengan a servir para la diligencia, y designación de un perito por parte del promovente.

Art. 739.—Hecha la promoción, el juez mandará hacerla saber a los colindantes para que, dentro de tres días, presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren perito, si quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde.

Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación, cada uno, a la hora de la diligencia.

Art. 740.—El día y hora señalados, el juez, acompañado del secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, procederá conforme a las reglas siguientes:

I.—Practicará el apeo, asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieren los interesados;

II.—La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente, en el acto, un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad;

III.—El juez, al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará posesión al promovente del predio que quede comprendido dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando;

IV.—Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que, conforme a sus títulos, quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los

testigos de indentificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si ésto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados, para que los hagan valer en el juicio correspondiente;

V.—El juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales.

Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente.

Art. 741.—Los gastos generales del apeo se harán por el que lo promueva. Los que importen la intervención de los peritos que designen y de los testigos que presenten los colindantes, serán pagados por el que nombre a los unos o presente a los otros.

CAPITULO VII.

Disposiciones relativas a otros actos de jurisdicción voluntaria.

Art. 742.—Se tramitará en la forma de incidente, que habrá de seguirse con el Ministerio Público, en todo caso:

I.—La habilitación para comparecer en juicio que solicite el menor de más de dieciocho años, cuando compruebe que los padres o ascendientes que ejerzan la patria potestad, están ausentes, se ignore su paradero o se nieguen a representarlo. Sólo se le concederá autorización cuando fuere demandado o se le siguiere perjuicio grave de no promover juicio, y comprobare buena conducta y aptitud para el manejo de sus negocios;

II.—La solicitud de emancipación o habilitación de edad que hagan los mayores de dieciocho años sujetos a patria potestad o tutela, si demostraren buena conducta y aptitud para el manejo de sus intereses. En este caso se oirá también a los padres o tutores;

III.—La autorización judicial que soliciten los emancipados o habilitados de edad para enajenar o gravar bienes raíces o para comparecer en juicio; en este último caso se les nombrará un tutor especial;

IV.—El permiso que para contratar con su marido o para obligarse solidariamente con él o ser su fiadora, en los casos permitidos por la ley, solicite la mujer casada;

V.—La calificación de la excusa de la patria potestad, en los casos a que se refiere el Código Civil.

Art. 743.—Podrá decretarse el depósito de menores o incapacitados que se hallen sujetos a la patria potestad o a tutela y que fueren maltratados por sus padres o tutores o reciban de éstos ejemplos perniciosos, a juicio del juez, o sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las leyes, y de huérfanos o incapacitados que queden en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona a cuyo cargo estuvieren.

La mujer menor de edad que, deseando contraer matrimonio, necesite acudir a la autoridad competente para suplir el consentimiento de sus padres, puede solicitar su depósito.

En ambos casos no son necesarias formalidades de ninguna clase, asentándose solamente en una o más actas las diligencias del día.

Art. 744.—Los actos de jurisdicción voluntaria que no estén especialmente reglamentados, se sujetarán a las disposiciones del Capítulo I de este Título.

TRANSITORIOS.

Art. 1º—Este Código comenzará a regir el día primero de abril de 1934.

Art. 2º—Desde esa misma fecha quedan abrogadas todas las leyes anteriores sobre la materia, con las salvedades de los artículos siguientes.

Art. 3º—Todos los negocios en tramitación ante los tribunales, al entrar en vigor este Código, continuarán rigiéndose por las leyes anteriores, con excepción de la caducidad, la que operará en todos ellos, debiendo comenzar a contarse los plazos respectivos al entrar en vigor este Ordenamiento.

Art. 4º—Las modificaciones de competencia que este Código establece no surtirán efectos en los negocios en trámite al entrar en vigor, sino que éstos se continuarán ante los tribunales que sean competentes conforme a las leyes anteriores.

Lo tendrá entendido el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado y dispondrá que se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Guanajuato, a los 9 días del mes de enero de 1934. Ing. Manuel G. Aranda, D. P.—Jorge Lámbarri, D. S. Pascual Urtaza, D. S.”

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio de los Poderes, en la ciudad de Guanajuato, a los 22 veintidós días del mes de enero de 1934 mil novecientos treinta y cuatro.

Melchor ORTEGA.

El Secretario Gral. del Gobierno,

Lic. Ramón SANTOYO.

INDICE.

PAGINA.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

LIBRO PRIMERO.

Disposiciones Generales.

TITULO PRIMERO.

Partes.

Capítulo I.

Personas que pueden intervenir en un procedimiento judicial 13

Capítulo II.

Obligaciones y responsabilidades de las partes 15

TITULO SEGUNDO.

Autoridad Judicial.

Capítulo I.

Competencia 17

Sección Primera.

Competencia por materia 18

Sección Segunda.

Competencia Territorial 19

Sección Tercera.

Substanciación de las competencias 21

	PAGINA
Capítulo II.	
Impedimentos	23
Sección Primera.	
Excusas	25
Sección Segunda.	
Recusaciones	26
Capítulo III.	
Facultades y obligaciones de los funcionarios judiciales.	
Sección Primera.	
Juez	27
Sección Segunda.	
Secretario	29
Sección Tercera.	
Ministro ejecutor	30
TITULO TERCERO.	
Capítulo Unico.	
Litigio	30
TITULO CUARTO.	
Prueba.	
Capítulo I.	
Reglas generales	33
Capítulo II.	
Confesión	36
Capítulo III.	
Documentos públicos y privados	42
Capítulo IV.	
Prueba pericial	44
Capítulo V.	
Reconocimiento o inspección judicial	48
Capítulo VI.	
Prueba testimonial	49

	PAGINA.
Capítulo VII.	
Fotografías, escritos o notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia	53
Capítulo VIII.	
Presunciones	53
Capítulo IX.	
Valuación de la prueba	54
TITULO QUINTO.	
Capítulo Unico.	
Resoluciones judiciales	59
TITULO SEXTO.	
Recursos.	
Capítulo I.	
Revocación	61
Capítulo II.	
Apelación y revisión forzosa	61
Capítulo III.	
Denegada apelación	67
Capítulo IV.	
Disposiciones comunes	69
TITULO SEPTIMO.	
Actos procesales en general.	
Capítulo I.	
Formalidades judiciales	70
Capítulo II.	
Tiempo y lugar en que han de verificarse los actos judiciales	72
Capítulo III.	
Notificaciones	77
LIBRO SEGUNDO.	
Contención.	

TITULO PRIMERO.	
Juicio.	
<i>Capítulo I.</i>	
Demanda	81
<i>Capítulo II.</i>	
Emplazamiento.....	83
<i>Capítulo III.</i>	
Contestación de la demanda.....	84
<i>Capítulo IV.</i>	
Término probatorio.....	85
<i>Capítulo V.</i>	
Audiencia final del juicio.....	86
<i>Capítulo VI.</i>	
Sentencia.....	87
<i>Capítulo VII.</i>	
Sentencia ejecutoria	89
TITULO SEGUNDO.	
<i>Capítulo Unico.</i>	
Incidentes.....	89
TITULO TERCERO.	
Suspensión, interrupción y caducidad del proceso.	
<i>Capítulo I.</i>	
Suspensión	91
<i>Capítulo II.</i>	
Interrupción.....	92
<i>Capítulo III.</i>	
Caducidad.....	92
TITULO CUARTO.	
<i>Capítulo Unico.</i>	
Medidas preparatorias de aseguramiento y precautorias.....	94

TITULO QUINTO.**Capítulo Único.**

Fulcio de paz	99
----------------------------	-----------

TITULO SEXTO.**Ejecución.****Capítulo I.**

Reglas generales	104
-------------------------------	------------

Capítulo II.

Documentos ejecutivos	105
------------------------------------	------------

Capítulo III.

Formas de ejecución	107
----------------------------------	------------

Capítulo IV.

Oposición de terceros a la ejecución	109
---	------------

Capítulo V.

Responsabilidades de las partes en la ejecución	110
--	------------

Capítulo VI.

Embargos	110
-----------------------	------------

Capítulo VII.

Remates	122
----------------------	------------

LIBRO TERCERO.**Procedimientos especiales.****TITULO PRIMERO.****Concursos.****Capítulo I.**

Reglas generales	129
-------------------------------	------------

Capítulo II.

Funciones del Síndico	132
------------------------------------	------------

TITULO SEGUNDO.**Sucesiones.****Capítulo I.**

Disposiciones generales	134
--------------------------------------	------------

Capítulo II.

Testamentarias	141
-----------------------------	------------

	PAGINA
<i>Capítulo III.</i>	
Intestados	142
<i>Capítulo IV.</i>	
Inventario y avalúo	146
<i>Capítulo V.</i>	
Administración y rendición de cuentas.	
<i>Sección Primera.</i>	
Administración	149
<i>Sección Segunda.</i>	
Rendición de cuentas	151
<i>Capítulo VI.</i>	
Liquidación y partición de la herencia	152
<i>Capítulo VII.</i>	
Transmisión hereditaria del patrimonio familiar	157
<i>Capítulo VIII.</i>	
Tramitación por notarios	158
<i>Capítulo IX.</i>	
Disposiciones sobre testamentarias e intestados, cuyo caudal aparente no exceda de mil pesos ..	159
<i>Capítulo X.</i>	
Testamento público cerrado	161
<i>Capítulo XI.</i>	
Declaración de ser formal el testamento privado	161
<i>Capítulo XII.</i>	
Testamento militar	162
<i>Capítulo XIII.</i>	
Testamento marítimo	162
TITULO TERCERO.	
<i>Capítulo Unico.</i>	
Divorcio por mutuo consentimiento	163

PAGINA.

TITULO CUARTO.**Capítulo Unico.**

Declaración de estado de interdicción ----- 164

LIBRO CUARTO.**Jurisdicción voluntaria.****TITULO UNICO.****Capítulo I.**

Disposiciones generales ----- 165

Capítulo II.

Nombramiento de tutores y curadores y discernimiento de estos cargos ----- 167

Capítulo III.

Enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos ----- 169

Capítulo IV.

Adopción ----- 171

Capítulo V.

Informaciones ad-perpetuam ----- 172

Capítulo VI.

Apeo y deslinde ----- 173

Capítulo VII.

Disposiciones relativas a otros actos de jurisdicción voluntaria ----- 175

TRANSITORIOS ----- 176

FE DE ERRATAS

PAGINA.	REGLON.	DICE.	DEBE DECIR.
5	22	actu'es	actuales
20	10	de	del
51	14	litiantes	litigantes
70	1	el	al
133	28	usbstituído	substituído
161	28	efecos	efectos
168	22	el	al
171	26	como la	como a la